

REPUBLICA ARGENTINA

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

67ª REUNIÓN ~ 28ª SESIÓN ORDINARIA (Continuación)
6/7 DE NOVIEMBRE DE 1996

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, doctor CARLOS F. RUCKAUF
y del señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor EDUARDO MENEM

Secretarios: doctor EDGARDO R. PIUZZI
y doctora MATILDE DEL VALLE GUERRERO

Prosecretarios: señor MARIO L. PONTAQUARTO y doctor DONALDO A. DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
AGÚNDEZ, Jorge A.
ALASINO, Augusto
ALMIRÓN, Carlos H.
AVELÍN, Alfredo
BAUM, Daniel
BAUZA, Eduardo
BERHONGARAY, Antonio T.
BITTEL, Deolindo F.
BRANDA, Ricardo A.
CABANA, Fernando V.
CANTARERO, Emilio M.
COSTANZO, Remo J.
DE LA ROSA, Carlos L.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FIGUEROA, José O.
GAGLIARDI, Edgardo J.
GALVÁN, Raúl A.
GENOUD, José
LEÓN, Luis A.
LÓPEZ, Alcides H.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANFREDOTTI, Carlos
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAYA, Héctor M.
MELGAREJO, Juan I.
MENECHINI, Javier R.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOREAU, Leopoldo R. G.
OUDIN, Ernesto R.

OYARZÚN, Juan C.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.
PRETO, Ruggero
QUINZIO, Bernardo P.
REUTEMANN, Carlos A.
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO FERIS, José A.
SÁEZ, José M.
SALA, Osvaldo R.
SALUM, Humberto E.
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAC, Felipe R.
SOLANA, Jorge D.
STORANI, Conrado H.
TELL, Alberto M.
USANDIZAGA, Horacio
VERNA, Carlos A.
VILLARROEL, Pedro G.
VILLASVERDE, Jorge A.
YOMA, Jorge R.
ZALAZAR, Horacio A.

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
CAFIERO, Antonio F.
DE LA SOTA, José M.
FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela
GIOJÁ, José L.
HUMADA, Julio C.
PARDO, Angel F.
VAQUIR, Omar M.

POR ENFERMEDAD:

VACA, Eduardo P.

EN COMISION:

ULLOA, Roberto Augusto

POR SUSPENSION:

ANGELOZ, Eduardo C.

SUMARIO

1. **Manifestación de varios señores senadores.** (Página 6364.)
2. A solicitud del señor senador Storani queda reservado en mesa un proyecto de resolución vinculado con las tarifas telefónicas, para efectuar oportunamente una moción de preferencia. (Pág. 6364.)
3. A moción formulada por el señor senador Alasino, se concede licencia con goce de dieta al señor senador Vaca. Se aprueba. (Pág. 6365.)
4. Continúa la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en varios proyectos de ley sobre ministerio público. (Pág. 6365.)
5. Por indicación de la Presidencia se pasa a cuarto intermedio para constituir la Cámara en tribunal de juicio político. (Pág. 6473.)
6. Continúa la consideración del tema al que se refiere el punto cuatro de este sumario. Se aprueba con modificaciones. (Pág. 6473.)
7. Moción del señor senador Alasino para pasar a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 6499.)
8. **Apéndice:**
 - I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 6499.)
 - II. Inserción. (Pág. 6516.)

—En Buenos Aires, a las 16 y 49 del miércoles 6 de noviembre de 1996:

1

MANIFESTACIONES

Sr. Aguirre Lanari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — En la reunión de presidentes de bloque celebrada ayer acordamos que comenzaría a sonar el timbre a las 15 y 30 y que efectivamente empezaríamos la reunión a las 16, ya que estamos en cuarto intermedio y no necesitamos obtener el quórum respectivo.

Solicito que se inste a los bloques mayoritarios —que son los que definen la tarea de nuestro cuerpo— a que recuerden lo conversado ayer.

Sr. Presidente. — Con mucho gusto vamos a hacerlo, señor senador. Entiendo que debemos comenzar con la votación en particular. Si bien, efectivamente, puede haber oradores que deseen referirse a los distintos artículos sin necesidad de haberse alcanzado el quórum y podría reiniciarse la sesión, éste es necesario al momento de votar cada artículo. Por eso, previamente a concurrir al recinto, realicé gestiones al

respecto. Pero ahora, formalmente y respondiendo a su pedido, por Secretaría y a través de los auxiliares de bloque se solicitará que los señores senadores concurren al recinto según lo pactado ayer en la reunión de presidentes de bloque.

Sr. Aguirre Lanari. — Debemos recordar, señor presidente, que no solamente tenemos que terminar con la votación de este proyecto y seguir con el tratamiento de los numerosos órdenes del día pendientes, sino que también está previsto para las 18 el Tribunal de Juicio Político al juez Trovato.

Sr. Presidente. — Efectivamente.

Sr. Aguirre Lanari. — Se nos van a superponer los horarios.

Sr. Presidente. — Vamos a insistir en los bloques a través de sus respectivos auxiliares, para que con su colaboración iniciemos la reunión.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 4:

Sr. Avelín. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Avelín. — Señor presidente: ¿por qué no intentamos un nuevo llamado a efectos de ver si podemos conseguir quórum para empezar a sesionar? Ocurre que debemos pasar a la consideración en particular del proyecto de ley sobre Ministerio Público.

Creo que quienes estamos ocupando nuestras bancas hace una hora y media merecemos un poco de respeto.

Sr. Presidente. — No hay duda de que todos quienes están aquí sentados merecen respeto.

Con mucho gusto insistiré con los señores presidentes, especialmente de los bloques grandes, para ver si podemos lograr quórum lo antes posible.

Vamos a insistir para ello, a través de los señores auxiliares de bloque, ahora a pedido de dos señores senadores.

—Se continúa llamando.

—A las 17 y 30:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

2

RESERVA DE UN PROYECTO

Sr. Storani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba de la Unión Cívica Radical.

Sr. Storani. — Señor presidente: como esta sesión es continuación de la anterior, en la que pasamos a cuarto intermedio, no hay asuntos entrados.

Sr. Presidente. — Efectivamente, señor senador.

Sr. Storani. — No obstante ello, con nueve señores senadores de mi bancada hemos presentado un proyecto de resolución vinculado con las tarifas telefónicas. Pido que se fije una fecha para tratar con preferencia — con dictamen de comisión — este tema de las tarifas telefónicas, que las dos empresas permisionarias o concesionarias del servicio telefónico están tratando de balancear, según el término que utilizan. Esto se aparta totalmente del pliego de condiciones que aceptaron en su momento, antes de ser adoptado el tema monopólico por parte de las mismas.

Pido que fijemos una fecha para tratar el expediente 2.365, dentro de dos o tres sesiones, con dictamen de comisión.

Sr. Presidente. — La Presidencia reserva el proyecto sobre la mesa para que una vez terminados los tratamientos sobre tablas de los órdenes del día se considere la preferencia que usted solicita.

3

LICENCIA DE SENADOR

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: por las razones que son de público y notorio conocimiento, vinculadas al senador Vaca, solicito que el cuerpo le conceda licencia con goce de dieta hasta que se pueda reintegrar a sus funciones, a fin de normalizar su situación.

Sr. Presidente. — Cuando haya quórum, voy a hacer votar la moción para que se conceda licencia con goce de dieta al señor senador por la Capital, Eduardo Vaca.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción del señor senador por Entre Ríos, a efectos de que el cuerpo conceda licencia por enfermedad, con goce de dieta, al señor senador por la Capital, Eduardo Vaca.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Aprobado, por unanimidad.¹ Se procederá en consecuencia.

¹ Ver el Apéndice.

4

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO (continuación)

Sr. Presidente. — Corresponde comenzar con la consideración en particular del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre ministerio público (Orden del Día 1.217 y dos complementos).

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Interior y Justicia, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, han considerado los expedientes: S.-520/95, de la Rúa y Genoud: reproduce proyecto de ley orgánica del Ministerio Público; S.-668/95, Solana: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-1.350/95, Alasino: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-1.306/95, Bordón y Fadel: proyecto de ley de Ministerio Público; S.-1.910/95, Aguirre Lanari: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-623/96, Fernández Meijide: proyecto de ley sobre Ministerio Público; S.-779/96, Yoma: proyecto de ley orgánica del Ministerio Público; S.-866/96, Almirón: proyecto de ley sobre Ministerio Público; P.-190/95, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional: adjunta anteproyecto de ley sobre Ministerio Público; P.-12/96, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: formula consideraciones acerca del proyecto de ley sobre Ministerio Público; P.E.-500/95, Mensaje 444/95 y proyecto de ley sobre Ministerio Público; P.E.-186/96, Mensaje 596/96 y proyecto de ley reformando la organización del Ministerio Público a fin de unificar la competencia de las fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional y en lo criminal de instrucción; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización e integración del Ministerio Público

CAPITULO I

Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia, en coordinación con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

Posee una organización jerárquica, la cual exige que cada miembro del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Art. 3º — El Ministerio Público Fiscal está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Procurador general de la Nación;
- b) Procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y fiscal nacional de investigaciones administrativas;
- c) Fiscales generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Fiscales generales adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el inciso c);
- e) Fiscales ante los jueces de primera instancia; los fiscales de la Procuración General de la Nación y los fiscales de Investigaciones Administrativas;
- f) Fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 4º — El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Defensor general de la Nación;
- b) Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- c) Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, y los de la Defensoría General de la Nación;
- d) Defensores públicos de menores e incapaces adjuntos y defensores públicos oficiales adjuntos ante los tribunales y del organismo enunciado en el inciso c);
- e) Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos oficiales de primera instancia y de la Defensoría General de la Nación.

Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios, los tutores y curadores públicos cuya actuación regula la presente ley.

CAPÍTULO II

Relación de servicio

Designaciones

Art. 5º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentarán una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado.

Concurso

Art. 6º — La elaboración de la terna se hará de entre los cinco candidatos que seleccione, previo concurso de oposición y antecedentes, un tribunal convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con cuatro (4) magistrados del Ministerio Público con jerarquía no inferior a los cargos previstos en el inciso b) de los artículos 3º y 4º, los cuales serán escogidos otorgando preferencia por quienes se desempeñen en el fuero en el que exista la vacante a cubrir. Será presidido por un magistrado de los enunciados en el artículo 3º, incisos b) y c) o en el artículo 4º, incisos b) y c), según corresponda; salvo cuando el concurso se realice para cubrir cargos de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, fiscal general, defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensor público ante tribunales colegiados, supuestos en los cuales deberá presidir el tribunal examinador, el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso.

Requisitos para las designaciones

Art. 7º — Para ser procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, con título de abogado de validez nacional, con ocho (8) años de ejercicio y reunir las demás calidades exigidas para ser senador nacional.

Para presentarse a concurso para procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; fiscal nacional de Investigaciones Administrativas; fiscal general ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, de la Procuración General de la Nación y de Investigaciones Administrativas; defensor de menores; defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; defensor público de menores e incapaces y defensor público oficial ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única y de la Defensoría General de la Nación, se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad y contar con seis (6) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual

término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos seis años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para ser fiscal general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3º, inciso c); fiscal ante los jueces de primera instancia; fiscal de la Procuración General de la Nación; fiscal de Investigaciones Administrativas; defensor de menores e incapaces adjunto y defensor público oficial adjunto ante los tribunales enunciados en el artículo 4º, inciso c); defensores de la Defensoría General de la Nación; defensor público de menores e incapaces y defensor público oficial de primera instancia, se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro (4) años de antigüedad en el título de abogado.

Para presentarse a concurso para fiscal auxiliar de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad y tener título de abogado de validez nacional.

Juramento

Art. 8º.— Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarse bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensoras lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación —según corresponda— o ante el magistrado que éstos designen a tal efecto.

Incompatibilidades

Art. 9º.— Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

Excusación y recusación

Art. 10.— Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las causales que —a su respecto— prevean las normas procesales.

Sustitución

Art. 11.— En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, serán reemplazados por el procurador fiscal o el defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.

De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

Remuneración

Art. 12.— Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los magistrados enumerados en los incisos b) y c) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de juez de cámara;
- c) Los magistrados mencionados en el inciso d) y e) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
- d) Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia, percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de cámara;
- e) Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.

Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Estabilidad

Art. 13.— Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad. Los magistrados que alcancen la edad indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Estas designaciones se efectuarán por el término de cinco años, y podrán ser repetidas indefinidamente, mediante el mismo procedimiento.

Inmunidades

Art. 14. — Los magistrados del Ministerio Público, gozan de inmunidad de arresto.

No podrán ser molestados o enjuiciados por sus intervenciones en los procesos y por las opiniones que emitan de acuerdo con el regular desempeño de sus funciones.

Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se substanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en que intervengan como tales.

Traslados

Art. 15. — Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. Sólo podrán ser destinados temporalmente a función distintas de las adjudicadas en su designación, cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en los artículos 32, inciso g) y 50, inciso d).

Poder disciplinario

Art. 16. — En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a) Prevención;
- b) Apercibimiento;
- c) Multa de hasta el 20 % de sus remuneraciones.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se registrá por la norma reglamentaria que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, la cual deberá garan-

tizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.

Correcciones disciplinarias en el proceso

Art. 17. — Los jueces y tribunales sólo podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o al defensor general de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

Mecanismos de remoción

Art. 18. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Los restantes magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en esta ley, por las causas de mal desempeño, grave negligencia o por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie.

Tribunal de enjuiciamiento

Art. 19. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete (7) miembros:

- a) Tres vocales deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ex procuradores o defensores generales de la Nación, y serán designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Dos vocales deberán ser abogados de la matrícula federal con no menos de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión, y serán designados uno por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y otro por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal;
- c) Dos vocales deberán ser elegidos por sorteo: uno entre los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o fiscales generales y otro entre los defensores oficiales

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o defensores públicos ante tribunales colegiados.

A los efectos de su subrogación se elegirá igual número de miembros suplentes.

El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, o por su presidente en caso de interponerse una queja ante una denuncia desestimada por alguno de aquéllos. Tendrá su asiento en la Capital Federal y se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán tres (3) años en sus funciones contados a partir de su designación. Aun cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Una vez integrado el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior al fiscal general o defensor público ante los tribunales colegiados, designados por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según la calidad funcional del imputado.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un defensor oficial ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, a opción del imputado.

La intervención como integrante del tribunal, fiscal o defensor de oficio constituirá una carga pública.

Los funcionarios auxiliares serán establecidos, designados y retribuidos en la forma que determine la reglamentación que conjuntamente dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación.

Reglas de procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 20. — El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las siguientes reglas:

- a) La instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento será abierta por decisión del procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, de oficio o por denuncia, fundados en la invocación de hechos que configuren las causales de remoción previstas en esta ley;
- b) Toda denuncia en la que se requiera la apertura de instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, deberá ser presentada ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, quienes podrán darle curso conforme el inciso precedente o desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. En este último caso, el denunciante podrá ocurrir en queja ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de diez días de notificado el

rechazo. La queja deberá presentarse ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, quienes deberán girarla dentro de las cuarenta y ocho (48) horas al Tribunal de Enjuiciamiento para su consideración;

- c) El procedimiento ante el tribunal se realizará conforme la reglamentación que dicten conjuntamente el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y defensa en juicio, así como los principios consagrados en el Código Procesal Penal de la Nación. Sin perjuicio de ello, la reglamentación deberá atenerse a las siguientes normas:

1. El juicio será oral, público, contradictorio y continuo.
El denunciante no podrá constituirse en parte.
2. La prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes.
3. Durante el debate el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. El pedido de absolución no será obligatorio para el tribunal; pudiendo condenar aún en ausencia de acusación fiscal.
4. La sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor de quince (15) días que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate.
5. Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a los resultados del juicio.
Si fuese absuelto y hubiera sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.
6. El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes.
7. La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado. Si se fundare en hechos que puedan configurar delitos de acción pública o ello surgiere de la prueba o aquella ya hubiere sido iniciada, se dará

intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente.

8. La sentencia podrá ser recurrida por el fiscal o el imputado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso deberá interponerse fundadamente por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento, dentro del plazo de treinta (30) días de notificado el fallo. El Tribunal de Enjuiciamiento deberá elevar el recurso con las actuaciones a la Cámara mencionada, dentro de los cinco (5) días de interpuesto.

CAPÍTULO III

Administración general y financiera del Ministerio Público

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades, en relación a sus respectivas facultades de gobierno:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con las demás autoridades de la República;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, de organización funcional, de personal, disciplinarios, y todos los demás que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución y las leyes;
- c) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público;
- d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la comisión bicameral creada por esta ley, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público;
- f) Organizar y dirigir una oficina de recursos humanos y un servicio administrativo-financiero, acreditado y reconocido conforme la normativa del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Autarquía financiera

Art. 22. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el ministerio público contará con crédito presupuestario propio, el que será tendido con cargo a "Rentas generales" y con recursos específicos.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su considera-

ción por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

Relaciones con los Poderes Ejecutivo y Legislativo

Art. 23. — El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.

Ejecución presupuestaria

Art. 24. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones conferidas por los artículos 9º, 34 y 117 de la ley 24.156.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la comisión bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

TÍTULO II

Funciones y actuación

Sección I

Normas generales

Funciones del Ministerio Público

Art. 25. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad;
- b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;
- c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
- d) Promover y ejercer la acción pública civil en los casos previstos por la ley;
- e) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República;
- f) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal;
- g) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o per-

sonas que los tuvieran a su cargo; o hubiera que controlar la gestión de estos últimos;

- h) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales;
- i) Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;
- j) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;
- k) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

Requerimiento de colaboración

Art. 26. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán —para el mejor cumplimiento de sus funciones— ~~requerir~~ ^{requerir} informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados, y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del ministerio público y destinado a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance.

Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— sin perjuicio de las directivas que el juez competente importa a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelán el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A ~~este respecto la prevención actuará~~ ^{este respecto la prevención actuará} bajo su dirección inmediata.

Funciones excluidas

Art. 27. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: la representación del Estado y/o del Fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública; la perse-

cución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Principio de oficialidad

Art. 28. — Cuando se tratare de una acción pública, el ministerio público actuará de oficio.

Deber de informar

Art. 29. — Los integrantes del Ministerio Público, comunicarán al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según corresponda, y por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

Deber de obediencia. Objeciones

Art. 30. — Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del defensor general de la Nación, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del procurador o del defensor general —en su caso—, su criterio disidente, mediante un informe fundado.

Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Informe anual al Congreso

Art. 31. — Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la comisión bicameral creada por esta ley, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia —Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente— el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; una análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

Sección II

Ministerio Público Fiscal

CAPÍTULO I

Del procurador general de la Nación

Art. 32. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal. Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por

medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

El procurador general tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se planteen los siguientes asuntos:

1. Causas en las que se pretenda suscitar la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso.
2. Cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3. Causas en las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entienda a raíz de recursos de apelación ordinaria, en las materias previstas en el artículo 24, inciso 6º, apartados b) y c) del decreto ley 1.285/58.
4. Casos en los que se alegue privación de justicia.
5. Procesos en los que su intervención resulte de normas legales específicas.
6. Causas en las que medien planteos de inconstitucionalidad de las leyes.
7. Causas en las que se encuentre en juego la interpretación de tratados internacionales.

En cuanto ello resulte pertinente a los fines de la intervención que resulta de lo establecido en los puntos que anteceden, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios interpuestos, salvo cuando, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista.

- b) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- c) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- d) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- e) Diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal;

- f) Delegar sus funciones en los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 34 y 35 de esta ley;
- g) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los fiscales que se designen estará sujeta a las directivas del titular;
- h) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- i) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- j) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias; y del modo o forma cómo hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;
- k) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación; los ministros del Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
- l) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- ll) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento;
- m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- n) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;

- ñ) Confeccionar el programa del Ministerio Público Fiscal dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público de la Defensa para su remisión al Congreso de la Nación;
- o) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el Servicio Administrativo Financiero del organismo;
- p) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, al Ministerio Público Fiscal, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- q) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal;
- r) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 39, incisos b) y c) de la presente ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 31; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- s) Representar al Ministerio Público Fiscal en sus relaciones con los tres poderes del Estado;
- t) Aprobar el Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- u) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público Fiscal.

De la Procuración General de la Nación

Art. 33. — La Procuración General de la Nación es la sede de actuación del procurador general de la Nación, como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del ministerio público fiscal.

En dicho ámbito se desempeñarán los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el procurador general de la Nación, tanto en la tarea de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público Fiscal, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el procurador general disponga encomendarles.

De los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 34. — Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste

imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y lo que se establezca por vía reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquellas causas en que así lo resuelva el procurador general de la Nación;
- b) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- c) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- d) Informar al procurador general sobre las causas en que intervienen;
- e) Colaborar con el procurador general en su gestión de gobierno del Ministerio Público Fiscal, en los términos y condiciones enunciados en el artículo precedente.

Fiscales de la Procuración General de la Nación

Art. 35. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga, con los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso g) del artículo 32 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 39 de la presente ley.

Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 36. — Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, tienen los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal;
- c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;

- e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- f) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes;
- g) Responder los pedidos de informes que los formule el procurador general;
- h) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del área de su competencia;
- i) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- j) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Fiscales generales adjuntos

Art. 37. — Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o instancia única, actuarán en relación inmediata con los fiscales generales ante dichos tribunales y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 38. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia tendrán las facultades y deberes propios del ministerio público fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.

Deberán intervenir en los procesos de amparo y de *habeas corpus* y en todas las cuestiones de competencia; o imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.

Art. 39. — En particular, los fiscales ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa.

salvo aquellos casos en que por las leyes penales no esté permitido obrar de oficio;

- b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, cuidando de instarlos cuando se trate de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Art. 40. — Los fiscales ante la justicia de primera instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de la seguridad social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan;
- b) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan, y verificar la regularidad de la sustanciación de las respuestas ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso;
- c) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

Fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia

Art. 41. — Los fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia actuarán en relación inmediata con los fiscales ante dichos tribunales y tendrán las siguientes facultades y deberes:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de

sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

CAPÍTULO II

Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Organización

Art. 42. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del ministerio público fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

Designaciones y remociones

Art. 43. — Los magistrados de la Fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley.

Fiscal nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 44. — El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el procurador general de la Nación;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos.
- c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación, con la intervención necesaria del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33, inciso f).

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción;

- d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el procurador general;
- g) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a su cargo;
- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación;
- j) Ejecutar todos sus cometidos ajustándolos a la política criminal y persecución penal del ministerio público fiscal.

Fiscales generales de Investigaciones Administrativas

Art. 45. — Los fiscales generales de Investigaciones Administrativas actuarán en relación inmediata con el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en los sumarios administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- b) Reemplazar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia, con intervención del procurador general de la Nación;
- c) Informar al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales general adjuntos y fiscales de Investigaciones Administrativas

Art. 46. — Los fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y los fiscales de Investigaciones Administrativas, asistirán al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias de la Fiscalía que este último les asigne.

Comunicación de procesos penales

Art. 47. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito

contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Investigaciones disciplinarias

Art. 48. — Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate, de conformidad con las competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, dichas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones que se regirán por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.

Competencias especiales

Art. 49. — Además de las previstas en el artículo 28 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc;
- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación.

Sección III

Ministerio Público de la Defensa

Defensor general de la Nación

Art. 50. — El defensor general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público de la Defensa, y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, excepto

en los supuestos en que según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que se podrá omitir la vista.

El defensor general también actuará, si correspondiere, cuando haya intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa.

- b) Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de esta ley;
- c) Disponer por sí o mediante instrucciones generales o particulares, a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos le confieran;
- d) Disponer fundadamente, de oficio o a pedido de cualquiera de los magistrados que integran la defensa oficial, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación. En los casos de formación de equipos de trabajo, la actuación de los defensores que se designen estará sujeta a las directivas del titular;
- e) Efectuar la propuesta en términos a que se refieren los artículos 59 y 69 de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- f) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos defensores cuando así lo exija la naturaleza de las pretensiones de las partes;
- g) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor oficial;
- h) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley, cuando a su juicio, se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación —ante los órganos competentes— cuando se hallaren incurso en las conductas contempladas en el artículo citado;
- i) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio

Público de la Defensa acerca de la conveniencia determinadas reformas legislativas o reglamentarias y del modo o forma cómo hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;

- f) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
- k) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa y ejercer su representación con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales —cuando sea del caso—, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción, criminal y policía judicial. Igualmente con los organismos internacionales y autoridades de otros países;
- l) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa y dictar los reglamentos e instrucciones generales necesarios para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes, supervisar su desempeño y lograr el mejor cumplimiento de las competencias que la Constitución y las leyes otorgan a dicho ministerio;
- ll) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;
- m) Confeccionar el programa del Ministerio Público de la Defensa dentro del presupuesto general del Ministerio Público y presentar éste al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, juntamente con el programa del Ministerio Público Fiscal, para su remisión al Congreso de la Nación;
- n) Organizar, reglamentar y dirigir la Oficina de Recursos Humanos y el servicio administrativo financiero del organismo;
- ñ) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado al Ministerio Público de la Defensa, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- o) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 40, incisos b) y c) de la presente ley, en las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 31; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;

Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de los defensores generales y el grupo de defensores y defensores adjuntos, que colaborarán con ellos sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;

- q) Representar al Ministerio Público de la Defensa en sus relaciones con las demás autoridades de la República;
- r) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- s) Recibir los juramentos de los magistrados, funcionarios y demás empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- t) Patrocinar y asistir técnicamente, en forma directa o delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a las personas que lo soliciten.

De la Defensoría General de la Nación

Art. 51. — La Defensoría General de la Nación es la sede de actuación del defensor general de la Nación, como defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio Público de la Defensa.

En dicho ámbito se desempeñarán los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los magistrados que colaboren con el defensor general de la Nación, tanto en la tarea de dictaminar en los asuntos judiciales remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con los planes, organigramas de trabajo y cometidos funcionales específicos que el defensor general disponga encomendarles.

Defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 52. — Los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación asistirán al defensor general en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor general respecto de las causas en que intervengan;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Defensores públicos de Menores e Incapaces

Art. 53. — Los defensores públicos de Menores e Incapaces, en las instancias y fueros en que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extra judicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;

- b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen.
- c) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- d) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos; conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores o incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección, y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- e) Asesorar a menores o incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- f) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se encuentren bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;
- g) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal;
- h) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre Internación y Externación de Personas; y controlar que se efectúen al Registro de Incapaces, las comunicaciones pertinentes;

- i) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- j) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;
- k) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;
- l) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- m) Responder los pedidos de informes del defensor general;
- n) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidas en esta ley y sus reglamentación.

Art. 54. — Los defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales de casación y de segunda instancia, cuando no hubieren sido designados para actuar también en primera instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de Menores e Incapaces ante la primera instancia y promover o continuar las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se tendrán que fundar debidamente en cada caso;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;
- d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Elevar un informe anual al defensor general de la Nación sobre la gestión del área bajo su competencia;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los Defensores de Menores e Incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

Art. 55. — Los defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales orales serán parte necesaria en todo expediente de disposición tutelar que se forme respecto de un menor autor o víctima de delito conforme las leyes de menores vigentes; y deberán asistir bajo pena de nulidad, a los juicios orales de menores conforme lo dispuesto en el Código Procesal Penal de la Nación.

Art. 56. — El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81, pasa a integrar el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del Defensor de Menores e Incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tutores y curadores públicos

Art. 57. — Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 58. — Los tutores y curadores públicos tendrán las funciones previstas en los títulos VII a XIV de la sección II del libro I del Código Civil, sin perjuicio de las demás propias de la naturaleza de su cargo y las que les encomiende el defensor general de la Nación. Especialmente deberán:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan —en su momento— acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos así como también su patrimonio; proveer, cuando corresponda, a su adecuada administración;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación, y representarlos en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como

también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;

- g) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se les formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;
- h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos;
- i) Mantener informado al defensor de Menores o Incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste le formule.

Defensores públicos oficiales

Art. 59. — Los defensores públicos oficiales, en las instancias y fueros en que actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, sin perjuicio de las demás funciones que les encomiende el defensor general de la Nación, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos, informándoles sobre el trámite procesal de su causa;
- c) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;
- d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo

tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan; y patrocinarias para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;

- f) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste el informe anual relativo a su gestión;
- g) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 60. — Los defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia tendrán —en especial— las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores públicos oficiales de las instancias anteriores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores públicos oficiales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del área bajo su competencia;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomiende el defensor general de la Nación.

Honorarios de los defensores públicos oficiales

Art. 61. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor público oficial, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ellos surge que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Art. 62. — En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez (10) días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público de la Defensa.

Defensores públicos adjuntos de Menores e Incapaces y defensores públicos oficiales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 63. — Los defensores públicos adjuntos de Menores e Incapaces y públicos oficiales adjuntos ante

los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, actuarán en relación inmediata con los defensores públicos ante dichos tribunales, y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales, éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

Sección IV

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Art. 64. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley, las normas pertinentes del decreto ley 1.285/58 y las reglamentaciones que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación. En particular se establece:

- a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que hubieren pasado a desempeñarse en el Ministerio Público Fiscal o en el Ministerio Público de la Defensa, y se encuentren prestando servicios allí, quedan incorporados a su planta permanente;
- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Solo con su conformidad podrán ser trasladados conservando su jerarquía, a otras jurisdicciones territoriales distintas de las adjudicadas en su designación;
- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general o por el de-

feusor general, según corresponda, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante y, de acuerdo a lo que establezca la pertinente reglamentación. Los magistrados mencionados podrán delegar esta competencia.

TITULO III

Disposiciones complementarias

Representación del Estado en juicio

Art. 65. — A los efectos de dar cumplimiento al artículo 27, primer párrafo de esta ley, salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados.

En el interior de la República, cuando el organismo interesado carezca en el lugar de los servicios referidos, la citada representación será ejercida por delegados del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación y designados por el Poder Ejecutivo nacional. En su defecto, la ejercerán letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de otros servicios jurídicos y otros abogados designados para casos especiales.

Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare conveniente la representación judicial estatal será ejercida por el procurador del Tesoro de la Nación.

Art. 66. — Los representantes judiciales del Estado se ajustarán a las instrucciones que impartan el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados. En caso que la representación sea ejercida por delegados del Cuerpo de Abogados del Estado, esas instrucciones se impartirán a través de la Procuración del Tesoro de la Nación. En defecto de ellas, los representantes desempeñarán su cometido en la forma que mejor contemple los intereses del Estado nacional confiados a su custodia.

Art. 67. — En todos los juicios en trámite en que el Estado nacional o sus entes descentralizados estén representados por integrantes del Ministerio Público, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá adoptar las medidas conducentes para la designación de nuevos representantes de acuerdo a las disposiciones de esta ley, dentro de los 365 días de su entrada en vigencia.

Art. 68. — A los fines del cumplimiento de lo previsto en los artículos 27, 65 y 67 de la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer la creación, supresión, transferencia y redistribución de dependencias, servicios, funciones y cargos, así como efectuar las reestructuraciones de créditos presupuestarios que a tal efecto, sean necesarias.

Subsistencia de cargos

Art. 69. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y

continuarán siendo desempeñados por quienes los ejercían al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Recursos

Art. 70. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de los créditos que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

Equiparaciones. Ministerio Público Fiscal

Art. 71. — Los actuales integrantes del Ministerio Público pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, previsto en el inciso a) del artículo 3º;
 - b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los secretarios de la Procuración General de la Nación, en el cargo de procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación previsto en el inciso b) del artículo 3º;
 - c) El fiscal general de Investigaciones Administrativas, en el cargo de fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, previsto en el inciso b) del artículo 3º.
- Mientras permanezca en el cargo, el actual fiscal general de Investigaciones Administrativas conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato vigente al momento de la sanción de la presente ley;
- d) Los fiscales de Cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única; el procurador general del Trabajo y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3º;
 - e) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el subprocurador general del Trabajo, los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 3º.

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la Subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9º de la ley 18.345;

- f) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fis-

calía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales previstos en el inciso e) del artículo 3º;

- g) Los fiscales adjuntos ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional federal, os prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal coadyuvante de la justicia nacional del trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 3º.

Mientras permanezcan en el cargo, los actuales fiscales adjuntos ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y correccional tendrán la equiparación presupuestaria, remuneratoria y previsional correspondiente a los cargos previstos en el inciso e) del artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 12 de la presente ley.

Equiparaciones. Ministerio Público de la Defensa

Art. 72. — Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 4º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor general de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el inciso a) del artículo 4º;
- b) El defensor oficial de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso b) del artículo 4º;
- c) Los defensores oficiales de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Cámara de Casación Penal y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos oficiales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- d) Los asesores de Menores e Incapaces de Cámara y los asesores de Menores ante los tribunales orales, en los respectivos cargos de defensores públicos de Menores e Incapaces ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- e) Los defensores oficiales de Pobres, Incapaces y Ausentes, en los cargos de defensores públicos oficiales ante los jueces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º;
- f) Los Asesores de Menores e Incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de Menores e Incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 4º.

Estructura

Art. 73. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, en sus respectivos ámbitos,

podrán modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, mediante el dictado de reglamentaciones, en tanto no afecten los derechos emergentes de la relación de servicio de los magistrados, funcionarios y empleados actualmente en funciones. Toda alteración que implique la afectación de tales derechos y la creación de cargos de magistrados, deberá ser previamente aprobada por el Congreso.

Art. 74. — En los ámbitos de competencia material o territorial donde no se hubiesen designado los defensores oficiales ante los tribunales colegiados de segunda instancia, ejercerán la función los defensores oficiales ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o; en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto se produzcan las designaciones correspondientes, dichos defensores oficiales ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados, enumerados en el inciso c) del artículo 4º.

Derogaciones

Art. 75. — Deróganse las leyes 15.464, 17.516 y 21.383; los títulos VII, VIII, y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a) del decreto ley 1.285/58, el artículo 3º, incisos a) y b) y 5º de la ley 20.581, el capítulo II de la ley 18.345; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3º de la ley 3.952, en tanto regula la notificación al procurador fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las instrucciones del correspondiente ministro del Poder Ejecutivo; la ley 3.367 en cuanto se refiere a la representación por los procuradores fiscales y el procurador general de la Nación en asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el fisco demande o sea demandado y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.

Art. 76. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo al artículo 120 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 24 de septiembre de 1990.

Jorge R. Yoma. — Juan R. Aguirre Lanari.
— Carlos A. Verna. — Eduardo Menem.
— Ernesto R. Oudin. — Augusto Alvarado.
— Julio C. Humada. — Julio A. San Martín.
— César Mac Karthy. — Deo hula
F. Bittel. — José O. Figueroa. — Alberto
M. Tell. — Jorge J. Massat. — Orlinda del
Valle Rivas. — Héctor M. Maya. — José
L. Gioja. — Pedro G. Villarroel. — An-
gel F. Pardo. — José M. de la Sota. —
Conrado H. Storani. — José A. Romero
Fertis.

En disidencia parcial:

*José Genoud. — Antonio T. Berhongaray.
— Alcides H. López. — Graciela Fernández
Meljide. — Raúl A. Gálván. — Hora-
cio D. Usandizaga.*

Disidencia parcial de la senadora Graciela Fernández Meljide

Al proyecto de Ley de Ministerio Público

Señor presidente:

Estamos ante las circunstancias de dar media sanción al proyecto de ley de Ministerio Público. Hemos recorrido muy lentamente desde la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1994, un camino que arribó a un considerable consenso luego que los proyectos originales enviados por el Poder Ejecutivo en épocas del ex ministro Barra, cuyo nivel de autoritarismo fue proporcional al rechazo y las críticas que generó. Frente a ello entidades representativas y organismos públicos que tienen que ver directamente con la administración de justicia participaron con sus opiniones. Vale citar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, como también al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación.

Ante estas circunstancias de consenso sostenido quiero expresar que voy a apoyar en general el dictamen aprobado pero voy a sostener en la votación en particular, disidencias en puntos vitales que me gustaría se consideraran para ser incorporados.

Entiendo que mejorarán el proyecto de Ley de Ministerio Público en su funcionamiento, que ajustado al principio jurídico de legalidad, será un instrumento de importancia para cualificar y promover justicia como deber indelegable del Estado.

Cabe destacar que la jerarquía dada al Ministerio de Defensa en pie de igualdad e independencia con el ministerio fiscal y el acceso en condiciones ciertas de legalidad del justiciable al servicio de justicia, conforman mi convicción que con este contenido se contribuirá directamente a la construcción de nuestras instituciones en el marco de un estado de derecho.

19) Disidencia con respecto al artículo 6º "concursos para cumplir los cargos de Ministerio Público"

Debería el concurso tener las cualidades de ser público, de oposición y antecedentes. El carácter de público es justamente la calidad de transparencia para la ciudadanía y la posibilidad de tener información y eventualmente de impugnar a los candidatos.

Nosotros proponemos junto al carácter público del concurso que del jurado participe la comunidad académica, con tres titulares de cátedra de universidades nacionales, lo que nos parece muy importante en función de garantizar la calidad teórico-técnica de los can-

didatos como también sería un aporte considerable la idoneidad de los académicos para incidir en la fijación del temario del concurso.

Se propone la siguiente redacción:

"El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por tercios de sus miembros. Los demás magistrados y fiscales del Ministerio Público serán designados por estricto orden de mérito en concursos públicos de antecedentes y oposición por un jurado compuesto por tres titulares de cátedra de universidades nacionales, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dos legisladores. Los legisladores serán elegidos por mayoría absoluta de votos de cada Cámara, los académicos serán designados por sorteo público por una terna compuesta por los decanos de las facultades de Derecho y el miembro de la Corte Suprema de igual forma de una terna propuesta por el presidente de la misma. Los integrantes del jurado durarán dos años en sus funciones y tendrán su asiento en la ciudad de Buenos Aires pero podrá constituirse en otro lugar si lo considera más conveniente para sus fines".

29) Disidencia con respecto al gobierno de Ministerio Público

En nuestro proyecto hemos propuesto un consejo consultivo para cada rama de Ministerio Público, su objeto es reducir la discrecionalidad y la posible arbitrariedad; que puedan darse en las cabezas de cada una de las ramas de Ministerio Público.

Lo entendemos como expresión de una arquitectura participativa, en la política institucional de Ministerio Público.

La presidencia de los consejos consultivos sería ejercida por el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación respectivamente; la importancia de crear y sostener ámbitos democráticos en los órganos que nos proponemos legislar, es fruto de creer ciertamente en que la participación contribuya a la eficacia, a la razonabilidad y a la transparencia de las políticas institucionales de la importancia que tiene el servicio de justicia.

Concebimos un consejo consultivo que resulte eficiente en la ejecución de las políticas y que contribuya interactuando con la cabeza del órgano en cuestión. Nos parece que un ámbito consultivo no vinculante, pero con funcionamiento regular, y que estos consejeros surjan de cada estamento elegidos democráticamente por sus pares, y la periodicidad de sus mandatos, les da a esta propuesta el carácter democrático y participativo que proponemos.

Proponemos incorporar el siguiente texto con el título de:

Gobierno y administración general y financiero del Ministerio Público

Gobierno y administración

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación tendrán a su cargo el gobierno y

la administración general del Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en la presente ley y los reglamentos que dicten y sin perjuicio de las atribuciones que esta ley asigna a sus respectivos consejos consultivos. En tal carácter, les corresponde:

a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los otros poderes del Estado;

b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, reglamentos del personal, disciplinario, de sustitución de los magistrados integrantes del Ministerio Público y todos aquellos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones;

c) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas actividades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;

d) A los efectos de asegurar su autarquía financiera el Ministerio Público, con crédito presupuestario propio, el procurador general y el defensor general elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiendo incorporarlas en el proyecto de presupuesto general de la Nación. De no haber acuerdo entre el procurador y el defensor, elevarán los proyectos por separado correspondientes a cada rama del Ministerio Público;

e) Disponer la contratación de abogados especializados, quienes se desempeñarán en calidad de asesores cuando la complejidad del proceso así lo exija.

f) El procurador general y el defensor general remitirán conjuntamente o por separado a las presidencias de ambas Cámaras un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público, concurriendo a brindar las explicaciones que les requieran con motivo de los informes;

g) El consejo consultivo para cada rama del Ministerio Público estará integrado por un funcionario por cada estamento, que se elegirá por voto de sus pares, durarán cinco años en sus funciones, no podrán ser reelegidos para otro período consecutivo y sus remuneraciones serán equivalentes a las correspondientes para el estamento al que pertenecen. El consejo asistirá en forma permanente en todos los asuntos de la gestión del procurador general o del defensor y la opinión del consejo será obligatoria para todos los temas en los que estos magistrados deban intervenir o decidir. Las recomendaciones del consejo no serán vinculantes para el procurador o el defensor, pero cuando la resolución sea contraria a la recomendación, el consejo podrá insistir con los dos tercios de los votos del órgano.

En este caso el procurador o el defensor deberán decidir de acuerdo a lo resuelto por el respectivo consejo.

Los consejos consultivos serán presididos por el procurador general y por el defensor general, respectivamente, y deberán sesionar por lo menos dos veces al mes, pudiendo autoconvocarse por mayoría absoluta de sus miembros".

39) Disidencia respecto al tribunal de enjuiciamiento (artículo 19) de dictamen de comisión

Pensamos que también debe tener presencia y participación el ámbito académico que compone el jurado de designación.

La participación académica de dos titulares de cátedra de una universidad nacional, elegidos por sorteo público de una lista de diez candidatos propuestos por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, además de ser lógica porque participan en el jurado que los califica, la participación del ámbito académico, va a garantizar, un considerable nivel teórico y técnico, en la determinación que el cuerpo tome.

Proponemos el siguiente texto:

"El enjuiciamiento del procurador general de la Nación, del defensor general de la Nación y de los restantes magistrados y fiscales del Ministerio Público, se efectuará por un tribunal integrado por los abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, que serán elegidos dos por mayoría y uno por minoría por el voto directo de todos los abogados de la matrícula federal; por dos titulares de cátedra de universidad nacional elegidos por sorteo público de una lista de diez candidatos propuesta por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales y por cuatro legisladores designados dos por cada Cámara, por dos tercios de votos de sus miembros. El tribunal se integrará por igual número de miembros suplentes.

El tribunal una vez constituido elegirá su presidente por sorteo, que rotará cada seis meses y todos sus integrantes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Cuando hayan vencido los plazos de las designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Como fiscal ante el tribunal actuará un diputado nacional elegido por la Cámara por mayoría de votos y durará en sus funciones por dos años.

La defensa del acusado estará a cargo del abogado de confianza que designe o en su caso un defensor oficial proveerá su defensa".

40) Disidencia con respecto a los artículos 69 y 71, inciso a), cuyo título es: subsistencia de cargos

En este sentido comparto en general este artículo en cuanto a la estabilidad de personal del Ministerio Público. Pero entiendo que la homologación automática y vitalicia no puede abarcar al procurador general de la Nación y al defensor general de la Nación.

Sin duda empezar bien es que los designe el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, tal como lo explicita el artículo 59 del dictamen de comisión.

La designación de los funcionarios que son cabeza de las ramas del Ministerio Público debe ajustarse a partir de la sanción del presente proyecto de ley, a la legalidad en todos sus aspectos, lo que implica su designación y la participación de esta Honorable Cámara en el debate y trámite mencionado y su consiguiente acuerdo.

Graciela Fernández Meljide.

ANTECEDENTES

Texto del proyecto presentado por los senadores
De la Rúa y Genoud.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO**TITULO I****Organización del Ministerio Público****Definición**

Artículo 1º — El Ministerio Público, cuya estructura y funciones determina esta ley, es órgano del Poder Judicial de la Nación. Coza de independencia orgánica y funcional. En representación de los intereses generales de la sociedad, tiene por misión primordial la defensa del orden jurídico y de la causa pública en todos los casos y asuntos en que tales intereses lo requieran. El Ministerio Público es único e indivisible, cada uno de sus funcionarios cuando actúa en un procedimiento lo representa integralmente.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público está integrado por:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas;
- c) Los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los fiscales generales de la Procuración General de la Nación; los fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal y ante las cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal y ante las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en las provincias; el procurador general del Trabajo y el subprocurador general del Trabajo; el defensor público ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores públicos ante las referidas cámaras;
- d) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y ante el Tribunal del Juicio en el proceso penal; los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y los defensores públicos ante los jueces de primera instancia;
- e) Los fiscales auxiliares y los tutores y curadores públicos que esta ley prevé.

Designaciones. Requisitos para acceder a los cargos

Art. 3º — Todos los integrantes del Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación, a excepción de los fiscales auxiliares y los tutores y curadores públicos, que serán nombrados por el procurador general de la Nación.

Las designaciones para ocupar cargos en el Ministerio Público se efectuarán respetando los antecedentes de quienes los integran. En el caso de los fiscales, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación, los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas el Poder Ejecutivo escogerá los candidatos de una lista puesta en terna que hará el procurador general respetando la regla precedente de este mismo párrafo.

Para ejercer el cargo de procurador general de la Nación se requieren las mismas condiciones que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y para el desempeño de los restantes cargos deberán reunir las condiciones exigidas para ser juez de cámara o primera instancia según las correlaciones que resulten del artículo 5º, incisos b) y c) o secretario de cámara en el caso del inciso d) del mismo artículo.

En ningún caso se podrá acceder a las funciones del Ministerio Público sin contar con dos años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o funciones judiciales que requieren ese título.

**Estabilidad e independencia funcional.
Principios de actuación**

Art. 4º — El Ministerio Público ejerce imparcialmente la defensa del interés público sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, con plena independencia funcional respecto de los poderes del Estado. Los magistrados que lo integran gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta. Sólo podrán ser juzgados o removidos por las causas establecidas para los jueces de la Nación en el artículo 45 de la Constitución Nacional, por el tribunal y mediante el procedimiento que se establece en el título X.

Ejerce sus funciones por medio de sus órganos propios, ajustados a los principios de legalidad, imparcialidad y dependencia jerárquica con arreglo a las leyes.

Remuneraciones y subordinación jerárquica

Art. 5º — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinan del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación percibirá una retribución equivalente a la de ministro de la Corte Suprema de Justicia;
- b) El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fiscales generales de la Procuración General de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, los fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal y ante las cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal y las cámaras nacionales de apelaciones con asiento en las provincias, el procurador general del Trabajo y el subprocurador general del Trabajo, el defensor público ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los defensores públicos ante las referidas cámaras, percibirán una remuneración equivalente a la juez de cámara;

- c) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y ante el tribunal de juicio en el proceso penal, los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación y los defensores públicos ante los jueces de primera instancia, percibirán una retribución equivalente a la de jueces de ese rango;
- d) Los fiscales auxiliares y los tutores y curadores públicos que esta ley prevé, percibirán una remuneración equivalente a la de secretario de cámara.

Las equipaciones indicadas precedentemente se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equiparación se establece en cuanto a jerarquía, autoridad, protocolo y trato.

Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo. Los funcionarios que asisten a un superior jerárquico deben obedecer sus instrucciones.

Incompatibilidades

Art. 6º.— Quienes integran el Ministerio Público no podrán abogar ni ejercer representación de terceros en juicio, salvo en sus propios asuntos o en los de los cónyuges, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hiciera en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establece la ley respecto de los jueces de la Nación. Estarán exentos de la obligación de comparecer como testigos, pudiendo responder por escrito bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Inmunidades

Art. 7º.— Los integrantes del Ministerio Público, en cuanto concierne al cumplimiento de sus funciones, no podrán ser molestados ni enjuiciados por las opiniones que viertan en sus dictámenes o intervenciones en los procesos. Las cuestiones que ellos denunciaren con motivo de perturbaciones que afecten al ejercicio de sus funciones, provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación, que tendrá la facultad de resolverlas o en su caso poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fueren necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Recusaciones y excusaciones

Art. 8º.— Los integrantes del Ministerio Público podrán ser recusados por las causales establecidas a su respecto en las leyes procesales que rijan las causas en que actúen, sin admitirse la recusación sin causa.

En los mismos supuestos deberán abstenerse de intervenir en las causas que les fueren asignadas. Podrán hacerlo también cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obsten a su actuación imparcial.

Juramento

Art. 9º.— Los integrantes del Ministerio Público, al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento

de desempeñarlos fielmente, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación lo hará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los restantes integrantes del Ministerio Público lo harán ante el procurador general de la Nación o ante las cámaras respectivas, según corresponda.

Sustituciones

Art. 10.— En caso de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público, serán reemplazados en la forma que establecen las leyes y los reglamentos vigentes y, en su defecto, conforme a la reglamentación que dicte el procurador general. Si el impedimento lo tuviere este último, se aplicará lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.

Correcciones disciplinarias

Art. 11.— Los jueces y tribunales podrán imponer prevenciones y apercibimientos a los miembros del Ministerio Público, por faltas cometidas contra su autoridad o decoro en el trámite de las causas en las que intervengan, las cuales serán recurribles en la misma forma que las correcciones disciplinarias aplicadas a los litigantes. El tribunal comunicará al superior del sancionado la medida impuesta, como asimismo toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Parentesco con jueces

Art. 12.— No podrá ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los magistrados judiciales ante quienes desempeñe su ministerio.

TITULO II

De las funciones del Ministerio Público

Competencia. Facultades y deberes

Art. 13.— Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera;
- b) Ejercer la acción penal pública en las causas criminales y correccionales que tramiten ante los tribunales federales o nacionales de la Capital Federal, en la forma y con el alcance establecido en el Código Procesal Penal de la Nación;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos en el artículo 25 de esta ley y en otras leyes y reglamentos;
- d) Ejercer la representación procesal de los intereses colectivos o difusos, promoviendo la acción tendiente a tutelarlos;
- e) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas concernien-

tes a la tutela de los derechos de los menores, incapaces e inhabilitados carentes de representación legal, o cuando fuere necesario suplir la inacción de sus representantes legales o de las personas que los tuvieren a su cargo o cada vez que sea necesaria autorización judicial para la realización de determinados actos;

- f) Defender la jurisdicción de los tribunales y la competencia judicial;
- g) Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la Nación y el orden público nacional;
- h) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República, así como por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo y sustantivo;
- i) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables, cuando fuesen pobres o estuvieren ausentes, y toda vez que sea requerida en las causas penales, procediendo en la forma que establezcan las leyes específicas.

Facultades de investigación

Art. 14. — Los integrantes del Ministerio Público en cualquiera de sus niveles, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales o a los particulares, así como a recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y medios a su alcance.

Alcance de su actuación judicial

Art. 15. — Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con las limitaciones que prevean las leyes procesales.

Los dictámenes y requerimientos del Ministerio Público merecerán siempre la consideración de los jueces ante los que actúen, quienes no están obligados a tratar todos los argumentos aducidos, sino sólo los que estimen conducentes para fundar sus decisiones.

Límites funcionales

Art. 16. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento del Poder Ejecutivo. Ello no obstante, ante un requerimiento fundado de organismos públicos, sus integrantes podrán emitir dictámenes consultivos no vinculantes sobre materias propias de su competencia funcional.

Relación con el Poder Ejecutivo nacional

Art. 17. — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, deberá denunciar al Ministerio Pú-

blico la existencia de todo delito que llegare a su conocimiento, a fin de que éste promueva la acción pública; ello sin perjuicio de poder hacerlo en forma directa como parte afectada en representación del Estado.

Asimismo, por intermedio del ministerio respectivo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación a fin de proponerle la emisión de instrucciones generales, tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública y la persecución penal.

TITULO III

Del procurador general de la Nación

Art. 18. — El procurador general de la Nación durará 4 años en sus funciones y podrá ser reelegido. Tendrá las atribuciones siguientes:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público y la superintendencia general sobre sus miembros;
- b) Dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema, en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 101 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación para preservar el debido proceso legal;
- c) Intervenir en el trámite de las causas en que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela.
A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando según la razonable discreción del tribunal corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o fuesen manifiestamente infundados el recurso o la queja, supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general;
- d) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encontrare comprometido, con el mismo alcance previsto en el inciso b) de este artículo;
- e) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;
- f) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema en los casos que corresponda y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público para instarlos a ejercer dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- g) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- h) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;

- i) Convocar, por lo menos dos veces al año, a una reunión de consulta, a la que deberán asistir todos los magistrados mencionados en el artículo 2º, inciso b), con el objeto de:
- a') Considerar los informes anuales que se presenten, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21, inciso d);
 - b') Procurar la unificación de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público en los temas de su competencia;
 - c') Intercambiar opiniones sobre todo lo concerniente a la mayor eficacia del servicio;
 - d') Tratar las demás cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- f) Imponer a los integrantes del Ministerio Público, por incumplimiento de los deberes que les incumben, las siguientes correcciones disciplinarias: prevención, apercibimiento, multa de hasta el 10 % de sus retribuciones y suspensión no mayor de treinta días. Estas sanciones serán apelables ante la Corte Suprema de Justicia;
- g) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general o defensor público de cámara la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público, de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o la dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable;
- h) Delegar sus funciones en los fiscales generales ante la Corte Suprema, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de esta ley;
- ii) Efectuar la propuesta en tema a que se refiere el artículo 3º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- m) Promover la sustanciación de juicio político ante la Cámara de Diputados de la Nación respecto de los jueces, así como el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el título XI, cuando a su juicio unos u otros se hallaren incurso en las causas que prevé el artículo 45 de la Constitución Nacional;
- n) Requerir informes a la Corte Suprema y sus tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- ñ) Elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, en los casos en que lo juzgue pertinente, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación, del modo o forma como se hace efectiva su aplicación o la reglamentación de las leyes;
- o) Disponer, que por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en el artículo 13

de esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos.

Cuando actuaren en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador general, dichos magistrados podrán dejar a salvo su opinión personal;

- p) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

TÍTULO IV

De los fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia

Art. 19. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación, habrá dos fiscales generales ante la Corte Suprema, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia; en estos supuestos, salvo opinión fundada de aquél, el reemplazo se efectuará por orden de antigüedad;
- c) Informar al procurador general respecto de las causas sometidas a su dictamen;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

TÍTULO V

De los fiscales generales de la Procuración General de la Nación

Art. 20. — Los fiscales generales y adjuntos de la Procuración General de la Nación asistirán al procurador general y cumplirán las directivas que éste imparta de conformidad con los incisos h), k) y o) del artículo 18 y lo que establezca el reglamento de superintendencia. Los fiscales auxiliares tendrán las funciones que les asigne dicha reglamentación bajo las directivas del procurador general o de quien éste asigne.

TÍTULO VI

Del fiscal general de Investigaciones Administrativas

Art. 21. — Corresponde al fiscal general de Investigaciones Administrativas:

- a) Ejercer las funciones y facultades previstas en la ley 21.383, no derogadas por la presente ley;
- b) Proponer al procurador general la designación de los fiscales adjuntos de la Fiscalía a su cargo;
- c) Redactar el reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y someterlo a la aprobación del procurador general;
- d) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general sobre los fiscales y el personal

de la Fiscalía a su cargo o impartirles instrucciones en el marco de la presente ley, de la ley 21.383, del reglamento de superintendencia del ministerio público y del reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;

- e) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión de la Fiscalía;
- f) Requerir del procurador general la solicitud de juicio político conforme lo previsto en el inciso m) del artículo 18 de la presente ley;
- g) Responder los pedidos de informe que le formule el procurador general de la Nación;
- h) Ofrecer su colaboración en los asuntos de su competencia, si lo considerase útil, al fiscal a cargo de la acción pública, quien, por igual materia, podrá solicitarlo. En caso de conflicto generado por la aplicación de este inciso, dirimirá en forma inapelable el procurador general;
- i) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y los reglamentos.

TÍTULO VII

De los fiscales de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 22. — Los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas asistirán al fiscal general y cumplirán las directivas que les imparta de conformidad con lo previsto en esta ley, y en la ley 21.383. Asimismo, los fiscales intervendrán en las investigaciones que les asigne el fiscal general, con el alcance y de conformidad con lo dispuesto en la ley 21.383.

TÍTULO VIII

De los fiscales generales ante las cámaras de apelaciones y ante la Cámara de Casación Penal

Art. 23. — Corresponde a los fiscales generales ante las cámaras de apelaciones y ante la Cámara de Casación Penal:

- a) Promover ante las mismas cámaras de ejercicio de la acción pública o continuar ante ellas la intervención que el ministerio público hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante dictamen fundado;
- b) Controlar el correcto funcionamiento de la superintendencia que ejercen las cámaras de apelaciones, a cuyo fin podrán requerir los informes que consideren necesarios;
- c) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- d) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del Ministerio Público que

actúa en el área de su competencia, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional, como en lo concerniente a la superintendencia. En ambos casos podrán aconsejar la conveniencia de iniciar el trámite del juicio político a integrantes del Poder Judicial;

- e) Ejercer superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- f) Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- g) Responder los pedidos de informes que les solicite el procurador general de la Nación;
- h) Peticionar al reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- i) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario;
- j) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que corresponden, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público en el artículo 13 y las encomendadas por las leyes y reglamentos;
- k) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 24. — Corresponde al procurador general del Trabajo o al subprocurador general, en su reemplazo, el ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 12 y 13 de la ley 18.345, así como las enunciadas en el artículo precedente. Estas últimas se aplicarán también a los fiscales generales ante las cámaras federales del interior del país y, en cuanto fuere pertinente, a los fiscales generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de las establecidas en los artículos 5º a 7º de la ley 23.473.

TÍTULO IX

De los fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 25. — Corresponden a los fiscales ante los jueces de primera instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón de grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Art. 26. — En especial le corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, a fin de asegurar el respeto al debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que

puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente; al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberán intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencia.

Intervendrán igualmente, en forma ineludible, en representación de la sociedad, en los casos en que el interés fiscal esté comprometido.

Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder, en miras al interés público.

Art. 27. — Todos los jueces federales y los nacionales actuantes en la Capital Federal, deberán dar intervención inmediata a los fiscales ante la justicia criminal y correccional cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública, a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley confiere.

Art. 28. — Los fiscales ante la primera instancia deberán informar a las correspondientes fiscalías ante las cámaras de toda irregularidad que adviertan en el desempeño de las funciones judiciales y administrativas susceptibles de afectar el debido proceso legal y el interés público, cuya tutela les ha sido encomendada.

TÍTULO X

De los defensores públicos

Art. 29. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto judicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sea en forma autónoma o junto con los representantes individuales; con tal objeto los tribunales judiciales de las diferentes instancias deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes, toda vez que aquel interés se hallare involucrado;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en el artículo 13, inciso f) de esta ley y en los artículos 255, 491 a 494 y concordantes del Código Civil, así como las indicadas con toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas, tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos tratos o deficiencias en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
- d) Solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas que estimaren pertinentes res-

pecto de menores que exteriorizaran reiteradas faltas de conducta o se encuentren expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieren ser conjuradas por los padres o personas que los tengan a su cuidado. Tales medidas no podrán extenderse más allá de la mayoría de edad;

- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda o correccionales de menores e incapaces, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al procurador general de la Nación, sobre lo concerniente a su marcha o desenvolvimiento en relación con el cuidado o atención de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de personas.
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que fueren consultados por los tutores o curadores públicos.

Art. 30. — Los defensores de menores e incapaces ante las cámaras de apelaciones tendrán además, en lo pertinente, las atribuciones que prevé el artículo 23, en particular los incisos d), e), g) y h). El defensor ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil conservará la dirección del Registro de Incapaces de conformidad con las disposiciones del decreto 282/81.

TÍTULO XI

De los tutores y curadores públicos

Art. 31. — Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán, en el trámite de las actuaciones judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que fueran huérfanos o se encontraran abandonados por sus padres, tutores, cuidadores o encargados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallaren personas que reúnan las condiciones legales e idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 32. — Serán funciones de los tutores y los curadores públicos:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean educados de forma tal que puedan tener acceso a algún oficio, profesión o actividad útil; y en el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomancias o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando fuere el caso, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de las personas que han sido confiadas a su cargo, cuidar de su acervo patrimonial, proveer a su adecuada administración y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil. En el caso de los inhabilitados actuarán de con-

formidad con lo establecido por el artículo 152 bis, última parte, del Código citado;

- c) Llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirles explicaciones o para responder cargos que se les formularen por malos tratamientos u omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallaren a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. Con el mismo objeto podrán también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallaren alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de los mismos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos.

TITULO XII

Del enjuiciamiento de los miembros del Ministerio Público

Art. 33. — El enjuiciamiento del procurador general de la Nación se llevará a cabo por el procedimiento establecido al efecto para los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso de los magistrados mencionados en el artículo 2º, incisos b), c) y d) de esta ley, el enjuiciamiento se efectuará por un tribunal integrado por tres ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dos abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, que serán desinsaculados de la lista de conjueces de la Corte Suprema.

Los demás funcionarios cuyo nombramiento efectúa el procurador general, podrán ser removidos por éste, previo sumario que garantice el debido proceso legal.

Art. 34. — Los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento previsto en el artículo precedente, serán nombrados por el Poder Ejecutivo por dos años y podrán ser reelegidos. Una vez integrado, el tribunal designará su presidente de entre los ex jueces de la Corte Suprema que hubieren sido convocados.

Como fiscal ante este tribunal actuará un ex procurador general de la Nación o en su defecto un abogado que reúna las condiciones establecidas en el artículo 33.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará el defensor oficial ante la Corte Suprema.

El tribunal designará un secretario de actuación que no podrá ser magistrado, ni funcionario en actividad.

Los integrantes del tribunal y funcionarios auxiliares, serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 35. — El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá su asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Art. 36. — Toda persona capaz podrá denunciar ante el Tribunal de Enjuiciamiento la existencia de hechos que den lugar a la remoción de un miembro del Ministerio Público. La denuncia deberá ser hecha por escrito y con firma de letrado.

En caso de darse curso a la denuncia, el procedimiento ante el tribunal será oral y público y se regirá por las normas del Código Procesal en lo Penal, en cuanto fueren aplicables. La etapa instructoria estará a cargo del fiscal, quien deberá sujetar su actuación a lo dispuesto por el artículo 198 y concordantes del código citado.

Art. 37. — Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar las medidas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que durase la suspensión, el imputado percibirá el 50 % de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio. Si fuese absuelto, percibirá el total de lo embargado.

Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del encausado e inhabilitarlo para ocupar en adelante cargos públicos.

Si la remoción se fundare en hechos que puedan constituir delitos de acción pública, o si ello resultare de la prueba, se dará intervención a la justicia en lo penal.

Si la decisión fuese absolutoria y se hubiere dispuesto la suspensión del imputado, éste se reintegrará de inmediato a sus funciones.

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 38. — Todo integrante del Ministerio Público podrá denunciar excesos cometidos por cualquiera de sus pares en el ejercicio de sus funciones, sea ante los jueces intervinientes en las causas en trámite, o ante el procurador general de la Nación a los efectos del ejercicio del poder de superintendencia que le otorga esta ley.

Art. 39. — Los funcionarios y empleados del Ministerio Público que no tengan por esta ley una forma especial de designación, serán nombrados por el procurador general de la Nación, quien podrá crear y suprimir cargos y delegar esta atribución en los magistrados de inferior jerarquía.

Art. 40. — Los actuales integrantes del Ministerio Público cuyos cargos se mencionan a continuación, pasarán a desempeñarse en los que en cada caso se indican, de acuerdo con las equiparaciones siguientes:

- a) Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema, como fiscales generales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y los secretarios de la Procuración General de la Nación, como fiscales generales de la Procuración General de la Nación;

- b) Los procuradores fiscales de cámara y fiscales de cámara, como fiscales generales ante la Cámara de Casación Penal o ante las cámaras nacionales o federales de apelación que corresponda;
- c) El procurador general del Trabajo y el subprocurador general del Trabajo, conservan su actual denominación;
- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas conservan su actual denominación;
- e) Los procuradores fiscales y agentes fiscales de los juzgados federales y nacionales de primera instancia de la Capital Federal, como fiscales ante los jueces de primera instancia o ante el Tribunal de Juicio en el proceso penal;
- f) Los asesores de menores e incapaces de segunda o de primera instancia, como defensores públicos ante las respectivas cámaras o ante los jueces de primera instancia, según corresponda;
- g) Los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación como fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación; y los prosecretarios letrados de las mismas, como auxiliares de la Procuración General de la Nación;
- h) Los secretarios de los fiscales y de los asesores de menores de cámara y los secretarios letrados de la Procuración General del Trabajo, como fiscales auxiliares de dichas dependencias.

Art. 41. — Las fiscalías del Trabajo que el procurador general de la Nación de ermine, pasarán a constituir las defensorías públicas de menores e incapaces para la Justicia Nacional del Trabajo, y sus titulares pasarán a desempeñarse en esta última función de acuerdo a los términos de esta ley y las disposiciones pertinentes de la ley 18.345.

Créase el cargo de defensor público ante las cámaras nacionales del Trabajo y de la Seguridad Social, quien tendrá las funciones que esta ley determina en los títulos VIII y IX respectivamente.

Art. 42. — Los cargos de magistrados y funcionarios del Ministerio Público actualmente existentes, subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejercen al momento de su entrada en vigencia.

Art. 43. — Las erogaciones necesarias para el funcionamiento del Ministerio Público, de acuerdo con las previsiones de la presente ley, provendrán de la partida asignada al Poder Judicial de la Nación.

Art. 44. — A partir de la vigencia de la presente ley, el ejercicio de la acción pública ante los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal, corresponderá a los integrantes del Ministerio Público que ella determina.

Derógase el título VII de la ley 1893 y los artículos 3º, inciso d), en cuanto se refiere al ejercicio de la acción pública, y 4º de la ley 21.383, así como toda otra disposición que se oponga a la presente.

Los artículos 8º a 16 de la ley 18.345 se adecuarán a lo estatuido por esta ley en cuanto a la denominación, jerarquía y atribuciones de los magistrados y funcionarios respectivos.

El artículo 15 de la ley 18.345 quedará redactado en la forma siguiente: "Los defensores públicos de menores e incapaces ante la Justicia Nacional del Trabajo, actuarán en ambas instancias e intervendrán en todo asunto judicial o administrativo que interese a la persona o bienes de los menores y otros incapaces, con los alcances que se desprendan del artículo 12, inciso b), de esta ley y la Ley Orgánica del Ministerio Público".

Art. 45. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán a su superior jerárquico inmediato, los asuntos a su cargo que por su importancia, trascendencia o complejidad requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo el modo de solucionarlas.

Art. 46. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando de la Rúa. — José Genoud.

Texto del proyecto presentado por el senador Solana

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DEL

MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Disposiciones generales

Definición

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Integración

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Ministerio Público Fiscal. Integración

Art. 3º — El Ministerio Público Fiscal está integrado por:

- a) El procurador general de la Nación y los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia;
- b) Los fiscales generales de la Procuración General de la Nación;
- c) El fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;
- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;

- e) Los fiscales generales ante los Tribunales Colegiados de Casación, de Segunda Instancia y de Instancia Única;
- f) Los fiscales ante los jueces de primera instancia;
- g) Los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia.

Ministerio Público de la Defensa. Integración

Art. 4º — El Ministerio Público de la Defensa está integrado por:

- a) El defensor general de la Nación y los defensores generales adjuntos;
- b) Los defensores públicos de Menores e Incapaces y de Pobres y Ausentes y los defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- c) Los defensores públicos de Menores e Incapaces y los defensores públicos y los defensores públicos de Pobres y Ausentes ante los jueces de primera instancia;
- d) Los tutores y curadores públicos que regula la presente ley.

Designación

Art. 5º — El procurador general de la Nación y el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación.

Igual procedimiento se observará para la designación de los demás integrantes del Ministerio Público, a cuyo efecto el procurador general y el defensor general, propondrán respectivamente, los postulantes a los cargos previstos en los artículos 3º y 4º, mediante una terna de candidatos que será elevada al Poder Ejecutivo nacional.

Se exceptúa del procedimiento previsto en el párrafo precedente a los fiscales auxiliares, quienes serán designados directamente por el procurador general de la Nación.

Estabilidad

Art. 6º — Los integrantes del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta, y sólo podrán ser removidos mediante los procedimientos previstos por la presente ley.

El procurador general de la Nación, el defensor general y los demás integrantes del Ministerio Público, podrán ser acusados ante el Tribunal de Enjuiciamiento, regulado en los artículos 38 a 45 de esta ley por las causas establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

En el caso de los funcionarios cuyo nombramiento efectúa directamente al procurador general, la remoción será dispuesta por éste siempre que haya tramitado el proceso legal establecido al efecto.

Principios de la institución: independencia, unidad, indivisibilidad y subordinación jerárquica

Art. 7º — El Ministerio Público es independiente de los demás Poderes del Estado. Es único e indivisible, cada uno de sus integrantes cuando actúa en un proce-

dimiento lo representa íntegramente, sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores, tutores y curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

El Ministerio Público se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asistan y es responsable por la gestión de los funcionarios a su cargo.

Autorquía financiera

Art. 8º — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la presente, el Ministerio Público dispondrá de una partida especial del presupuesto.

Remuneraciones. Intangibilidad

Art. 9º — En ningún caso, las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público podrán ser disminuidas.

Condiciones para el ejercicio de los cargos

Art. 10. — Para ser procurador general de la Nación y defensor general de la Nación se exigen las mismas condiciones que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente condiciones se requieren para ejercer los cargos de procurador general adjunto y de defensor general adjunto.

Para el desempeño de los cargos previstos en los incisos b), c) y e) del artículo 3º, e inciso b) del artículo 4º se requieren las condiciones exigidas para ser juez de cámara. Para los cargos previstos en los incisos d) y f) del artículo 3º, e inciso c) del artículo 4º, las condiciones para ser juez de primera instancia.

En ningún caso se podrá acceder a las funciones del Ministerio Público sin contar con tres años en el ejercicio profesional de la abogacía, o haber desempeñado funciones en el Poder Judicial de la Nación y/o en el Ministerio Público por más de dos años.

Incompatibilidades

Art. 11. — Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas por la ley respecto de los jueces de la Nación, los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer su profesión, a excepción de los casos en que actúen en asuntos propios, en los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes o cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal.

Tampoco podrán desempeñar empleos, funciones u otras actividades, a excepción de la docencia o ejecutar actos que comprometan su imparcialidad. Están exentos de la obligación de comparecer como testigos, pudiendo hacerlo por escrito mediante declaración jurada con las especificaciones correspondientes.

Parentesco

Art. 12. — No podrá integrar el Ministerio Público quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los magistrados judiciales ante quienes desempeñan su ministerio.

Inmunidades

Art. 13.— Los integrantes del Ministerio Público en cuanto concierne al cumplimiento de sus funciones, gozarán de las inmunidades y prerrogativas que acuerda el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Las cuestiones de privilegio que ellos denunciaren con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones, provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el superior jerárquico, que tendrá la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas necesarias para preservar el normal desenvolvimiento de aquellas funciones.

Recusaciones y excusaciones

Art. 14.— Los miembros del Ministerio Público podrán ser recusados por las causas establecidas a su respecto en las leyes procesales que rijan las causas en que actúen, sin admitirse la recusación sin causa. También deberán abstenerse de intervenir cuando mediante graves motivos que impidan su actuación imparcial.

Juramento

Art. 15.— Los integrantes del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos fielmente, de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, prestarán juramento ante el presidente del Senado. Los demás miembros prestarán juramento ante el procurador general o ante el defensor general, según el cargo de que se trate.

Sustituciones

Art. 16.— En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público serán reemplazados en la forma que establecen las leyes y reglamentos vigentes y, en su defecto, conforme a la reglamentación que se dicte al efecto.

Correcciones disciplinarias en el proceso

Art. 17.— Los jueces y tribunales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas correcciones disciplinarias que establecen las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, o al respeto debido a las personas del proceso. Serán recurribles ante el tribunal inmediato superior. El tribunal comunicará al superior jerárquico del funcionario sancionado la medida impuesta, como asimismo, toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

TÍTULO II

De las funciones del Ministerio Público

Art. 18.— Le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de las siguientes funciones:

- a) Representar y defender el interés público, tanto en sede judicial como administrativa, de oficio o a solicitud de parte interesada, sean particulares o quienes actúen en representación de algún organismo estatal. Para legitimar el pedido de los particulares bastará la justificación de un interés simple;
- b) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, en la forma y con el alcance previstos en el Código Procesal Penal de la Nación;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos en la presente ley, otras leyes y reglamentos y también en aquellos supuestos de notoria inacción social en que el interés público se encuentre afectado;
- d) Vigilar el cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes de la República;
- e) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo o sustantivo;
- f) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas; o siempre que fuere necesario para suplir la inacción de sus parientes, de las personas que los tuvieren a su cargo, y/o de sus representantes legales; o bien para controlar la gestión de estos últimos;
- g) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables, cuando fuesen pobres o estuviesen ausentes, y toda vez que sea requerida en las causas penales, procediendo en la forma que establezcan las leyes específicas;
- h) Defender la jurisdicción de los tribunales y la competencia judicial y administrativa;
- i) Intervenir en todos los casos en que se hallaren involucrados los intereses de la sociedad y el orden público.

Facultades de investigación

Art. 19.— Los integrantes del Ministerio Público en cualquiera de sus niveles para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los tribunales y a los organismos nacionales, provinciales, municipales o a los particulares; así como recabar la colaboración de las autoridades policiales y demás fuerzas de seguridad para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin, el personal y los medios a su alcance.

Alcance de su actuación judicial

Art. 20. — Las acciones públicas interpuestas por los integrantes del Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con las limitaciones previstas en las leyes procesales.

Límites funcionales

Art. 21. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento al Poder Ejecutivo. No obstante ello, los organismos públicos podrán —mediante resolución fundada—, efectuar consultas al Ministerio Público sobre materias propias de su competencia funcional.

Denuncia de delito

Art. 22. — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, deberá denunciar al Ministerio Público la existencia de todo delito que llegue a su conocimiento, a fin de que éste promueva la acción pública; ello sin perjuicio de poder hacerlo en forma directa, como parte afectada en representación del Estado.

TITULO III

Del procurador general de la Nación

Art. 23. — Corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público y las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal así como también la superintendencia general sobre sus miembros;
- b) Intervenir en las causas de jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia que prevé el artículo 101 de la Constitución de la Nación;
- c) Intervenir en el trámite de las causas en que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal debe tutelar.

A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando según la razonable discreción del Tribunal correspondiera el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren inustanciales o fuesen manifiestamente infundados el recurso o la queja; supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general;

- d) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encuentre comprometido;
- e) Intervenir y dictaminar en las cuestiones de competencia sometidas a decisión de la Corte Suprema de Justicia;
- f) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema en los casos que corresponda y dar instruccio-

ciones generales a los integrantes del ministerio público fiscal para instarlos a ejercer dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;

- g) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- h) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución de tareas entre sus integrantes, sus deberes y atribuciones, y supervisar su cumplimiento;
- i) Imponer a los integrantes del ministerio público fiscal, por incumplimiento de los deberes que les incumben las siguientes correcciones disciplinarias: prevención, apercibimiento, multa y suspensión;
- j) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal de cámara, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del ministerio público fiscal, de igual o diferente jerarquía cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable;
- k) Delegar sus funciones en los procuradores generales ante la Corte Suprema, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de esta ley;
- l) Promover la sustanciación del enjuiciamiento de los integrantes del ministerio público fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el título XII, cuando a su juicio se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- m) Requerir informes a la Corte Suprema y sus tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- n) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, en los casos que lo juzgue pertinente, la opinión del ministerio público fiscal acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación, o del modo o forma como se hace efectiva su aplicación o la reglamentación de las leyes;
- o) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del ministerio público fiscal, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en el artículo 18 de esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos.

Cuando actúen en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador general, los fiscales podrán dejar a salvo su opinión personal.

TITULO IV

De los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 24. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación habrá cuatro procuradores adjun-

los ante la Corte Suprema, a quienes además de las funciones que aquél les encomiende, les corresponden las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, excusación, recusación, ausencia, impedimento o vacancia; en estos supuestos, salvo opinión fundada de aquél, el reemplazo se efectuará por orden de antigüedad;
- c) Informar al procurador general respecto de las causas sometidas a su dictamen;
- d) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

TITULO V

De los fiscales generales de la Procuración General de la Nación

Art. 25. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación asistirán al procurador general y cumplirán las directivas que éste imparta de conformidad con los incisos h), i) y m) del artículo 21 y lo que establezca el reglamento de superintendencia.

TITULO VI

Del fiscal general de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 26. — Al fiscal general de Investigaciones Administrativas le corresponde:

- a) El ejercicio de las funciones previstas en el artículo 3º, incisos a), b) y c) de la ley 21.383 y de las facultades establecidas en el artículo 6º del mismo cuerpo legal;
- b) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general sobre los fiscales y el personal de la Fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley, de la ley 21.383 y del Reglamento Interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas;
- c) Redactar el reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y someterlo a la aprobación del procurador general;
- d) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión de la Fiscalía;
- e) Responder los pedidos de informes que le formule el procurador general de la Nación;
- f) Desempeñar las demás funciones que le encomienden las leyes y los reglamentos.

TITULO VII

De los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas

Art. 27. — En relación inmediata con el fiscal general habrá cinco fiscales adjuntos, cuyas funciones serán asistir al fiscal general y cumplir las directivas impartidas

por éste, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo anterior. Asimismo, les corresponde intervenir en las investigaciones que les asigne el fiscal general, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3º, inciso c) de la ley 21.383, con el alcance fijado en el artículo 7º de la misma.

TITULO VIII

De los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 28. — Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única:

- a) Promover ante los mismos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante dictamen fundado;
- b) Controlar el correcto funcionamiento de la superintendencia que ejercen los tribunales, a cuyo fin podrán requerir los informes que consideren necesarios;
- c) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- d) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional como en lo concerniente a la superintendencia;
- e) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores y el personal de la Fiscalía a su cargo, en el marco de la presente ley y el Reglamento de Superintendencia del Ministerio Público;
- f) Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- g) Evacuar los informes que les solicite el procurador general de la Nación;
- h) Petitionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria y requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- i) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- j) Desempeñar en la esfera de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia, promoviendo las acciones públicas que corresponden, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al ministerio público en el artículo 10 y las demás encomendadas por las leyes y reglamentos.

TITULO IX

De los fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 29. — Corresponde a los fiscales ante los jueces de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal y Nacional de la Capital Federal:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa; salvo aquellos casos que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en toda causa en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de los testigos ofrecidos en la causa y verificado el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, así como los recursos administrativos dirigidos a la averiguación de delitos o de infracciones administrativas, cuidando de instalarlos cuando se trata de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder en miras al interés público;
- e) Intervenir en los procesos de amparo de *habeas corpus*.

Art. 30. — Corresponde a los fiscales ante la Primera Instancia de la Justicia Federal en lo Civil, Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo, y de la Justicia Nacional de la Capital Federal en los referidos fueros:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales o administrativos en que el interés público los requiera, de oficio o a requerimiento de cualquier persona, o como consecuencia de las vistas de los expedientes que los jueces pongan a su consideración, a fin de asegurar el respeto del debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación; así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico histórico o paisajístico, y en todos los demás casos que las leyes establezcan;
- b) Ejercer todas las acciones y recursos previstos en la legislación a nombre del Ministerio Público, en el trámite de sus presentaciones ante

los órganos judiciales administrativos; en ausencia de prescripciones legales expresas, quedan legitimadas para ejercer la representación del interés público en las referidas instancias;

- c) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervenga, y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o recibidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso legal;
- d) Intervenir en forma ineludible en todos aquellos casos que el interés fiscal esté comprometido, en representación de la sociedad y del Estado, así como en todos aquellos asuntos en los que el Ministerio Público debe ejercer funciones por mandato de la ley;
- e) Intervenir, según la especialidad de su materia, en la gestión y administración de las fundaciones y asociaciones jurídicas de bien público, toda vez que tuvieran conocimiento de que el interés público, se encontrase afectado, o en peligro de serlo con el objeto de reclamar ante los órganos administrativos de control o ante la autoridad judicial, que se proceda a reparar el bien tutelado;
- f) Intervenir en las cuestiones de competencia, en los procesos de amparo tramitados en los tribunales ante los que ejercen su ministerio, así como en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

TITULO X

De los fiscales auxiliares de las fiscalías de Primera Instancia

Art. 31. — Corresponde a los fiscales auxiliares de las fiscalías de Primera Instancia:

- a) Sustituir al fiscal titular cuando éste así lo resuelva y en los casos de licencia, excusación, recusación, ausencia, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular de las causas sometidas a su dictamen y asistirlo en el ejercicio de sus funciones.

TITULO XI

Ministerio Público de la Defensa,
Defensor general de la Nación

Art. 32. — Corresponde al defensor general de la Nación:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público de la Defensa y la superintendencia general sobre sus miembros;
- b) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos a su despacho y en las quejas plan-

teadas en forma directa por el defensor de aquéllos, cuando existan menores e incapaces interesados. El defensor general también actuará, cuando hubiera intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa de Pobres y Ausentes;

- c) Disponer de oficio o a pedido de un defensor público de Menores e Incapaces o de Pobres y Ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable;
- d) Designar defensores generales adjuntos de Menores e Incapaces y de Pobres y Ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso menores e incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres y ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
- e) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de Menores e Incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de Pobres y Ausentes;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio Público de la Defensa, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- g) Delegar sus funciones en los defensores generales adjuntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta ley;
- h) Promover la sustanciación del enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con lo dispuesto en el título XVI, cuando a su juicio se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- i) Requerir informes a la Corte Suprema y sus tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- j) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución de tareas entre sus integrantes, sus deberes y atribuciones, y supervisar su cumplimiento;

- k) Imponer a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, por incumplimiento de los deberes que les incumben las siguientes correcciones disciplinarias: prevención, apercibimiento, multa y suspensión.

TITULO XII

De los defensores generales adjuntos

Art. 33. — En relación inmediata con el defensor general de la Nación habrá dos defensores generales adjuntos, a quienes les corresponderán las siguientes funciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al defensor general en caso de licencia, recusación, excusación, ausencia, impedimento o vacancia;
- c) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes y reglamentos.

TITULO XIII

De los defensores públicos de menores e incapaces

Art. 34. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto judicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sea en forma directa o juntamente con los representantes individuales. Con ese objeto, los tribunales de las diferentes instancias deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes toda vez que aquel interés se hallare involucrado;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en el artículo 18, inciso f) de esta ley y los artículos 255, 491 a 494 y otros del Código Civil, así como las indicadas en toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces o inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos tratos o deficiencias en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
- d) Solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas disciplinarias, correccionales o de seguridad que estimaren pertinentes respecto de menores que exteriorizaran reiteradas faltas de conducta o que se encontraran expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieran ser conju-

radas por los padres o personas que los tengan a su cuidado;

- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda o correccionales de menores e incapaces, debiendo mantener informadas a las autoridades judiciales y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación sobre lo concerniente al desenvolvimiento relativo a la atención y cuidado de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance previsto por la ley 22.914 sobre internación y externación de personas, efectuando las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que fueren consultados por los tutores o curadores públicos;
- h) El defensor ante las cámaras nacionales de Apelaciones en lo Civil y Comercial ejercerá la dirección del Registro de Menores e Incapaces creado por el decreto 292/81, el cual integrará el Ministerio Público.

TÍTULO XIV

De los defensores públicos de Pobres y Ausentes

Art. 35. — Los defensores públicos de Pobres y Ausentes en las instancias y fueros en que actúen, tendrán a su cargo la función indicada en el artículo 18 inciso g); a cuyo fin serán designados en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y representación en juicio de quienes invocaren o justificaren pobreza o se encontraren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos. A ellos incumbe también la defensa de los imputados en las causas que tramiten ante la justicia criminal y correccional, siempre que fueren convocados al efecto.

En todos los casos tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos y de procurar hallarlos cuando estuvieren ausentes.

Deberán, asimismo, evacuar las consultas que les soliciten las personas carentes de recursos, asistirles en los trámites judiciales pertinentes, y en su caso, patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.

También les corresponde asumir la defensa de las personas denunciadas como dementes o inhabilitados, cuando fueren convocados al efecto.

TÍTULO XV

De los tutores y curadores públicos

Art. 36. — Los jueces federales y los nacionales de la Capital Federal designarán en el trámite de las actuaciones judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que fueren huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallaren personas que reúnan las condiciones legales o idoneidad necesaria para desempeñar tales cargos.

Art. 37. — Serán funciones de los tutores o curadores públicos:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean educados de forma tal que puedan tener acceso al ejercicio de algún oficio, profesión o actividad útil; y en el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando fuere el caso, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de las personas que han sido confiadas a su cargo, cuidar su acervo patrimonial, proveer a su adecuada administración y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil. En el caso de los inhabilitados actuarán de conformidad con lo estatuido por el artículo 152 bis, última parte, del código citado;
- c) Llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirles explicaciones o para responder cargos que se les formularen por malos tratamientos u omisiones de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallaren a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. Con el mismo objeto podrán también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas e intereses puestas a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallaren alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de los mismos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos.

TÍTULO XVI

Del Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 38. — De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente, los integrantes del Ministerio Público podrán ser acusados por las causales establecidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y de acuerdo con el procedimiento regulado en este título.

Integración

Art. 39. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por siete miembros:

- a) Dos ex integrantes del Ministerio Público que se hayan desempeñado en el cargo de procurador general de la Nación o defensor general de la Nación;

- b) Dos senadores nacionales y dos diputados nacionales, designados por las respectivas Cámaras;
- c) Tres abogados con veinte años de ejercicio profesional que serán desinsaculados de la lista de conjuces de la Corte Suprema.

Todos los integrantes deberán ser designados con la suficiente antelación a los efectos de que el tribunal esté constituido el 30 de abril de cada año.

Durarán un año en el ejercicio de las funciones y podrán ser reelegidos.

Presidencia

Art. 40. — El presidente se designará por sorteo y durará un año en su cargo. La presidencia será ocupada en forma rotativa por todos los miembros del tribunal. Ningún miembro podrá ser designado nuevamente presidente hasta tanto cada uno de los miembros haya ejercido el cargo.

Art. 41. — Como fiscal ante el tribunal actuará un ex procurador general, o en su defecto, un abogado que reúna los requisitos aludidos, artículo 30, inciso c).

En calidad de defensor de oficio actuará un defensor público ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única. En caso de ausencia de este último, el defensor oficial proveerá a su defensa.

El tribunal designará un secretario de actuación que no podrá ser funcionario en actividad del Ministerio Público.

Los integrantes del tribunal y los funcionarios auxiliares serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Art. 42. — El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá su asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Procedimiento

Art. 43. — Toda persona capaz podrá denunciar por escrito ante el Tribunal de Enjuiciamiento la existencia de hechos que puedan dar lugar a la remoción de un miembro del Ministerio Público.

El tribunal, en plenario, podrá rechazar *in limine* la denuncia formulada.

En caso de admitirse, el procedimiento ante el tribunal será oral y público y se regirá por las normas del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto fueren aplicables.

La etapa instructoria estará a cargo del fiscal quien deberá sujetar a su cometido a lo dispuesto por el artículo 196 y concordantes del código citado.

Suspensión

Art. 44. — El acusado podrá ser suspendido en sus funciones por el tribunal durante el curso del proceso, pudiendo disponer, según el caso, la suspensión total o parcial de sus haberes.

Sentencia

Art. 45. — El pronunciamiento del tribunal absolverá o destituirá al acusado, quien en el primer caso será reintegrado inmediatamente a sus funciones si hubiere sido suspendido; procediéndose si correspondiere a la restitución de los haberes respectivos.

En el segundo caso, el acusado resultará separado del cargo y, de resultar procedente, sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios.

La condena podrá disponer la inhabilitación definitiva o provisoria del funcionario para ejercer cargos públicos.

El pronunciamiento condenatorio del tribunal deberá adoptarse por la mayoría de sus integrantes.

Art. 46. — Derógase toda ley que se oponga a la presente.

Art. 47. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge D. Solana.

Texto del proyecto presentado por el senador Alasino

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Principios generales

Artículo 1º — *Definición.* El Ministerio Público es la institución esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que en representación de los intereses generales de la sociedad, defiende la legalidad, tutela el orden público y vela por la correcta administración de justicia. Es un órgano autónomo que tiene independencia orgánica y funcional y unidad de actuación.

El Ministerio Público, instituido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, está formado por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público Pupilar, cuya organización y funciones determina esta ley.

Art. 2º — *Composición - Ministerio Público Fiscal.* Integran el Ministerio Público Fiscal los siguientes funcionarios:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos;
- c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales mencionados en el inciso anterior, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- e) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación;

- f) Los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 3º — Composición - Ministerio Público Pupilar. Integran el Ministerio Público Pupilar los siguientes funcionarios:

- a) El defensor general de la Nación;
- b) Los defensores generales adjuntos;
- c) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegidos de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- d) Los defensores públicos adjuntos ante los tribunales mencionados en el inciso anterior y los de la Defensoría General;
- e) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Además integran el Ministerio Público Pupilar los tutores y curadores que esta ley prevé.

Art. 4º — Designaciones. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado.

Los demás funcionarios mencionados en los incisos b), c), d) y e), de los artículos 2º y 3º serán designados por igual procedimiento. Para cada designación, el Poder Ejecutivo deberá elegir dentro de una terna presentada por el procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación, según corresponda, la que será integrada respetando los antecedentes de los candidatos.

Los fiscales auxiliares y los tutores y curadores serán nombrados por el procurador general de la Nación y defensor general de la Nación, respectivamente.

Art. 5º — Requisitos para acceder a los cargos. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación deberán reunir las mismas condiciones que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Para el desempeño de los restantes cargos deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de cámara o de primera instancia, según las correlaciones que resultan del artículo 7º, incisos b) y c) o secretario de cámara en el caso del inciso d) del mismo artículo.

En ningún caso se podrá acceder a las funciones en el Ministerio Público sin contar con tres años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial que requieran ese título.

Art. 6º — Estabilidad. Los integrantes del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta.

1. El enjuiciamiento y remoción del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

2. El enjuiciamiento y remoción de los demás miembros del Ministerio Público se regirá por lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Nacional.

3. La remoción de los magistrados cuyo nombramiento efectúa el procurador general o defensor general de la Nación, será efectuada por éstos, respectivamente, previo sumario que garantice el debido proceso legal.

Art. 7º — Remuneraciones. Jerarquías. Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, percibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los funcionarios mencionados en el inciso b) y c) de los artículos 2º y 3º, percibirán una retribución equivalente a la de juez de cámara;
- c) Los funcionarios mencionados en los incisos d) y e) de los artículos 2º y 3º, percibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte mera instancia;
- d) Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 2º y los mencionados en el último párrafo del artículo 3º, percibirán una retribución equivalente a la de secretario de cámara.

Las equiparaciones indicadas precedentemente se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, trato, protocolo y autoridad.

Art. 8º — Inmuntades. Los integrantes del Ministerio Público gozan de las inmuntades funcionales y prerrogativas que acuerda el artículo 120 de la Constitución Nacional, y no podrán ser molestados o enjuiciados por las opiniones que viertan en sus dictámenes o intervenciones en los procesos. Las cuestiones que ellos denunciaren con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Estarán exentos de la obligación de comparecer a prestar declaración como testigo ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Art. 9º — Juramento. Los integrantes del Ministerio Público, en todos sus rangos, al tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento ante sus superiores jerárquicos de desempeñarlos fiel y legalmente, cumpliendo

y haciendo cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación, en su calidad de jefe de Estado.

Art. 10. — Incompatibilidades.

1. Quienes integran el Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos, las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación;
2. No podrá ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los magistrados judiciales ante quienes desempeña su ministerio.

Art. 11. — Recusación y excusación. Los integrantes del Ministerio Público podrán ser recusados por las mismas causales establecidas respecto de los jueces en las leyes procesales aplicables a las causas que intervengan.

Por los mismos motivos deberán declinar intervenir o inhibirse en las causas que les asignen. Podrán excusarse también cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obstan a su actuación imparcial.

En ningún caso se admitirá la recusación sin causa.

Art. 12. — Sustitución. En caso de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezca las leyes y los reglamentos vigentes y, en su defecto, conforme la reglamentación que dicten el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según corresponda. Si el impedimento lo tuvieran estos últimos, serán reemplazados por el procurador general adjunto y el defensor general adjunto con mayor antigüedad en el cargo, respectivamente.

Art. 13. — Sanciones disciplinarias. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán imponer a los miembros del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público Pupilar, que incumplieren los deberes y obligaciones que les incumben, las siguientes sanciones:

- a) Llamado de atención;
- b) Apercibimiento;
- c) Suspensión de hasta treinta días;
- d) Multa de hasta el veinte por ciento de sus retribuciones;
- e) Remoción por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes.

La sanción deberá ser adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta cometida y a los antecedentes en la función.

Las decisiones disciplinarias serán adoptadas, previo sumario que garantice el debido proceso legal, cuando no se hubiere dispuesto de otra forma en la presente ley.

Art. 14. — Sanciones disciplinarias en el proceso. Los jueces y tribunales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes, por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquel desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o defensor general de la Nación, será comunicada a la Cámara de Senadores del Congreso Nacional.

Art. 15. — Remoción con causa. Enjuiciamiento. Tribunal competente.

1. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán ser removidos en la forma y por las causas establecidas para los jueces de la Corte Suprema de Justicia, conforme el párrafo 1 del artículo 6º.
2. El enjuiciamiento de los restantes miembros, que componen el Ministerio Público conforme el párrafo 2 del artículo 6º, se efectuará por un tribunal compuesto por siete miembros e integrado de la siguiente manera:
 - a) Dos ex integrantes del Ministerio Público que se hayan desempeñado en el cargo de procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, designados por el Poder Ejecutivo nacional;
 - b) Dos senadores nacionales y dos diputados nacionales, designados por las respectivas Cámaras;
 - c) Un abogado designado por el Colegio Público de Abogados, que deberá ser abogado de la matrícula que haya ejercido la profesión no menos de veinte años y forme o haya formado parte de la lista de conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La reglamentación a dictarse establecerá las cuestiones atinentes a la presidencia, asiento, procedimiento y toda otra cuestión inherente a la creación y funcionamiento de dicho tribunal de enjuiciamiento.

3. Los demás funcionarios cuyo nombramiento efectúen el procurador general o el defensor general de la Nación podrán ser removidos por éstos, conforme lo prescrito en el párrafo 3 del artículo 6º.

TÍTULO II

Gobierno y administración del Ministerio Público

Art. 16. — *Organo competente.* El gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público estará a cargo del procurador general de la Nación, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten.

El Ministerio Público contará con un servicio administrativo-financiero propio.

La jefatura de gobierno y administración mencionadas incluyen, en particular, las siguientes atribuciones:

- a) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, incluso el reglamento disciplinario del Ministerio Público;
- b) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los poderes del Estado;
- c) Informar anualmente al Congreso Nacional sobre las labores cumplidas por el Ministerio Público;
- d) Elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación o sus reglamentos y del modo o forma como hacer efectiva su aplicación en los casos que lo juzgue pertinente;
- e) Celebrar los convenios y contratos necesarios para el funcionamiento del Ministerio Público;
- f) Disponer el gasto del organismo conforme el presupuesto asignado;
- g) Solicitar la colaboración de las autoridades de todo orden para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, las que deberán prestarlas en la medida de su respectiva competencia;
- h) Decidir sobre la promoción y designación del personal del Ministerio Público, sin perjuicio de las facultades del defensor general de la Nación.

Art. 17. — *Autarquía financiera.* A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con el crédito presupuestario propio.

El procurador general de la Nación elaborará, con intervención del defensor general de la Nación el proyecto de presupuesto y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su análisis e integración al presupuesto general nacional.

Art. 18. — *Ejecución presupuestaria. Control.* En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación. La Comisión Bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuenta del ejercicio.

TÍTULO III

Funciones del Ministerio Público en general

Art. 19. — *Competencia. Facultades y deberes del Ministerio Público.* Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que así se requiera;
- b) Ejercer la acción pública penal en las causas criminales y correccionales, en la forma y con el alcance previsto en el Código Procesal Penal de la Nación;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos en la ley o los reglamentos. En especial, la representación procesal de los intereses colectivos o difusos, promoviendo la acción tendiente a tutelarlos mediante los procedimientos que establezcan las leyes;
- d) Intervenir en todos los asuntos en que se hallaren involucrados el interés de la Nación y el orden público;
- e) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales;
- f) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, así como el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo y sustantivo;
- g) Promover acciones, intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas que correspondan, concernientes al derecho de los menores, incapaces en general o inhabilitados carentes de representación o asistencia legal, o cuando sea necesario suplir la inacción de sus representantes necesarios o de las personas que los tuvieren bajo su guarda o custodia, todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que corresponde por ley;
- h) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los juzgables, cuando fuesen pobres o estuviesen ausentes, y toda vez que sea requerida en las causas penales, procediendo en la forma que establezcan las leyes específicas;
- i) Concurrir a solicitud del Defensor del Pueblo a las inspecciones o visitas que realice en el ejercicio de sus funciones;
- j) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona; no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho fin, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación.

Art. 20. — *Alcances de actuación en el proceso judicial.* Las acciones públicas, dictámenes e intervenciones en juicios de los miembros del Ministerio Público,

carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con las limitaciones que prevén las leyes procesales.

No obstante, sus dictámenes y requerimientos merecen siempre la consideración de los jueces, quienes están obligados a tratar sólo los argumentos que estimen conducentes para fundar sus decisiones.

A. 21. — Límites funcionales.

1. Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento del Poder Ejecutivo. No obstante ante un requerimiento fundado de organismos públicos, sus integrantes podrán emitir dictámenes consultivos no vinculantes sobre materias propias de sus competencias funcionales.
2. Los miembros del Ministerio Público bajo ningún concepto podrán ejercer funciones jurisdiccionales.

Art. 22. — Los integrantes del Ministerio Público, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales o a los particulares, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales para realizar diligencias, citar personas a sus despachos, al solo efecto de recabar información testimonial.

Ante el requerimiento de cualquier miembro del Ministerio Público, los organismos policiales y de seguridad prestarán la colaboración necesaria, destinando el personal y medios a su alcance, con el objeto de satisfacer la directiva impartida por el requirente.

Art. 23. — *Relaciones con el Poder Ejecutivo.* El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del ministerio respectivo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para ser más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces inhabilitados, pobres y ausentes.

Art. 24. — *Relaciones con el Poder Legislativo.* La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijará la reglamentación que al efecto dicten ambas Cámaras del Congreso.

El procurador general de la Nación remitirá a dicha comisión un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público.

TÍTULO IV

Funciones del Ministerio Público Fiscal

Art. 25. — *Procurador General de la Nación.* Corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público Fiscal y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;

b) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;

c) Imponer sanciones a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;

d) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los funcionarios de la Procuración General de la Nación.

En estos casos, la actuación del fiscal que se designe estará sujeta a la dirección del titular;

e) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia;

f) Efectuar la propuesta en tema a que se refiere el artículo 4º de esta ley conforme con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;

g) Dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional.

Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso;

h) Intervenir en el trámite de las causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal tutela.

A tal efecto, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios llegados a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista;

i) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encuentre comprometido, con el mismo alcance previsto en el inciso anterior h);

j) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados de la Procuración General de la Nación y los del Ministerio Público;

k) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;

l) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar

instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las distintas instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;

- m) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- n) Promover la sustanciación de juicio político a los jueces, así como el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, cuando a su juicio unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- o) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores, respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- p) Disponer, por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos. Cuando actúen en cumplimiento de las instrucciones emanadas del procurador general dichos funcionarios podrán actuar a salvo su opinión personal.

Art. 26. — *Procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia.* En relación inmediata con el procurador general de la Nación habrá cuatro procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, les corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema en aquellas causas en las que así lo resuelva el procurador general;
- c) Informar al procurador general respecto de las causas en que intervengan;
- d) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento, o vacancia;
- e) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 27. — *Fiscales generales de la Procuración General.* Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general, y cuando éste así lo disponga, con los procuradores generales adjuntos, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso d) del artículo 26 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal establecidos en el artículo 27.

Art. 28. — *Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única. Competencias especiales.* Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única y a los de competencias especiales:

- a) Promover ante los mismos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Elevar al procurador general de la Nación un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario;
- d) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- e) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general de la Nación;
- f) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la justicia plenaria;
- g) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general de la Nación sobre los fiscales ante las instancias inferiores y el personal de la fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general de la Nación;
- h) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que corresponda, a los efectos de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Fiscal y las encomendadas por las leyes y reglamentos;
- i) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación.

Art. 29. — *Fiscal general de Investigaciones Administrativas.* Corresponde al fiscal general de Investigaciones Administrativas:

- a) Ejercer las funciones y facultades previstas en los artículos 3º, incisos a), b) y c), y 6º de la ley 21.383, y las demás previstas en ellas que no sean derogadas por la presente ley;
- b) Proponer al procurador general la designación de los fiscales adjuntos de la fiscalía a su cargo;
- c) Redactar el reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y someterlo a la aprobación del procurador general de la Nación;
- d) Elevar un informe anual al procurador general de la Nación sobre la gestión de la Fiscalía y res-

ponder los pedidos de informes, que este último le formule;

- e) Ejercer la superintendencia que delegue el procurador general sobre los fiscales y el personal de la fiscalía a su cargo e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley, de la ley 21.383, del reglamento de superintendencia del Ministerio Público y del reglamento interno de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Art. 30. — *Fiscales generales adjuntos.* En relación inmediata con los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única y de la Procuración General de la Nación, actuarán los fiscales generales adjuntos ante dichos tribunales, a quienes corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción, cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 31. — *Fiscales generales adjuntos ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.* En relación inmediata con el fiscal general ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas actuarán los fiscales generales adjuntos quienes lo asistirán y cumplirán las directivas que les impartan, de conformidad con lo previsto en la presente ley, y en la ley 21.383. Asimismo, dichos fiscales intervendrán en las investigaciones que les asigne el fiscal general, conforme lo dispuesto por la ley 21.383.

Art. 32. — *Fiscales ante los jueces de primera instancia.*

- 1. Corresponde a los fiscales que actúen ante los jueces en primera instancia, actuar con las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón de grado debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijan las leyes.

Especialmente, les corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, a fin de asegurar el respeto al debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberá intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencias.

- 2. Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder, en miras al interés público.

Art. 33. — *Intervención fiscal.* Todos los jueces federales y los nacionales actuantes en la Capital Federal deberán dar intervención a los fiscales ante la justicia criminal y correccional, cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley confiere.

Art. 34. — *Deber de informar.* Los fiscales ante la primera instancia deberán informar a las correspondientes fiscalías ante las cámaras, de toda irregularidad que adviertan en el desempeño de las funciones judiciales y administrativas susceptibles de afectar el debido proceso legal y el interés público, cuya tutela les ha sido encomendada.

Art. 35. — *Fiscales auxiliares.* Los fiscales auxiliares colaborarán con un fiscal y les corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción, cuando por las necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Art. 36. — *Reuniones de consultas.* El procurador general de la Nación convocará, por lo menos una vez al año, una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 2º incisos b) y c).

Tales reuniones tendrán por finalidad:

- a) Considerar los informes anuales que se presenten conforme la presente ley;
- b) Procurar la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público;
- c) Tratar todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria.

TÍTULO V

Funciones del Ministerio Público Pupilar

Art. 37. — *Defensor general de la Nación.* El defensor general de la Nación tendrá las atribuciones que a continuación se señalan:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público Pupilar y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;

- b) Dictar reglamentos de superintendencia del Ministerio Público Pupilar, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- c) Intervenir en la confección del presupuesto del Ministerio Público Pupilar;
- d) Imponer sanciones a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Pupilar en los casos y formas establecidos en esta ley y la reglamentación que se dicte;
- e) Efectuar la propuesta en terna a que se refiere el artículo 4º de esta ley de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del ministerio a su cargo, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio Público Pupilar, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- g) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público Pupilar. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos a su despacho y en las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, con las excepciones que se mencionan en el segundo párrafo del inciso h) del artículo 26 de esta ley. También actuará, si correspondiere, cuando hubiera intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público Pupilar por pobres y ausentes;
- h) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Pupilar de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando esas funciones estuviesen en cabeza de un solo funcionario. Esta limitación no regirá para los funcionarios de la Defensoría General de la Nación.

En estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;

- i) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas funciones. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso

menores o incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos funcionarios;

- j) Asegurar, en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores o incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes.

Art. 38. — *Defensores generales adjuntos.* En relación inmediata con el defensor general de la Nación habrá dos defensores generales adjuntos, a quienes, además de las funciones que aquél les encomienda, les correspondrán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al defensor general, en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- c) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes y reglamentos.

Art. 39. — *Defensores públicos de menores e incapaces.* Corresponde a los defensores de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces, a fin de entablar en su defensa las acciones y recursos necesarios, ya sean en forma autónoma o junto con los representantes individuales. Con ese objeto, los tribunales judiciales deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes, toda vez que aquel interés se hallare comprometido;
- b) Desempeñar las funciones enunciadas en la presente ley y los artículos 50, 255, 491 a 494 y otros del Código Civil como las indicadas en toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas de seguridad, correccionales o disciplinarias que consideren pertinentes respecto de menores que exteriorizaran reiteradas faltas de conducta o se encontraran expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieren ser conjuradas por los padres o personas que los tengan a su cuidado. Tales medidas no podrán extenderse más allá de la mayoría de edad;
- d) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos

tratos, deficiencias u omisiones, en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentran. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;

- c) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda tratamiento y reeducación de menores e incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informada a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre lo concerniente a su marcha y desenvolvimiento en relación con el cuidado o atención de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del Patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley 10.903 y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de personas, efectuando las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- h) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos, y conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección, y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- i) Responder los pedidos de informes del defensor general.

Art. 40. — Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia - Competencias especiales. Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia, además de las descritas en el artículo anterior, las siguientes atribuciones:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Pupilar de menores e incapaces y las encomendadas por las demás leyes y reglamentos;
- b) Elevar un informe anual al defensor general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- c) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- d) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;

- e) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 continuará bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante la Cámara Nacional en lo Civil.

Art. 41. — Defensores públicos adjuntos. En relación inmediata con los defensores ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, actuarán los defensores generales adjuntos, a quienes corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al defensor titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiten judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo

Art. 42. — Defensores públicos de pobres y ausentes. Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, tendrán a su cargo la función que prescribe el artículo 20 en su inciso h) y a tal fin les corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza o se encontraren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramiten ante la justicia criminal y correccional siempre que fueren convocados al efecto;
- c) Entrevistar periódicamente a sus defendidos y arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes;
- d) Contestar las consultas que les formulen las personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y en su caso, patrocinarias para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;
- e) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación;
- f) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que correspondan, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos para su homologación.

Art. 43. -- Defensores de pobres y ausentes ante los tribunales de casación y de segunda instancia. Los defensores de pobres y ausentes ante los tribunales de casación y de segunda instancia, tendrán además de las atribuciones mencionadas en el artículo anterior, las siguientes:

- a) Distinir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de pobres y ausentes de las instancias anteriores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes ante las instancias anteriores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general de la Nación.

Art. 44. -- Tutores y curadores públicos. Los jueces nacionales y federales designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que fueren huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallaren persona que reúnan las condiciones legales o idoneidad necesaria para desempeñar tales cargos.

Serán funciones de los tutores y curadores:

- a) Cuidar los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean educados de forma tal que puedan tener acceso al ejercicio de algún oficio, profesión o actividad útil; y en el caso de quienes padezcan de enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando fuere el caso, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de las personas que han sido confiadas a su cargo, cuidar su patrimonio, proveer a su adecuada administración y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil. En el caso de los inhabilitados actuarán de conformidad con lo establecido por el artículo 152 bis del código citado;
- c) Llamar a hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirles explicaciones o para responder cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función. Con el mismo objeto podrá también dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público;
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;

- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallaren alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllas, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlas;
- g) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia de las gestiones y los asuntos que se encuentren a su cargo, y evacuar cualquier requerimiento que éste le formule.

TITULO VI

Funcionarios y personal del Ministerio Público

Art. 45. -- Régimen jurídico. Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente.

Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público de la Nación al Poder Judicial, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderá el reconocimiento de su jerarquía y antigüedad, al efecto de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras. Asimismo, conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre la Procuración General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas.

TITULO VII

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 46. -- Equiparaciones, Ministerio Público Fiscal. Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Nación, pasarán a desempeñarse en los cargos que en cada caso se indican, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, mencionado en el inciso e) del artículo 2º;
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema, en los cargos de procuradores fiscales adjuntos previstos en el inciso b) del artículo 2º;
- c) Los fiscales de cámara ante los tribunales de casación, de segunda instancia y orales de instancia única; el procurador y el subprocurador general del trabajo, los secretarios de la Procuración General de la Nación y el fiscal nacional de investigaciones administrativas, en los cargos de fiscales generales mencionados en el inciso c) del artículo 2º;
- d) Los fiscales adjuntos de los fiscales de cámara o de tribunales orales, de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y los secretarios

letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 2º;

e) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia de cualquier fuero, los fiscales criminales de instrucción, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales mencionados en el inciso e) del artículo 2º;

f) Los fiscales adjuntos ante la Justicia de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación, y el fiscal coadyuvante de la Justicia Nacional del Trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 2º.

Art. 47. — Equiparaciones. Ministerio Público Popular. Los actuales integrantes del Ministerio Público Popular pasarán a desempeñarse en los cargos que en cada caso se indica, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

a) El defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor general de la Nación, previsto en el inciso a) del artículo 3º;

b) Los defensores generales adjuntos creados por esta ley, en el cargo previsto en el inciso b) del artículo 3º;

c) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la Cámara de Casación Penal, ante los tribunales orales en lo criminal y ante los tribunales orales de menores, en los respectivos cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y ante los tribunales colegiados de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 3º;

d) Los asesores de menores e incapaces de cámara y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales colegiados de instancia única y de segunda instancia, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 3º;

e) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes y los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia, y defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 3º.

Art. 48. — Subsistencia de cargos. Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo

el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías determinados en esta ley.

Art. 49. — Estructura. El procurador general de la Nación, con intervención del defensor general de la Nación, podrá modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Para ello elaborará una propuesta que será remitida al Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso de la Nación.

Art. 50. — Información. Los integrantes del Ministerio Público informarán a su superior jerárquico inmediato, los asuntos a su cargo que debido a su importancia, trascendencia o complejidad requieran un tratamiento especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo el modo de solucionarlas.

Art. 51. — Derogaciones. Modificaciones. A partir de la vigencia de la presente ley el ejercicio de la acción pública ante los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal será ejercido por los integrantes del Ministerio Público que ella determina.

Derógase la ley 15.464; el título VII, VIII y XI de la ley 1.893; el artículo 31 cuarto párrafo, inciso a) del decreto ley 1.285/58; el inciso d) del artículo 3º en cuanto se refiere al ejercicio de la acción pública y los artículos 4º y 8º de la ley 21.383, y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Los artículos 1º y 2º de la ley 21.383 y los artículos 8º a 16 de la ley 18.345 deberán adecuarse a lo que estatuye esta ley en cuanto a denominación, jerarquía, obligaciones y atribuciones de los funcionarios respectivos.

Art. 52. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Augusto Alasino.

Texto del proyecto presentado por los senadores
(m. c.) Bordón y Fadel

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE MINISTERIO PÚBLICO

TÍTULO I

Organización del Ministerio Público

Principios generales

Artículo 1º. — El Ministerio Público instituido por el artículo 120 de la Constitución Nacional está formado por el Ministerio Público Fiscal y por el Ministerio Público de la Defensa, cuya organización y funciones establece la presente ley.

El Ministerio Público ejerce imparcialmente la defensa de la legalidad, con unidad de actuación e independencia funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales.

El principio de dependencia jerárquica exige que cada integrante del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados y funcionarios que lo integran.

Integración. Ministerio Público Fiscal

Art. 2º — Integran el Ministerio Público Fiscal los siguientes magistrados:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos;
- c) Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Los fiscales generales adjuntos ante los mismos tribunales indicados en el inciso anterior, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- e) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los fiscales de Investigaciones Administrativas;
- f) Los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Integración. Ministerio Público de la Defensa

Art. 3º — Integran el Ministerio Público de la Defensa los siguientes magistrados:

- a) El defensor general de la Nación;
- b) Los defensores generales adjuntos;
- c) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- d) Los defensores públicos adjuntos ante los tribunales mencionados en el inciso anterior y los de la Defensoría General;
- e) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Además, forman parte del Ministerio Público de Defensa como funcionarios, los tutores y curadores públicos que esta ley prevé.

Requisitos para acceder a los cargos. Designaciones

Art. 4º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación.

Los magistrados mencionados en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 2º y b), c), d) y e) del artículo 3º serán designados por igual procedimiento. Para cada designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá elegir dentro de una terna presentada por el procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación, según corresponda; la que será integrada respetando los antecedentes de los candidatos, de acuerdo con la reglamentación que se dicte, que incluirá un examen de aptitud.

En la designación de los fiscales generales y defensores generales públicos adjuntos mencionados en los artículos 2º, inciso d) y 3º, inciso d), el titular de la fiscalía o defensoría, según el caso, propondrá al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación la terna, que éstos elevarán al Poder Ejecutivo, luego de aprobarla. Igual procedimiento se seguirá para la designación de los fiscales auxiliares mencionados en el artículo 2º, inciso f) a propuesta del titular de la fiscalía donde estuviera la vacante.

Para ejercer los cargos de procurador general de la Nación y Defensor General de la Nación se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Iguales condiciones se requieren para ejercer los cargos de procurador general adjunto y defensor general adjunto.

Para el desempeño de los cargos mencionados en los incisos c) y d) de los artículos 2º y 3º deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de cámara.

Para el desempeño de los cargos mencionados en los incisos e) y f) del artículo 2º y e) del artículo 3º deberán reunirse las condiciones exigidas para ser juez de primera instancia.

En ningún caso se podrá acceder a funciones de magistrado del Ministerio Público sin contar con cuatro años de ejercicio efectiva en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial que requieran ese título.

Estabilidad

Art. 5º — El procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación y los demás magistrados que se mencionan en los artículos 2º y 3º, gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser removidos por las causas expresadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, por el tribunal de enjuiciamiento y mediante el procedimiento que esta ley prevé.

Con su conformidad podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales o destinadas a otras funciones distintas a las asignadas en su designación, siempre dentro de la misma jerarquía.

Remuneraciones. Jerarquía

Art. 6º — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán de modo siguiente:

- a) El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación percibirán una remuneración equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos y los magistrados mencionados en el inciso c) de los artículos 2º y 3º percibirán una retribución equivalente a la de juez de Cámara;
- c) Los magistrados mencionados en los incisos c) y d) de los artículos 2º y 3º percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
- d) Los magistrados mencionados en el inciso f) del artículo 2º percibirán una retribución equivalente al 80 % de la que corresponda al juez de primera instancia.
- e) Los funcionarios mencionados en el último párrafo del artículo 3º, percibirán una retribución equivalente a la de secretario de Cámara;
- f) Las equiparaciones indicadas precedentemente se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios. Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Inmunidades

Art. 7º — Los magistrados del Ministerio Público en sus respectivos desempeños en el proceso, gozan de las inmunidades funcionales acordadas a los legisladores por el artículo 69 de la Constitución Nacional, en este supuesto, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda y al tribunal de enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho. No podrán ser molestados o enjuiciados por las opiniones o intervenciones en los procesos.

Las cuestiones que ellos denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación, o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner e' hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Juramento

Art. 8º — Los integrantes del Ministerio Público, en todos sus rangos, al tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de desempeñarlos fielmente y cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación lo harán ante el presidente de la Nación, en su calidad de jefe de Estado (artículo 99, inciso 1º de la Constitución Nacional).

Los demás integrantes del Ministerio Público lo harán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda o ante el magistrado que éstos designen al efecto.

Incompatibilidades

Art. 9º — Quienes integran el Ministerio Público no podrán abogar ni ejercer representación de terceros en juicio, salvo cuando se trate de sus propios asuntos o de los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hagan en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establece la ley respecto de los jueces de la Nación.

Parentesco con los jueces

Art. 10. — No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien sea pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los magistrados judiciales ante los cuales desempeñe su ministerio.

Recusación y excusación

Art. 11. — La recusación y excusación de los miembros del Ministerio Público se rigen por lo establecido en las leyes procesales aplicables a la causa en que intervengan.

Podrán excusarse cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obstan a su actuación imparcial.

En ningún caso se admitirá la recusación sin causa.

Sustituciones

Art. 12. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las reglamentaciones que dicte su autoridad competente.

Sanciones disciplinarias

Art. 13. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, por incumplimiento de los deberes que les incumben, las sanciones disciplinarias siguientes: prevención, apercibimiento y multa de hasta el 20 % de sus retribuciones. Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales generales y defensores generales de segunda instancia respecto de los magistrados de rango que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que reglamentará el procurador general

de la Nación, debiendo quedar garantizado el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, serán impugnables por la vía judicial que corresponda.

Sanciones disciplinarias en el proceso

Art. 14. — Los jueces y tribunales podrán imponer prevenciones, apercibimientos o multas que no podrán superar el 10 % de sus remuneraciones a los miembros del Ministerio Público, por faltas cometidas contra su autoridad o decoro en el trámite de las causas en las que intervengan, las cuales serán recurribles en la misma forma que las sanciones disciplinarias aplicadas a los litigantes.

TITULO II

Gobierno y administración general y financiera del Ministerio Público

Órgano competente - Atribuciones

Art. 15. — El procurador general de la Nación, tendrá a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley de las reglamentaciones que se dicten.

A los efectos operativos el Ministerio Público contará con un servicio administrativo-financiero propio.

El gobierno y la administración general y financiera a cargo del procurador general de la Nación incluyen, en particular, las siguientes atribuciones:

- a) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, incluso el reglamento disciplinario del Ministerio Público;
- b) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los otros poderes del Estado;
- c) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales y, cuando sea el caso, con las autoridades provinciales y municipales;
- d) Requerir la colaboración de las autoridades de todo orden para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, las que deberán prestarla en la medida de su respectiva competencia;
- e) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, pudiendo delegar esa competencia;
- f) Celebrar los contratos y convenios que se requieran para el funcionamiento del organismo;
- g) Poner en conocimiento del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, en los casos en que lo juzgue pertinente, las opiniones del Ministerio Público acerca de la conveniencia de producir reformas legislativas o reglamentarias.

Autarquía financiera

Art. 16. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera el Ministerio Público contará con crédito presupuestario propio. El procurador general elaborará, con intervención del Defensor General, el proyecto de presupuesto y lo remitirá al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

Ejecución presupuestaria. Control

Art. 17. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observará la previsión de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación. La comisión bicameral creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

TITULO III

Enjuiciamiento de los magistrados del Ministerio Público

Tribunal competente

Art. 18. — El enjuiciamiento del procurador general de la Nación, del defensor general de la Nación y de los restantes magistrados que componen el Ministerio Público se efectuará en un tribunal integrado por:

- a) Dos vocales que deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex procuradores generales de la Nación o ex defensores generales de la Nación, designados uno por el Poder Ejecutivo y otro por el Senado;
- b) Dos abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, que serán designados mediante sorteo público, de la lista de conjuces de la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal de enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del tribunal de enjuiciamiento durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Añ cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Como fiscal ante el tribunal actuará un ex procurador general de la Nación o, en su defecto, un abogado que reúna las condiciones establecidas en el segundo párrafo de este artículo designado por el procurador general de la Nación.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará el defensor general de la Nación, o un defen-

por público ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia, o de instancia única, a opción del imputado. En caso de ausencia de este último, el defensor oficial proveerá a su defensa.

Los integrantes del tribunal y funcionarios auxiliares serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Reglas de procedimiento

Art. 19. — El tribunal de enjuiciamiento desarrollará su labor conforme a las siguientes reglas:

- a) Podrá rechazar *in limine* o luego de una sucinta prevención sumaria, toda denuncia manifiestamente infundada, previa opinión del fiscal;
- b) La instancia de debate será abierta por decisión del tribunal, fundada en los hechos concretos materia de denuncia o acusación, que puedan configurar alguna de las causales expresadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, contra personas determinadas; la prueba será íntegramente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes;
- c) Durante el debate, el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que corresponda. Esto último no será vinculante para el tribunal;
- d) El juicio será oral, público, contradictorio y continuo;
- e) Los plazos para el cumplimiento de los actos procesales serán fijados por el presidente del tribunal entre un mínimo de cinco y un máximo treinta días, salvo traslados y vistas en la prevención sumaria, que serán siempre de tres días. Todos los plazos se contarán en días hábiles;
- f) La sentencia deberá dictarse en un plazo no mayor de quince días, que fijará el presidente del tribunal al cerrar el debate;
- g) Según las circunstancias del caso, el tribunal podrá suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptará otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trabará embargo del resto, a las resultas del juicio.

Si fuera absuelto y hubiese sido suspendido, se lo reintegrará inmediatamente a sus funciones y percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones;

- h) El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes. Si hubiese empate, el acusado será absuelto;
- i) La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese con-

denatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado y, en su caso, inhabilitarlo para ocupar en adelante cargos públicos. Si se funda en hechos que puedan configurar un delito de acción pública o ello surgiera de la prueba, o aquella ya hubiese sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente;

- j) La sentencia solamente podrá ser recurrida por la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48. El fiscal podrá apelar en favor del acusado;
- k) A todos los efectos, se aplicará supletoriamente el Código Procesal Penal de la Nación.

TÍTULO IV

Funciones del Ministerio Público en general

Atribuciones, facultades y deberes del Ministerio Público

Art. 20. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera;
- b) Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales;
- c) Promover y ejercer la acción penal pública en la forma y alcances establecidos por la ley;
- d) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos por la ley;
- e) Intervenir cuando fuera necesaria la autorización judicial para la realización de determinados actos;
- f) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicar los tribunales, pidiendo el remedio de los incumplimientos y abusos que noten;
- g) Defender la jurisdicción y competencias de los tribunales;
- h) Promover acciones, intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas que correspondan, concernientes al derecho de los menores, incapaces en general o inhabilitados carentes de representación o asistencia legal, o cuando sea necesario suplir la inacción de los representantes necesarios o asistentes legales o de las personas que las tengan a su cargo, o bien para controlar la gestión de estos últimos;
- i) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes.

Facultades de investigación

Art. 21. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, para el mejor cumplimiento, podrán requerir informes a los tribunales y a los orga-

nismos nacionales, provinciales, comunales, o a los particulares, conforme a lo establecido en las leyes procesales.

Límites funcionales

Art. 22. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fiscal en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Relaciones con el Poder Ejecutivo

Art. 23. — El Poder Ejecutivo se relacionará con el Ministerio Público por intermedio del Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del ministerio respectivo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Relaciones con el Poder Legislativo

Art. 24. — La relación del Poder Legislativo con el Ministerio Público se efectuará a través de una comisión bicameral cuya composición y funciones fijará la reglamentación que al efecto dicten ambas Cámaras del Congreso.

El procurador general, por su parte, remitirá a dicha comisión un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público.

TÍTULO V

Funciones del Ministerio Público Fiscal

Procurador general de la Nación

Art. 25. — Sin perjuicio de las facultades otorgados por el título II de esta ley, el procurador general de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público Fiscal y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- c) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- d) Disponer a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá

para los magistrados de la Procuración General de la Nación.

En estos casos la actuación del fiscal que se designe estará sujeta a la dirección del titular:

- e) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de esta ley;
- f) Efectuar la propuesta de terna a que se refiere el artículo 49 de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- g) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso;
- h) Intervenir en el trámite de las causas en que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal tutela.

A los fines del ejercicio de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando la sana discreción del tribunal, corresda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista;

- i) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema cuando el interés público se encuentre comprometido, con el mismo alcance previsto por el inciso h) de este artículo;
- j) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;
- k) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- l) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema;
- m) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el título III de esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos y otros se hallaren en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;

- m) Disponer, por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y reglamentos;

Quando actúen en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador general, dichos magistrados podrán dejar a salvo su opinión personal;

- n) Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23, podrá responder las consultas sobre materias propias de la competencia funcional del Ministerio Público Fiscal que le formule el presidente de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo, y los presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional.

Magistrados de la Procuración General de la Nación

Art. 26. — En el gobierno y administración general y financiera del Ministerio Público y en las atribuciones propias del Ministerio Público Fiscal, el procurador general actuará asistido por los procuradores generales adjuntos, los fiscales generales, fiscales generales adjuntos móviles y fiscales auxiliares de la Procuración General de la Nación instituidos por la presente ley.

Procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Art. 27. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación habrá cuatro procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema, en aquellas causas en las que así lo resuelva el procurador general;
- Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- Informar al procurador general respecto de las causas en que intervengan;
- Desempeñar las demás funciones que les encomiende las leyes y reglamentos.

Fiscales de la Procuración General de la Nación

Art. 28. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación, cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga con los procuradores generales adjuntos en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Quando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso d) del artículo 26 de la presente

ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 2º.

Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 29. — Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única:

- Promover ante los mismos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;
- Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general;
- Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Fiscales generales ante los tribunales de segunda instancia

Art. 30. — Corresponde, además a los fiscales generales ante los tribunales de segunda instancia:

- Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario;
- Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueren invitados o lo prevean las leyes;
- Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Fiscal y las encomendadas por las leyes y reglamentos.

Fiscales generales adjuntos

Art. 31. — En relación inmediata con los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, actuarán los fiscales ge-

nerales adjuntos ante dichos tribunales, a quienes corresponderán las siguientes atribuciones;

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción, cuando por las necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 32. — Corresponderá a los fiscales ante los jueces de primera instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijan las leyes.

En especial, les corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados, o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberán intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencia.

Los fiscales ante la Justicia en lo penal deberán asistir a las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento o controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que puedan corresponder en miras al interés público.

Podrán imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidas en esta ley y su reglamentación.

Fiscales auxiliares de primera instancia

Art. 33. — En relación inmediata con los fiscales ante los tribunales de primera instancia, actuarán los fiscales auxiliares ante dichos tribunales, a quienes corresponden las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción, cuando por las necesidades funcionales, éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus

funciones, en la medida de las necesidades del servicio;

- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos.

Reuniones de consulta

Art. 34. — El procurador general convocará, por lo menos una vez al año, una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 2º incisos b) y c).

Dichas reuniones tendrán por objeto:

- a) Considerar los informes anuales que se presenten de acuerdo con lo previsto en la presente ley;
- b) Procurar la unificación de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público en los temas de su competencia;
- c) Intercambiar opiniones sobre todo lo concerniente a la mayor eficacia del servicio;
- d) Tratar las demás cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria.

TÍTULO VI

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación

Organización

Art. 35. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano desconcentrado de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

Art. 36. — Los magistrados de la Fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley. El procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas propondrá al procurador general de la Nación las ternas de candidatos para desempeñar los cargos de magistrados de la Fiscalía y notificará por sí a los funcionarios y demás personal.

Procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas

Art. 37. — Corresponde al procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración centralizada y descentralizada y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de

recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos;

- c) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales las investigaciones que no resolviera efectuar personalmente;
- d) Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación, con la intervención necesaria del procurador general fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas, o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 20 inciso d). La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el Reglamento Interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y de personal de servicio y maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
- g) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el procurador general;
- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;
- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación.

Fiscales generales de Investigaciones Administrativas

Art. 38. — En relación inmediata con el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas habrá dos fiscales generales de Investigaciones Administrativas a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la acción pública ante los tribunales nacionales y federales en las causas en que así se resuelva conforme lo establecido en el artículo 38 inciso d);

- b) Sustituir al procurador general adjunto en los sumarios administrativos y en las investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- c) Reemplazar al procurador general adjunto en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia, con intervención del procurador general de la Nación;
- d) Informar al procurador general adjunto respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales de Investigaciones Administrativas

Art. 39. — Corresponde a dos fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y a diez fiscales de Investigaciones Administrativas asistir al procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias del Ministerio Fiscal que este último les asigne.

Comunicación de procesos penales

Art. 40. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de sus funciones, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía.

Investigaciones disciplinarias

Art. 41. — Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación, en caso de tratarse los imputados de personal superior. En los supuestos restantes, los antecedentes serán girados al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trató. En ambas circunstancias, dichas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones la Fiscalía será tenida necesariamente como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta o anulable de lo actuado o resuelto según el caso.

Competencias especiales

Art. 42. — Además de las facultades de investigación previstas en el artículo 21 de esta ley, los magistrados que integran la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, estarán investidos de las siguientes:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrá requerir de las reparticiones o funcionarios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc;
- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funcio-

es de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación para que determine las acciones a adoptar;

- c) Solicitar al Poder Ejecutivo, mediante resolución fundada, previa conformidad del procurador general de la Nación, la suspensión de los actos o hechos sometidos a investigación cuando puedan causar perjuicio grave e irreparable al Estado;
- d) Actuar en cualquier lugar de la República en cumplimiento de sus funciones, ya sea en forma directa o por medio de las autoridades judiciales correspondientes, a las que deberán requerir a tal efecto.

Intervención de los fiscales

Art. 43. — Los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, intervendrán en aquellas investigaciones que les hayan sido asignadas por el procurador general adjunto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 inciso c), con las facultades que esta ley acuerda a dicho magistrado.

Agotada la investigación o cuando el procurador general adjunto lo disponga, los fiscales generales, fiscales generales adjuntos o fiscales, pondrán el expediente a su despacho y continuarán asistiendo o en cuanto éste resuelva.

Comunicación de sumarios administrativos.

Intervención de la Fiscalía

Art. 44. — La autoridad administrativa que corresponda deberá comunicar a la Fiscalía la inculcación de aquellos sumarios administrativos que revistan importancia, gravedad o trascendencia, con una relación de los hechos que la originen, a fin de que ésta tome intervención, si lo estimare conveniente. Si la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no tomare intervención, una vez resuelto el sumario, deberá remitirle copia autenticada de la resolución final, dentro de los cinco días de quedar firme.

Carácter de parte en sumarios administrativos

Art. 45. — En los casos mencionados en el artículo precedente, en que decidiera tomar intervención, la Fiscalía será tenida como parte necesaria en los términos del artículo 42 último párrafo de esta ley.

Investigaciones Administrativas y juicio político

Art. 46. — Cuando de las investigaciones practicadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, resulten cargos imputables a funcionarios que, de acuerdo con la Constitución Nacional, están sometidos al procedimiento de juicio político, los antecedentes serán girados al procurador general de la Nación, quien dispondrá lo que corresponda.

Investigaciones Administrativas y cese del agente

Art. 47. — Las facultades, atribuciones y deberes que por la presente ley se confieren a la Fiscalía de Inves-

tigaciones Administrativas, se mantendrán aun cuando el agente cese o hubiera cesado en su cargo.

Normas supletorias

Art. 48. — En las investigaciones mencionadas en el artículo 38, inciso a), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ajustará sus procedimientos a las normas del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto sean compatibles con las disposiciones contenidas en la presente.

TITULO VII

Funciones del Ministerio Público de la Defensa

Defensor general de la Nación

Art. 49. — Sin perjuicio de las potestades previstas en el título II de esta ley que competen al procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la jefatura del Ministerio Público de la Defensa y la superintendencia relativa al específico cumplimiento de sus funciones;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia sobre las funciones del Ministerio Público de la Defensa, fijar normas generales para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- c) Intervenir en la confección del presupuesto del Ministerio Público de la Defensa;
- d) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos en esta ley y la reglamentación que se dicte;
- e) Efectuar la propuesta en terna a que se refiere el artículo 49 de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las medidas que fueran necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio Público de la Defensa y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y reglamentos;
- g) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos en que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dará vista al defensor general en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos en su despacho, y en las quejas planteadas en forma directa por la negatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, con las excepciones que se mencionan en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 26 de la presente ley. También actuará el defensor general, si correspondiere cuando hubiere intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa por pobres y ausentes;

- h) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia o de instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando esas funciones estuviesen en cabeza de un sólo magistrado. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación.

En estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;

- i) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso menores o incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
- j) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes;
- k) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en el título III de esta ley, cuando a su juicio se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Defensores generales adjuntos

Art. 50. — En relación inmediata con el defensor general de la Nación habrá dos defensores generales adjuntos, a quienes, además de las funciones que aquél les encomiende, corresponderán las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al defensor general, en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- c) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervengan;

- d) Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes y reglamentos.

Defensores públicos de menores e incapaces

Art. 51. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen.

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces;
- b) Entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con los representantes necesarios;
- c) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores e incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen;
- d) Desempeñar las funciones enunciadas en el artículo 20 inciso h) de esta ley, así como las que les asigne otra norma legal o reglamentaria;
- e) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados así como penados bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercean;
- f) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral con independencia de su situación familiar o personal;
- g) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y readaptación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;
- h) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos, y conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del

caso para su protección y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;

- i) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914, sobre internación y externación de personas;
- j) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- k) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- l) Citar y hacer comparecer personas a su despacho, cuando a su juicio ello sea conducente al ejercicio de su ministerio, para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;
- ll) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- m) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación;
- n) Responder los pedidos de informes del defensor general.

Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia. Competencias especiales

Art. 52. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de segunda instancia, además de las descriptas en el artículo anterior, las siguientes atribuciones:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público de la defensa de menores e incapaces y las encomendadas por las leyes y reglamentos;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se deberán fundar en cada caso;
- c) Elevar un informe anual al defensor general sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia;

- d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- f) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiere al derecho de los menores o incapaces;
- g) Participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto, cuando fueran invitados o lo prevengan las leyes;
- h) Participar, por razones fundadas y con la conformidad del defensor general, en comisiones o consejos u organismos de otros poderes del Estado que desarrollen actividades permanentes vinculadas con la función de que se trata.

El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81 pasa a integrar el Ministerio Público, bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y en lo comercial.

Defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 53. — En relación inmediata con los defensores ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, actuarán los defensores generales adjuntos ante dichos tribunales, a quienes corresponderán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al defensor titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales, éste así lo requiera; y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistirlo en el ejercicio de sus funciones en la medida de las necesidades del servicio;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes y reglamentos.

Tutores y curadores públicos

Art. 54. — Los jueces nacionales y federales designarán en los procesos judiciales, tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello impedirá la designación de tutores o guardadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Serán funciones de los tutores y curadores públicos:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, pro-

curando que los primeros sean instruidos para que puedan en su momento acceder a una profesión, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda su rehabilitación.

- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos como así también su patrimonio; cuando corresponda proveer a su adecuada administración, y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación y representarlos en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin pacientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva;
- d) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, como así también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;
- e) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando ello fuere necesario para el desempeño de su ministerio, a fin de requerirle explicaciones o para considerar los tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo;
- f) Visitar periódicamente los establecimientos donde se hallen alojadas personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos;
- g) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia sobre las gestiones y los asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste le formule.

Defensores públicos de pobres y ausentes

Art. 55. — Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, ejercerán las funciones indicadas en el artículo 20, inciso 1) de la presente ley, a cuyo fin tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores y demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza;
- b) Ejercer la defensa y representación en juicio de las personas demandadas que se encuentren au-

sentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;

- c) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos;
- d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- e) Contestar las consultas que les formulen las personas carentes de recursos y asistirles en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan;
- f) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;
- g) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste informe anual relativo a su gestión;
- h) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Defensores de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia

Art. 56. — Los defensores de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia, tendrán, además, las atribuciones siguientes:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de instancias anteriores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes ante las instancias anteriores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público de la Defensa que actuará en el área de su competencia.

Honorarios de los defensores de pobres y ausentes

Art. 57. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor de pobres y ausentes, deberá solventar la defensa, en caso de condena, si cuenta con medios suficientes. A tal fin, el tribunal, regulará

los honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ello surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

En caso de incumplimiento en el pago de honorarios dentro de los diez días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios recaudados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del Ministerio Público.

TITULO VIII

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Régimen jurídico

Art. 58. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley las normas pertinentes del decreto ley 1.258/58 y la reglamentación que dicte el procurador general de la Nación. En particular, se establece:

- a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente;
- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público de la Nación al Poder Judicial, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría u otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre la Procuración General y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Nación gozan de estabilidad y no podrán ser removidos sino por causa de ineptitud o mala conducta previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Sólo con su conformidad podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales, distintas a las asignadas en su designación, siempre conservando su jerarquía;

- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general de la Nación, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante. El procurador general podrá delegar esta competencia.

TITULO IX

Disposiciones complementarias y transitorias

Cese de la representación del Estado en juicio

Art. 59. — Dentro de los noventa días de vigencia de la presente ley, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá designar representantes en todos los juicios en trámite, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, cesando al vencimiento de dicho plazo la intervención de los integrantes del Ministerio Público. Esta disposición regirá incluso en los casos en que los códigos procesales dispongan la intervención del Ministerio Público para la ejecución de condenas pecuniarias.

Subsistencia de cargos

Art. 60. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general no reglamente la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Equiparaciones - Ministerio Público Fiscal

Art. 61. — Los actuales integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General de la Nación pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 2º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El Procurador General de la Nación, en el cargo de igual denominación previsto en el inciso a);
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de procuradores generales adjuntos previstos en el inciso b).

Mientras permanezca en el cargo, el actual titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevelan los artículos 1º y 2º de la ley 21.383;

- c) Los fiscales de cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y orales de instancia única; el procurador general de la Nación y los fiscales adjuntos de los secretaríos de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en

los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c);

- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el subprocurador general del Trabajo, los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d).

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la Subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, previsional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9º de la ley 18.345;

- e) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de fiscales previstos en el inciso e);
- f) Los fiscales adjuntos ante la Justicia de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal conyuvante de la Justicia Nacional del Trabajo, en los respectivos cargos auxiliares previstos en el inciso f).

Equiparaciones - Ministerio Público de la Defensa

Art. 62. — Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 3º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cargo de defensor general de la Nación, previsto en el inciso a);
- b) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la cámara de casación penal y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y ante los tribunales colegiados de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c);
- c) Los asesores de menores e incapaces de cámara y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales colegiados de segunda instancia y ante los tribunales colegiados de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c);
- d) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes y los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia y defensores públicos

de menores e incapaces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso e).

Art. 63. — En los distritos judiciales donde no se hubieran cubierto con cargos autónomos las funciones de defensores de menores e incapaces y de pobres y ausentes establecidas en la presente ley, hasta tanto se designen titulares respectivos en ambos cargos, los actuales defensores de pobres, incapaces y ausentes continuarán ejerciendo ambos ministerios.

En los ámbitos de competencia material o territorial donde se hubiesen designado defensores públicos ante los tribunales colegiados de segunda instancia ejercerán la función de los defensores públicos ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o, en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones, según el caso. Hasta tanto las designaciones se produzcan, dichos defensores públicos, ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del artículo 3º.

Derogaciones

Art. 64. — Deróganse las leyes 15.464 y 21.383; los títulos VII; VIII y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31 cuarto párrafo inciso a) del decreto ley 1.258/58; el artículo 3º incisos a) y b) y 5 de la ley 20.581; el capítulo II de la ley 18.345; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias y toda otra norma que resultare contradictoria con la presente ley.

Art. 65. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José O. Bordón. — Mario N. Fadel.

Texto del proyecto presentado por el senador
Aguirre Lanari

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente que goza de autonomía funcional y autarquía financiera, y tiene por función promover la actuación de la justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la Nación, de conformidad a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Art. 2º — El Ministerio Público está integrado por el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, el procurador general adjunto, el defensor general adjunto, el procurador general del Trabajo, el subprocurador general del Trabajo, los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fiscales adjuntos de la Procuración General de la Nación, los defensores adjuntos de la Defensoría General de la Nación, los fiscales y defensores de la Cámara Nacional de Casación Penal, los fiscales y defensores ante las cámaras de apelaciones en lo federal y nacionales de

la Capital Federal, los fiscales y defensores ante los tribunales orales, juzgados en lo criminal y correccional y penal económico, los fiscales ante los juzgados de primera instancia, los asesores de menores e incapaces y defensores de pobres y ausentes ante todas las instancias, fiscales auxiliares y defensores auxiliares.

Art. 3º — Los magistrados y funcionarios que integran el Ministerio Público gozan de inamovilidad funcional e intangibilidad de sus remuneraciones.

Art. 4º — Tienen calidad de magistrados los integrantes del Ministerio Público que actúan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cámaras nacionales y tribunales orales.

Los restantes, vestirán la categoría de funcionarios.

Art. 5º — Los magistrados y funcionarios que integran el Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta, y sólo podrán ser removidos en la forma indicada en esta ley.

Art. 6º — Los magistrados que integran el Ministerio Público serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Senado de la Nación.

Los funcionarios serán designados por el procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación, según corresponda.

Art. 7º — Para ser procurador general de la Nación, defensor general de la Nación, procurador general adjunto o defensor general adjunto, se requieren las mismas condiciones que para ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los restantes magistrados del Ministerio Público deberán reunir las condiciones exigidas para ser designados de cámara de tribunal oral o de primera instancia, según se trate del tribunal ante el cual desempeñen sus funciones.

Los funcionarios del Ministerio Público deberán reunir los requisitos para ser designados secretarios de cámara.

Art. 8º — La remoción de los magistrados que integran el Ministerio Público únicamente podrá hacerse efectiva por las causales y según el procedimiento establecido por la Constitución Nacional para los jueces de los tribunales inferiores de la Nación.

Art. 9º — La remoción de los funcionarios que integran el Ministerio Público únicamente podrá hacerse efectiva mediante resolución del procurador general de la Nación o del defensor general de la Nación, según corresponda, previo sumario en el que se asegurará al imputado el debido proceso y la inviolabilidad de su defensa en juicio.

Art. 10. — Para la aplicación de las demás sanciones disciplinarias a los magistrados y funcionarios del Ministerio Público, regirán análogamente las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Justicia Nacional y en el reglamento para la justicia nacional, las que serán dispuestas por resolución del procurador general de la Nación o del defensor general de la Nación, según corresponda.

Las mismas normas regirán para la remoción y sanciones disciplinarias de los empleados que se desempeñen ante la Procuración General de la Nación y ante la Defensoría General de la Nación.

Art. 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan R. Aguirre Lanari.

Texto del proyecto presentado por la señora senadora Fernández Meijide

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

EL MINISTERIO PUBLICO

Organización. Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público, instituido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, es el órgano encargado de la defensa jurisdiccional de la legalidad y la tutela de los intereses generales de la sociedad, cuya organización, funciones y competencias se establecen en la presente ley.

Art. 2º — El Ministerio Público está integrado por el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, quienes tendrán a su cargo el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, y los fiscales defensores y tutores públicos cuyas funciones establece la presente ley.

Art. 3º — El Ministerio Público ejerce la defensa del interés público con plena autonomía y sin dependencia funcional respecto de los otros poderes del Estado. Su actuación imparcial se sujetará al principio de legalidad, con unidad de actuación.

Forma de designación y remoción

Art. 4º — El procurador general y el defensor general serán designados por la asamblea legislativa por mayoría absoluta de votos y durarán en sus funciones el término de 5 años.

Los demás magistrados y fiscales del Ministerio Público serán designados por estricto orden de mérito en concursos públicos de antecedentes y oposición por un jurado compuesto por tres titulares de cátedras de universidades nacionales, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dos legisladores.

Los legisladores serán elegidos por mayoría absoluta de votos de la asamblea legislativa; los académicos serán designados por sorteo público de una terna propuesta por los decanos de las facultades de Derecho y el miembro de la Corte Suprema en igual forma de una terna propuesta por el presidente de la misma. Los integrantes del jurado durarán dos años en sus funciones y tendrá su asiento en la ciudad de Buenos Aires, pero podrá constituirse en otro lugar si lo considera más conveniente para sus fines.

Para ejercer los cargos de procurador general y defensor general se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema. Iguaes condiciones se requieren para ejercer los cargos de procurador general adjunto y defensor general adjunto.

Para el resto de los cargos del Ministerio Público se requerirán que los aspirantes cuenten con cuatro años de ejercicio efectivo en el país de la profesión

de abogado o de funciones en el Ministerio Público o el Poder Judicial que requieran ese título.

Art. 4º bis — El enjuiciamiento del procurador general de la Nación, del defensor general, y de los restantes magistrados y fiscales del Ministerio Público se efectuará por un tribunal integrado por los abogados con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión que serán elegidos dos por mayoría y uno por minoría por el voto directo de todos los abogados en la matrícula federal, por dos titulares de cátedra de universidad nacional elegidos por sorteo público de una lista de diez candidatos, propuestas por el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, y por cuatro legisladores designados por dos tercios de votos de la asamblea legislativa. El tribunal se integrará con igual número de miembros suplentes.

El tribunal una vez constituido elegirá su presidente por sorteo, que rotará cada seis meses y todos sus integrantes durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Cuando hayan vencido los plazos de las designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Como fiscal ante el tribunal actuará un legislador elegido por la Asamblea Legislativa por mayoría de votos y durará en sus funciones dos años.

La defensa del acusado estará a cargo del abogado de confianza que designe o en su caso un defensor oficial proveerá a su defensa.

Condiciones para el nombramiento

Art. 5º — Para ser procurador general de la Nación y defensor general de la Nación se requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para el desempeño de los restantes cargos se exigirán las mismas condiciones que las previstas para los jueces de los tribunales ante los cuales deban actuar.

En todos los casos deberán acreditar el desempeño efectivo en el país de la profesión de abogado o de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial que requieran ese título, durante cuatro años.

Las incorporaciones se harán preferentemente por las magistraturas inferiores tomando en cuenta los antecedentes de los postulantes y previa selección mediante concursos públicos.

Ascensos

Art. 6º — Los ascensos se decidirán por el mismo consejo previsto en el artículo 4º de la presente ley para la designación de los magistrados, previo informe del procurador general o del defensor general, según corresponda, sobre el desempeño del magistrado a promover.

El reglamento que se dicte sobre el particular respetará la carrera en el Ministerio Público, los antecedentes de los candidatos y —si correspondiere— examen de aptitud de los mismos.

Remuneraciones

Art. 7º — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público serán equivalentes a las que a continuación se detallan:

- a) El procurador general y el defensor general de la Nación, con la retribución del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- b) Los procuradores generales y defensores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la de los jueces de cámara incrementada en un 50 % de la diferencia con la retribución de juez de la Corte Suprema;
- c) Los fiscales generales y defensores generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, con la de los jueces de cámara;
- d) Fiscales y defensores ante los jueces de primera instancia, con la de los jueces de dicha jerarquía;
- e) Los fiscales y defensores adjuntos ante los jueces de primera instancia, con la de dichos jueces disminuida en un 20 por ciento;
- f) Los tutores y curadores públicos, con la de los secretarios de primera instancia.

En materia tributaria y previsional las remuneraciones de los magistrados del Ministerio Público recibirán igual tratamiento que el acordado por las leyes en materia a las retribuciones de los miembros del Poder Judicial de la Nación.

Inmunidades

Art. 8º — Los magistrados del Ministerio Público gozan de las inmunidades funcionales y prerrogativas establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional a favor de los legisladores. No podrán ser desplazados del conocimiento de las causas en que intervengan y sólo con su conformidad, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones o destinados a funciones distintas a las que corresponden a su designación. La jerarquía de sus miembros será equivalente a la de los magistrados judiciales ante los cuales actúan, tanto en lo relativo a su autoridad, protocolo y trato.

Art. 9º — En caso de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones, tanto proveniente de los poderes públicos como originadas en el hecho de particulares, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda, quien será competente para adoptar las medidas tendientes a resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial requiriendo la adopción de las acciones necesarias para preservar el normal desempeño de las funciones.

Juramento

Art. 10. — Los integrantes del Ministerio Público en todos sus rangos, deberán prestar juramento al tomar

posesión de sus cargos de desempeñar fielmente, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

Art. 11. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación jurarán ante el presidente de la Nación y los demás integrantes del Ministerio Público lo harán ante los titulares del mismo o del funcionario que éstos designen al efecto.

Incompatibilidades

Art. 12. — Los magistrados que integran el Ministerio Público están alcanzados por las mismas incompatibilidades que las que se establecen para los miembros del Poder Judicial de la Nación. Sólo podrán ejercer en juicio la representación de sus propios intereses o los de sus cónyuges, ascendientes o descendientes o bien cuando lo hagan en cumplimiento de un deber legal.

Parentesco con los jueces.

Art. 13. — No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad de los magistrados judiciales ante quienes ejerzan su ministerio.

Recusación y excusación

Art. 14. — Los miembros del Ministerio Público podrán ser recusados y se excusarán de intervenir por las causales que establecen las leyes procesales aplicables a las causas en que intervengan, con excepción de la recusación sin causa. También podrán excusarse cuando existieren motivos graves de decoro o de otra naturaleza que obsten su actuación imparcial.

Sustituciones

Art. 15. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, suspensión, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan los reglamentos que a tal efecto dicten el procurador general de la Nación para el Ministerio Público Fiscal y el defensor general de la Nación para el Ministerio Público de la Defensa.

Sanciones en el proceso

Art. 16. — Los magistrados judiciales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público, previo descargo, las mismas correcciones disciplinarias que fijan las leyes para los litigantes, por faltas contra su autoridad o decoro, con excepción de la sanción de arresto, y las de tipo pecuniario y de las que sean de competencia del código profesional, pudiendo ser recurridas por el sancionado en la misma forma que las sanciones disciplinarias aplicadas a los litigantes. Una vez firmes, serán comunicadas al superior jerárquico del sancionado.

Gobierno y administración general y financiera del Ministerio Público

Gobierno y administración

Art. 17. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación tendrán a su cargo el go-

bierno y la administración general del Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en la presente ley y los reglamentos que dicten y sin perjuicio de las atribuciones que esta ley asigna a sus respectivos consejos consultivos.

En tal carácter, les corresponde:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los otros poderes del Estado;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, reglamentos del personal, disciplinario, de sustitución de los magistrados integrantes del Ministerio Público y todos aquellos que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones;
- c) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- d) A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público con crédito presupuestario propio, el procurador general y el defensor general elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. El Poder Ejecutivo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiendo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación. De no haber acuerdo entre el procurador y el defensor elevarán los proyectos por separado, correspondientes a cada rama del Ministerio Público;
- e) Disponer la contratación de abogados especializados, quienes se desempeñarán en calidad de asesores, cuando la complejidad del proceso así lo exija;
- f) El procurador general y el defensor general remitirán conjuntamente o por separado, a las Presidencias de ambas Cámaras un informe anual relativo a la gestión del Ministerio Público, concurriendo a brindar las explicaciones que les requieran con motivo de los informes;
- g) El consejo consultivo para cada rama del Ministerio Público, estará integrado por un funcionario por cada estamento de los mencionados en los artículos 2º y 3º, que se elegirán por el voto de sus pares, durarán cinco años en sus funciones, no podrán ser reelegidos para otro período consecutivo y sus remuneraciones serán equivalentes a las correspondientes para el estamento al que pertenecen. El consejo asistirá en forma permanente en todo los asuntos de la gestión del procurador general o del defensor y la opinión del consejo será obligatoria para todos los temas en los que estos magistrados deban intervenir o decidir. Las recomendaciones del consejo no serán vinculantes para el procurador o el defensor, pero cuando la resolución sea contraria a la recomendación, el consejo podrá insistir con los dos tercios de los votos del órgano. En este caso el procurador o el defensor

deberán decidir de acuerdo a lo resuelto por el respectivo consejo.

Los consejos consultivos serán presididos por el procurador general y por el defensor general respectivamente y deberán sesionar por lo menos dos veces al mes, pudiendo autoconvocarse por mayoría absoluta de sus miembros.

Funciones del Ministerio Público en general

Art. 18. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos en que se halle comprometida, de oficio o a pedido de parte interesada, sean particulares o en representación del Estado. Basterá la justificación del interés simple para legitimar el pedido de los particulares;
- b) Interponer la acción popular cuando fuera notoria la inacción social en circunstancias en que el interés público se encuentre afectado;
- c) Velar por el efectivo cumplimiento de las leyes reglamentos y del debido proceso legal adjetivo o sustantivo. Para la mejor concreción de este objetivo podrán actuar en oportunidad del trámite de la creación legislativa como en el de aplicación de la legislación en sede jurisdiccional, tanto judicial como administrativa;
- d) Velar por el respeto de la Constitución Nacional, de las instituciones creadas por ella y de los derechos fundamentales.

Para hacer efectiva su tarea de interpretación y aplicación del derecho, será obligatoria la vista al representante del Ministerio Público en todas las instancias, inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 19. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán requerir informes a organismos nacionales, provinciales, municipales o a los particulares. Podrán asimismo recabar la colaboración de los organismos de seguridad y policiales para realizar diligencias, citar personas y hacerlas comparecer a sus despachos al solo efecto de prestar declaración testimonial con los alcances y apercibimientos que fijan los códigos de procedimiento. En todos los casos, los organismos requeridos deberán prestar la colaboración que se les solicite, con los medios a su alcance, bajo apercibimiento —en el caso de las fuerzas de seguridad y policiales— de incurrir en el delito de desobediencia.

Art. 20. — Las acciones públicas interpuestas por los representantes del Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, siendo su función la de representar el interés social, deberá el juzgador atender sus planteos y tratar todos los argumentos conducentes, bajo pena de quedar sus fallos afectados a la tacha de arbitrariedad.

Art. 21. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación del Estado y del fisco en juicio, así como el asesoramiento del Poder Ejecutivo y el contralor interno de la administración pública.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, deberá denunciar al Ministerio Público

la existencia de todo delito que llegare a su conocimiento, a fin de que éste promueva la acción pública, sin perjuicio de poder hacerlo en forma directa, como parte afectada, en representación del Estado.

Asimismo, podrá dirigirse al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, según corresponda, con el fin de coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

El Ministerio Público Fiscal

Composición. Funciones

Art. 23. — Componen el Ministerio Público Fiscal los siguientes magistrados:

- a) El procurador general de la Nación;
- b) Los procuradores generales adjuntos;
- c) Los fiscales generales y adjuntos ante los tribunales colegiados de casación de segunda instancia y de instancia única;
- d) Los fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos de dichas fiscalías.

El procurador general de la Nación

Art. 24. — Sin perjuicio de las atribuciones que como responsable de la administración general del Ministerio Público le asigna el artículo 17 de esta ley, y de la confección del presupuesto del Ministerio Público Fiscal, le corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Intervenir en las causas que tramiten ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la competencia originaria dispuesta por el artículo 117 de la Constitución Nacional. Esta intervención será a través de dictámenes y/o produciendo pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlando su sustentación a fin de preservar el debido proceso legal;
- b) Intervenir en el trámite de todas las causas en que se debatan cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia, se haya o no concedido el recurso extraordinario, por parte del tribunal superior de la causa a los efectos de dictaminar si corresponde a su competencia extraordinaria y en relación con los intereses que el Ministerio Público dará vista al procurador general de todos los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa en caso de denegatoria de aquéllos. Esta intervención podrá omitirse cuando según la sana discreción del tribunal se disponga en rechazo *in limine* por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia;
- c) Intervenir en el trámite de la jurisdicción por apelación ordinaria ante la Corte Suprema, cuando la Nación sea parte o el interés público que tutela el ministerio se encuentre comprendido

con el mismo alcance que el previsto en el inciso h) de este artículo;

- d) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia;
- e) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal sólo con el objeto de instarlos a ejercer dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- f) Intervenir en las causas por extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia;
- g) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público Fiscal de igual o inferior jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia o del territorio, quien actuará en calidad de adjunto;
- h) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia;
- i) Requerir informe a la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- j) Rendir informe público anual, dirigido al Congreso de la Nación y el Consejo de la Magistratura, en relación con el juicio que le merece al Ministerio Público la actuación del Poder Judicial y de la administración pública en orden a la defensa de los intereses generales de la sociedad, según las previsiones de la presente ley;
- k) Ejercer la superintendencia general sobre los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, aplicándoles correcciones disciplinarias por incumplimiento de los deberes que le corresponden, en los casos y formas establecidos en esta ley y los reglamentos que a tal efecto dicte. Entender en grado de apelación de las resoluciones adoptadas por magistrados inferiores. El reglamento que se dicte deberá prever la obligatoriedad de sustanciación de sumario previo a la aplicación de sanción disciplinaria, y éstas no podrán violar la garantía constitucional de intangibilidad salarial establecida en el artículo 120 de la Constitución Nacional;
- l) Promover la remoción de los magistrados del Poder Judicial ante la Cámara de Diputados de la Nación mediante la sustanciación de juicio político o enjuiciamiento ante el Jurado de Enjuiciamiento que prevé el artículo 115 de la Constitución Nacional, según corresponda, por las causales previstas en el artículo 53 de dicha norma;
- m) Promover la remoción de los miembros del Ministerio Público Fiscal, ante el tribunal previsto en el artículo 4º de la presente ley;

n) Delegar en magistrados inferiores la administración financiera y el ejercicio de facultades disciplinarias en sus jurisdicciones, con carácter general, cuando razones territoriales o de mejor administración así lo aconsejen;

ñ) Convocar a reuniones de consulta a las que asistirán los magistrados del ministerio a su cargo, con el propósito de elaborar el informe anual al que hace referencia el artículo 24, inciso i) de esta ley y unificar criterios de actuación y todo lo concerniente a la mayor eficacia del servicio.

Procuradores generales adjuntos

Art. 25. — En relación inmediata con el procurador general de la Nación, se desempeñarán cuatro procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le corresponderá el ejercicio de las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general de la Nación en las causas sometidas a su dictamen, cuando aquél lo resuelva, o en casos de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia; y presidir el Consejo de Fiscales;
- b) Ejercer la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia, cuando así lo disponga el procurador general;
- c) Informar al procurador general acerca de las causas en que intervengan;
- d) Desempeñar las demás funciones que le encomiendan las leyes y reglamentos;
- e) Cada procurador general adjunto dirigirá un departamento que estará integrado por una parte proporcional de los funcionarios de cada estamento y la especialidad de cada dirección, decidirá la intervención de los agentes fiscales en los sumarios, en los juicios y en los recursos ante los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Nación. El ámbito de competencia de los departamentos y sus agentes fiscales será decidido por el procurador general y el defensor general en cada rama, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes que los delitos afectan y la especialización de los funcionarios.

Fiscales generales y adjuntos ante los tribunales de colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 26. — Corresponde a los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única:

- a) Promover ante dichos tribunales el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Ministerio Público hubiera tenido ante los jueces inferiores, sin perjuicio de su facultad de desistirla, mediante decisión fundada;
- b) Promover la aplicación de medidas disciplinarias contra los magistrados inferiores del Ministerio Público Fiscal, sus funcionarios y empleados;

- c) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura o de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios y empleados de los tribunales de justicia, que se consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- d) Elevar al procurador general un informe anual de la gestión del Ministerio Público que actúa en su jurisdicción, tanto en lo relativo al trámite judicial, administrativo como de superintendencia. En tales casos podrá aconsejar la conveniencia de iniciar el proceso de remoción a los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público;
- e) Ejercer la superintendencia federal sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de las reglamentaciones que dicte el procurador general de la Nación;
- f) Intervenir en las cuestiones de competencia que se planteen entre los fiscales de primera instancia;
- g) Evacuar los informes que les solicite el procurador general de la Nación y peticionar la reunión del tribunal ante quien ejercen su ministerio, a fin de que reuniéndose en pleno proceda a unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria. A tales fines, no será necesario el carácter de parte en el juicio;
- h) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- i) Desempeñar en el ámbito de su competencia, las funciones que la ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas por esta ley al Ministerio Público Fiscal y las encomendadas por las leyes y reglamentos.

Art. 27. — El procurador general de la Nación podrá designar fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, quienes actuarán en relación inmediata con los fiscales generales que se desempeñen ante dichos tribunales. Sus funciones serán las de sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia. Los fiscales generales titulares podrán requerir de los mismos asistencia en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio, en cuyo caso deberán informar al mismo respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 28. — Corresponderá a los fiscales ante los jueces de primera instancia el ejercicio de las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de su competencia en razón del grado, debiendo ejercitar los actos procesales y las acciones y recursos necesarios para el cometido que les fija la presente ley.

Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y llegar a su conocimiento por cualquier medio, velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en toda causa que la acción pública criminal o contravencional estuviera abierta, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de los testigos ofrecido en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimientos, cuidando de evitar la efectiva denegación de justicia;
- d) Asistir a las visitas a las cárceles, no sólo para formar conocimiento de la situación de los alojados en ella, sino para promover o aconsejar la adopción de medidas tendientes a la corrección del sistema carcelario que en miras al interés público pudiere corresponder.

Art. 29. — Los magistrados judiciales deberán dar intervención a los fiscales cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública o fuere iniciada la investigación por prevención policial, a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley le concede para la promoción de la acción. Deberán asimismo intervenir en los procesos de amparo y hábeas corpus.

Art. 30. — Cuando actúen en los fueros civil, comercial, contencioso administrativo y del trabajo, deberán hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, de oficio o a requerimiento de cualquier habitante, o como consecuencia de las vistas de los expedientes que los jueces o las autoridades administrativas pongan a su consideración. En todos los casos, su actuación será en defensa del interés público, del debido proceso legal y del efectivo cumplimiento de la legislación.

Art. 31. — Corresponde a los representantes del Ministerio Público el ejercicio de todas las acciones y recursos de su competencia y, en ausencia de prescripciones legales expresas, ellos quedan legitimados para el ejercicio de la representación del interés público con el propósito de prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud, al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos pertenecientes al patrimonio artístico, cultural o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Art. 32. — Los fiscales públicos ante la justicia de primera instancia, deberán asimismo:

- a) Intervenir en todas las cuestiones de competencia;

- b) Informar a las fiscalías ante los tribunales que enumera el artículo 27 de toda irregularidad advertida en el desempeño de las funciones judiciales o administrativas que afecten el debido proceso legal y el interés público que el Ministerio Público está obligado a tutelar.

Art. 33. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia podrán imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas previstos en esta ley y las reglamentaciones que dicte el procurador general de la Nación.

Art. 34. — En relación inmediata con los fiscales ante los tribunales de primera instancia, actuarán los fiscales auxiliares ante dichos tribunales. Les corresponde sustituir o remplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia. En todos los casos, deberán informar al fiscal titular respecto de las causas en las que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio Público de la Defensa

Composición. Funciones

Art. 35. — Componen el Ministerio Público de la Defensa, los siguientes magistrados:

- a) El defensor general de la Nación;
- b) Los defensores generales adjuntos;
- c) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única y los defensores públicos adjuntos ante dichos tribunales;
- d) Los defensores públicos de menores e incapaces y los defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Además integran el Ministerio Público de la Defensa, como funcionarios, los tutores y curadores públicos que esta ley prevé.

El defensor general de la Nación

Art. 36. — Corresponde al defensor general de la Nación ejercer la jefatura del Ministerio Público de la Defensa y la superintendencia relativa al ejercicio específico de sus funciones. En tal carácter, tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Dictar los reglamentos de superintendencia, fijar normas de distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- b) Confeccionar del presupuesto de Ministerio Público de la Defensa;
- c) Imponer las sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa en los casos y formas establecidos en la presente ley y la reglamentación que dicte;
- d) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público

de la Defensa, la adopción de todas las medidas que fueren necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones propias del Ministerio a su cargo y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;

- e) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando estas funciones estuvieren en cabeza de un solo magistrado. En estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;
- f) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes en los procesos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. Ello no será necesario cuando concurren a un mismo proceso menores e incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;
- g) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes.

Art. 37. — El defensor general de la Nación ejerce su ministerio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A este efecto, dicho tribunal le dará vista en todos los casos de recursos extraordinarios introducidos a su despacho y en las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, con las excepciones previstas en el artículo 24, inciso b) de la presente ley. También actuará, si correspondiere, cuando hubiere intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa por pobres y ausentes.

Defensores generales adjuntos

Art. 38. — En relación inmediata con el defensor general de la Nación, se desempeñarán dos defensores generales adjuntos, quienes tendrán a su cargo las funciones que aquél les asigne y las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al defensor general en las causas sometidas a su dictamen cuando aquél lo requiera

o en caso de licencia, excusación, impedimento, suspensión o vacancia;

- b) Informar al defensor general respecto de las causas en las que intervenga;
- c) Desempeñar las demás funciones que les encomiendan las leyes y reglamentos.

Defensores públicos de menores e incapaces

Art. 39. — Corresponde a los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen:

- a) Intervenir, en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces y la defensa en juicio de los mismos cuando su interés estuviere comprometido;
- b) Entablar las acciones y recursos pertinentes a tal objeto, ya sea en forma autónoma o juntamente con los representantes de los incapaces;
- c) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa, emitiendo el correspondiente dictamen, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias;
- d) Requerir todas las medidas que correspondan, concernientes al derecho de los menores, incapaces en general o inhabilitados carentes de representación o asistencia legal, o cuando sea necesaria suplir la inacción de sus representantes necesarios o asistentes legales o de las personas que los tenga a su cargo, o bien para controlar la gestión de estos últimos;
- e) Emitir dictámenes en los asuntos que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- f) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de menores o incapaces sobre la persona y derecho de éstos, conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores o incapaces, ejerciendo todos los actos que sean conducentes a su protección, y sometiendo a la autoridad judicial cuando corresponda para su homologación.

Art. 40. — Los Defensores públicos de menores e incapaces están habilitados para requerir de las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de menores, incapaces e inhabilitados, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deban dispensarles sus padres, tutores, curadores o las personas o instituciones a cuyo cargo se encuentren. En caso de ser necesario, podrán por sí solos tomar las medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen.

Art. 41. — Podrán solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes o graves para su

salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal.

Art. 42. — Cuando llegare a su conocimiento la existencia de mala conducta de menores, por quejas o de oficio, podrán requerir de la autoridad judicial la aplicación de medidas disciplinarias o de seguridad correccional, las que no podrán extenderse más allá de la mayoría de edad.

Art. 43. — Para el logro de la protección integral de los menores, incapaces e inhabilitados, podrán asesorar a los mismos y a sus representantes necesarios, parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces. Con el mismo propósito, deberán:

- a) Citar y hacer comparecer personas a su despacho, cuando a su juicio sea necesario para el desempeño de su ministerio, para pedir explicaciones o coartar cargos que se formulen en los que se encuentre afectado el interés de menores o incapaces;
- b) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que afecten los intereses de menores o incapaces;
- c) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de guarda o correccionales de menores o incapaces, sean públicos o privados, informando por la vía jerárquica al defensor general de la Nación y a la autoridad judicial sobre el cuidado y atención que reciben. Dichos informes podrán evaluar el desarrollo de los tratamientos y de las tareas de reeducación de los internados.

Art. 44. — Los defensores públicos podrán imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y la reglamentación que dicte el defensor general de la Nación.

Defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 45. — Les corresponderá, además de las atribuciones previstas en los artículos anteriores, las siguientes:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan para cumplir en forma efectiva las funciones del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa ante las instancias anteriores sólo por razones de necesidad o urgencia que se deberán fundar en cada caso;
- c) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;

d) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley;

e) Determinar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera a los intereses de menores e incapaces y participar en los acuerdos generales del tribunal ante el que actúan, con voz pero sin voto.

Defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 40. — El defensor general de la Nación podrá designar defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única, quienes actuarán en relación inmediata con los defensores generales que se desempeñen ante dichos tribunales. Sus funciones serán las de sustituir o reemplazar al defensor general titular en el ejercicio de sus deberes, cuando éste así lo resuelva por necesidades funcionales y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento, suspensión o vacancia. El defensor general podrá requerir de los mismos asistencia en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio, en cuyo caso deberán informar al mismo respecto de las causas en las que intervengan.

Defensores públicos de pobres y ausentes

Art. 47. — Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, ejercerán la defensa de la persona y los derechos de los justiciables que se encuentren en dichas condiciones, toda vez que sea requerida en las causas penales y en otros fueros. Tendrán a este fin las siguientes atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encontraran ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de quienes se encuentran imputados en las causas que se tramitan ante la justicia penal, cuando así lo requiera la legislación procesal de dicho fuero.

Art. 48. — Tendrán atribuciones para arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes, cesando en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso. Podrán asimismo intentar la conciliación, la mediación o el arbitraje, presentando los acuerdos logrados a los tribunales para su homologación.

Art. 49. — Tendrán a su cargo el ejercicio de facultades de superintendencia y disciplinas respecto del personal a su cargo, de conformidad a las reglamentaciones que dicte el defensor general de la Nación.

Defensores de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia

Art. 50. — Los magistrados que actúen ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia tendrán además las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de pobres y ausentes de las instancias inferiores;
- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes de las instancias inferiores e impartirles las instrucciones generales dentro del marco fijado por el defensor general de la Nación.

Tutores y curadores públicos

Art. 51. — Los magistrados judiciales designarán en el trámite de las actuaciones judiciales tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces encontraren las personas que cumplan las condiciones legales y de idoneidad necesarias para el desempeño de tales cargos.

Serán sus funciones respecto de las personas a su cargo:

- a) Cuidar de las mismas, tratando que sean educadas para el ejercicio de algún oficio o profesión útil;
- b) Cuando se tratare de personas afectadas por enfermedades mentales, toxicomanía o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y rehabilitación;
- c) Ejercer la representación legal de oficio y extrajudicialmente y cuidar el acervo patrimonial de las personas puestas bajo su guarda, bajo las condiciones que prevé el Código Civil para los tutores y curadores.

Art. 52. — Podrán llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio fuere necesario para el desempeño de sus funciones, para pedir explicaciones sobre malos tratos a los menores o incapaces a su cuidado o por cualquier otra causa vinculada a su bienestar. Con el mismo objeto podrán dirigirse a autoridades o instituciones públicas.

Art. 53. — Los tutores o curadores públicos deberán visitar periódicamente los establecimientos donde estuvieran alojadas las personas a su cargo, debiendo informar al juez y defensor público sobre el estado de los mismos, efectuando gestiones para mejorar su situación cuando lo juzgare conveniente.

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Art. 54. — Los funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley y las reglamentaciones que en ejercicio de sus facultades de superintendencia dicte el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación.

Art. 55. — Los funcionarios y empleados del Ministerio Público gozan de estabilidad y no podrán ser removidos sino por causas de ineptitud, mala conducta o incumplimientos graves en su desempeño, previo sumario. Sólo podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales, con su conformidad, siempre conservando su jerarquía.

Art. 56. — La designación, promoción y remoción del personal del Ministerio Público estará a cargo del procurador general de la Nación, quien deberá requerir la conformidad del Defensor General de la Nación cuando se trate de personal del Ministerio de la Defensa. En todos los casos se requerirá el informe del magistrado del Ministerio Público responsable del área donde se desempeña o desempeñará el personal.

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 57. — Dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley cesará la intervención del Ministerio Público como representante del Estado y/o el fisco en juicio. Dentro de dicho plazo la Procuración del Tesoro de la Nación deberá designar representantes en todos los juicios en trámite, cualquiera sea la instancia y fueros donde estén radicadas.

Art. 58. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia. Subsistirán asimismo las estructuras administrativas hasta tanto el procurador general de la Nación, en uso de sus competencias y con la correspondiente aprobación presupuestaria produzca las modificaciones que esta ley autoriza.

Art. 59. — Deróganse todas las normas contenidas en leyes generales, especiales y códigos procesales que resulten contrarias a las disposiciones de la presente normativa.

Art. 60. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Graciela Fernández Meijide.

Texto del proyecto presentado por el senador Yoma

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO

TITULO I

Organización e integración del Ministerio Público

CAPITULO I

Principios generales

Artículo 1º — El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia funcional, en coordinación con los tres

poderes del Estado pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura.

Posee una organización jerárquica la cual exige que cada miembro del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan, y fundamenta las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

Art. 3º — El Ministerio Público Fiscal está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Procurador general de la Nación;
- b) Procuradores generales adjuntos;
- c) Fiscales generales ante los tribunales colegiados, de casación, de segunda instancia, de instancia única, los de la Procuración General de la Nación y los de Investigaciones Administrativas;
- d) Fiscales generales adjuntos ante los tribunales y de los organismos enunciados en el inciso c);
- e) Fiscales ante los jueces de primera instancia y los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los fiscales de investigaciones administrativas;
- f) Fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación.

Art. 4º — El Ministerio Público de la Defensa está integrado por los siguientes magistrados:

- a) Defensor general de la Nación;
- b) Defensores generales adjuntos;
- c) Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única;
- d) Defensores públicos adjuntos ante los tribunales enunciados en el inciso c) y los de la Defensoría General de la Nación;
- e) Defensores públicos de menores e incapaces y defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia.

Integran el Ministerio Público de la Defensa en calidad de funcionarios, los tutores y curadores públicos cuya actuación regula la presente ley.

CAPITULO II

Relación de servicio

Designaciones

Art. 5º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Para la de-

signación del resto de los magistrados mencionados en los incisos b), c), d) y e) de los artículos 3º y 4º, el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, presentarán una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, cuyo nombramiento requerirá también el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado.

Concurso

Art. 6º — La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso de oposición y antecedentes que será rendido ante ~~un tribunal convocado~~ por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, el cual estará integrado por cuatro magistrados con una antigüedad en el Ministerio Público superior a los 10 años, y será presidido por un fiscal general o un defensor general, según corresponda. Cuando el concurso se realice para cubrir un puesto de fiscal o defensor general, deberá el procurador o el defensor general, respectivamente, presidir el tribunal examinador.

Requisitos para las designaciones

Art. 7º — Para ser magistrado del Ministerio Público se debe contar con 4 años de ejercicio efectivo en el país de la profesión de abogado o de cumplimiento —por igual término— de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo menos cuatro años de antigüedad en el título de abogado.

El procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, deberán reunir las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el desempeño de los restantes cargos mencionados en los artículos 3º y 4º, se aplicarán los requisitos existentes para ser juez de cámara, juez de primera instancia o secretario de cámara, según las equivalencias que surgen de los artículos 66 y 67 de esta norma.

Juramento

Art. 8º — Los magistrados del Ministerio Público al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación —según corresponda— o ante el funcionario que éstos designen a tal efecto.

Incompatibilidades

Art. 9º — Los integrantes del Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. Alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

Excusación y recusación

Art. 10. — Los integrantes del Ministerio Público podrán excusarse o ser recusados por las mismas causales previstas por las normas procesales respecto de los jueces.

Podrán excusarse cuando existieren motivos graves o decoro o delicadeza que obstan su actuación imparcial.

En ningún caso será procedente la recusación sin causa.

Sustitución

Art. 11. — En caso de recusación, excusación, impedimento, ausencia, licencia o vacancia, los miembros del Ministerio Público se reemplazarán en la forma que establezcan las leyes o reglamentaciones correspondientes. Si el impedimento recayere sobre el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, serán reemplazados por el procurador general adjunto o el defensor general adjunto, en su caso, con mayor antigüedad en el cargo.

De no ser posible la subrogación entre sí, los magistrados del Ministerio Público serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público, la cual será conformada por insaculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

Remuneración

Art. 12. — Las remuneraciones de los integrantes del Ministerio Público se determinarán del siguiente modo:

- El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación recibirán una retribución equivalente a la de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- Los magistrados enumerados en los incisos b) y c) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una remuneración equivalente a la de juez de Cámara;
- Los magistrados mencionados en el inciso d) y e) de los artículos 3º y 4º de la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la de juez de primera instancia;
- Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia, percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de cámara;
- Los tutores y curadores designados conforme lo establece la presente ley, percibirán una retribución equivalente a la retribución de un secretario de primera instancia.

Las equiparaciones precedentes se extienden a todos los efectos patrimoniales, previsionales y tributarios.

Idéntica equivalencia se establece en cuanto a jerarquía, protocolo y trato.

Estabilidad

Art. 13. — Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad. Los magistrados cuya edad sea la indicada precedentemente quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento tal como lo prevé el artículo 99 inciso 4 de la Constitución respecto de los jueces de la Nación.

Inmunidades

Art. 14. — Los magistrados del Ministerio Público en sus respectivos desempeños en el proceso, gozan de las inmunidades funcionales acordadas a los legisladores nacionales por el artículo 69 de la Carta Magna.

No podrán ser molestados o enjuiciados por las opiniones o intervenciones en los procesos. Sin perjuicio de ello, en tales supuestos, se dará cuenta a la autoridad superior del Ministerio Público que corresponda y al Tribunal de Enjuiciamiento respectivo, con la información sumaria del hecho.

Estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación, según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones.

Traslados

Art. 15. — Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales o destinados a funciones distintas de las adjudicadas en su designación.

Poder disciplinario

Art. 16. — En caso de incumplimiento de los deberes a su cargo, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, podrán imponer a los magistrados que componen el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, las siguientes sanciones disciplinarias:

- a) Prevenición;
- b) Apercibimiento;
- c) Suspensión de hasta 30 días;
- d) Multa de hasta el 20 % de sus remuneraciones.

Toda sanción disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores generales respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan.

Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se registrá por la norma reglamentaria que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, la cual deberá garantizar el debido proceso adjetivo y el derecho de defensa en juicio.

En los supuestos en que el órgano sancionador entienda que el magistrado es pasible de la sanción de remoción, deberá elevar el sumario al Tribunal de Enjuiciamiento a fin de que evalúe la conducta reprochable y determine la sanción correspondiente.

Las sanciones disciplinarias que se apliquen por los órganos del Ministerio Público serán recurribles administrativamente, en la forma que establezca la reglamentación. Agotada la instancia administrativa, dichas medidas serán pasibles de impugnación en sede judicial.

Correcciones disciplinarias en el proceso

Art. 17. — Los jueces y tribunales podrán imponer a los miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El juez o tribunal deberá comunicar al superior jerárquico del sancionado la medida impuesta y toda inobservancia que advierta en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando la medida afecte al procurador o al defensor general de la Nación, será comunicada al Senado de la Nación.

Mecanismos de remoción

Art. 18. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación sólo pueden ser removidos por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional y mediante el procedimiento reglado por el artículo 59 de la Carta Magna.

El resto de los magistrados que componen el Ministerio Público sólo podrán ser removidos por el Tribunal de Enjuiciamiento creado por esta ley, mediante el procedimiento que se reglamente y por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público, cuyo nombramiento efectúan el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, serán removidos por las causales que reglamentariamente se prevean y mediante un sumario previo que garantice el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio.

Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 19. — El Tribunal de Enjuiciamiento estará integrado por cinco miembros:

- a) Tres vocales deberán ser ex jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o ex pro-

curadores o defensores generales de la Nación, y serán designados uno por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado y otro por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

- b) Dos vocales deberán ser abogados de la matrícula federal con no menos de veinte años en el ejercicio de la profesión, y serán designados por el procedimiento electivo que dispongan, entre todos aquellos profesionales que posean matrícula federal.

El Tribunal de Enjuiciamiento será convocado por su presidente y tendrá su asiento en la Capital Federal. Se podrá constituir en el lugar que considere más conveniente para cumplir su cometido.

Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. Aún cuando hayan vencido los plazos de sus designaciones, los mandatos se considerarán prorrogados de pleno derecho en cada causa en que hubiere tomado conocimiento el tribunal, hasta su finalización.

Una vez integrado, el tribunal designará su presidente por sorteo. La presidencia rotará cada seis meses, según el orden del sorteo.

Como fiscal ante este tribunal actuará un ex procurador general de la Nación o, en su defecto, un abogado que reúna las condiciones establecidas para ser vocal del tribunal, designado por el procurador general de la Nación.

Como defensor de oficio, en caso de ser necesario, actuará un ex defensor general de la Nación o, en su defecto, un defensor público ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o de instancia única, a opción del imputado.

Los integrantes del tribunal y los funcionarios auxiliares serán retribuidos en la forma que establezca la reglamentación.

Reglas de procedimiento ante el Tribunal de Enjuiciamiento

Art. 20. — El Tribunal de Enjuiciamiento desarrollará su labor conforme al siguiente procedimiento:

- a) Podrá rechazar *in limine* o luego de una sucinta prevención sumaria, toda denuncia manifiestamente infundada, previa opinión del fiscal;
- b) La instancia de debate será abierta por decisión del tribunal, fundada en los hechos concretos materia de denuncia o acusación, que puedan configurar alguna de las causales expresadas en el artículo 53 de la Constitución Nacional, contra personas determinadas; la prueba será integralmente producida en el debate o incorporada a éste si fuere documental o instrumental, sin perjuicio de la realización de una breve prevención sumaria en caso de urgencia que ponga en peligro la comprobación de los hechos, salvaguardando en todo caso el derecho de defensa de las partes;
- c) Durante el debate, el fiscal deberá sostener la acción y mantener la denuncia o acusación, sin

perjuicio de solicitar la absolución cuando entienda que correspondía. Esto último no será vinculante para el tribunal;

- d) El juicio será oral, público, contradictorio y continuo;
- e) Los plazos para el cumplimiento de los actos procesales serán fijados por el presidente del tribunal entre un mínimo de cinco y un máximo de treinta días, salvo traslados y vistas en la prevención sumaria, que serán siempre por tres días. Todos los plazos se contarán en días hábiles;
- f) La sentencia deberá dictarse en el plazo que fijará el presidente del tribunal, el cual no podrá ser mayor de quince días;
- g) El tribunal podrá, mediante resolución debidamente fundada, suspender al imputado en el ejercicio de sus funciones y, de estimarlo necesario, adoptar otras medidas preventivas de seguridad que considere pertinentes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trabajará embargo sobre el resto, a las resultas del juicio.
Si el magistrado fuera absuelto, se lo reincorporará a sus funciones inmediatamente, y se le reintegrará el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones;
- h) El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros y la sentencia se dictará con el voto de la mayoría de sus integrantes;
- i) La sentencia será absolutoria o condenatoria. Si el pronunciamiento del tribunal fuese condenatorio, no tendrá otro efecto que disponer la remoción del condenado y, en su caso, inhabilitarlo para ocupar en adelante cargos públicos. Si se funda en hechos que puedan configurar un delito de acción pública o ello surgiera de la prueba, o aquella ya hubiese sido iniciada, se dará intervención en la forma que corresponda al tribunal judicial competente;
- j) La sentencia podrá ser recurrida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual controlará la razonabilidad del pronunciamiento y el adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado.

El recurso deberá interponerse, por escrito y fundado, ante el Tribunal de Enjuiciamiento dentro de los treinta (30) días de notificado el fallo. El tribunal deberá elevar el recurso y las actuaciones a la Cámara dentro de los cinco (5) días de interpuesto.

Cumplidas las medidas que la Cámara pudiera haber dispuesto para mejor proveer, se llamará autos para sentencia, la que deberá dictarse dentro de los sesenta (60) días. Todos los términos fijados en este inciso se computarán en días hábiles judiciales;

- k) A todos los efectos se aplicará supletoriamente el Código Procesal Penal de la Nación.

CAPÍTULO III

*Administración general y financiera del
Ministerio Público*

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, tendrán a su cargo el gobierno y la administración general y financiera del Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las reglamentaciones que se dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y facultades:

- a) Representar al Ministerio Público en sus relaciones con los tres poderes del Estado;
- b) Dictar reglamentos de superintendencia general y financiera, reglamentos de personal, disciplinarios y todos aquellos que resulten necesarios para obtener un cumplimiento armónico de las funciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa;
- c) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público;
- d) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, provinciales o municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesaria;
- e) Elevar un informe anual, y por escrito, a la comisión bicameral creada por esta ley, sobre el desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.

Autarquía financiera

Art. 22. — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público contará con crédito presupuestario propio.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, elaborarán el proyecto de presupuesto y lo remitirán al Congreso para su consideración por intermedio del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El Poder Ejecutivo sólo podrá formular las observaciones que estime apropiadas, pero sin modificar su contenido, debiéndolo incorporar en el proyecto de presupuesto general de la Nación.

Ejecución presupuestaria

Art. 23. — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.

Relaciones con los poderes Ejecutivo y Legislativo

Art. 24. — El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia.

La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.

TÍTULO II

Funciones y actuación

Sección I

*Normas generales**Funciones del Ministerio Público*

Art. 25. — Corresponde al Ministerio Público:

- a) Representar y defender el interés público, tanto en sede judicial como administrativa, de oficio o a solicitud de parte interesada, carácter éste que podrán asumir los particulares o quienes actúen en representación de alguna repartición estatal. Para legitimar el pedido de los particulares bastará la justificación de un interés simple;
- b) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando para intentarla o proseguirla fuere necesario instancia o requerimiento de parte conforme las leyes penales;
- c) Promover y ejercer la acción pública civil en los casos previstos por la ley, y en aquellos supuestos de notoria inacción social ante circunstancias en que el interés público se encontrase afectado;
- d) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República;
- e) Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal, adjetivo o sustantivo, en el trámite de la creación de normas legales y reglamentarias y en su aplicación, tanto en sede judicial como administrativa;
- f) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes legales, parientes o personas que los tuvieran a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- g) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales;
- h) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes;
- i) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los reclusos e internados sean tratados con

el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;

- f) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

Requerimiento de colaboración

Art. 26. — Los integrantes del Ministerio Público, en cualquiera de sus niveles, podrán —para el mejor cumplimiento de sus funciones— requerir informes a los organismos nacionales, provinciales, comunales; a los organismos privados; y a los particulares cuando corresponda, así como recabar la colaboración de las autoridades policiales, para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, al solo efecto de prestar declaración testimonial. Los organismos policiales y de seguridad deberán prestar la colaboración que les sea requerida, adecuándose a las directivas impartidas por los miembros del Ministerio Público y destinando a tal fin el personal y los medios necesarios a su alcance.

Los fiscales ante la Justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— sin perjuicio de las directivas que el juez competente impartiera a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata.

Funciones excluidas

Art. 27. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: la representación del Estado y/o del fisco en juicio, así como el asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo y el ejercicio de funciones jurisdiccionales. Ello no obstante, el Poder Ejecutivo por intermedio del ministro correspondiente, podrá dirigirse al procurador o al defensor general de la Nación, según el caso, a fin de proponerles la emisión de instrucciones generales tendientes a coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de la causa pública, la persecución penal y la protección de los incapaces, inhabilitados, pobres y ausentes.

Carácter de los dictámenes

Art. 28. — Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con la limitación prevista en el artículo 461 del Código Procesal Penal de la Nación y las limitaciones que otras leyes procesales prevean.

Principio de legalidad

Art. 29. — Cuando se trate de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio.

La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley.

Deber de informar

Art. 30. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al procurador general de la Nación por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

Deber de obediencia. Objeciones

Art. 31. — Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del defensor general de la Nación, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, pondrá en conocimiento del procurador o del defensor general —en su caso—, su criterio disidente, mediante un informe fundado.

Cuando la instrucción general objetada, concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá en nombre del superior. Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Informe anual al Congreso

Art. 32. — Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la comisión bicameral creada por esta ley, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia —Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente— el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.

Sección II

Ministerio Público Fiscal

CAPÍTULO I

Del procurador general de la Nación

Art. 33. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público Fiscal. Ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la

ley otorga al Ministerio Público Fiscal, por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

El procurador general tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Dictaminar en las causas que tramiten ante la Corte Suprema en virtud de la competencia originaria que prevé el artículo 117 de la Constitución Nacional. Podrá ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público, así como controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso;
- b) Intervenir en el trámite de las causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema, a los efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público Fiscal tutela.

A los fines del ejercicio de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, salvo cuando, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine*, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que podrá omitir la vista;

- c) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante la Corte Suprema, cuando el interés público se encuentre comprometido, con el mismo alcance previsto en el inciso anterior;
- d) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- e) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema, en los casos que corresponda, y dar instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal para que éstos ejerzan dicha acción en las restantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé;
- f) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- g) Disponer por sí o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funciones enunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- h) Delegar sus funciones en los procuradores generales adjuntos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con lo previsto en los artículos 34 y 35 de esta ley;
- i) Disponer de oficio o a pedido de un fiscal general, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del

Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia y del territorio. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Procuración General de la Nación. En todos estos casos, la actuación del fiscal que se designa estará sujeta a la dirección del titular;

- j) Efectuar la propuesta en terna a que se refieren los artículos 5º y 6º de esta ley, de conformidad con lo que se establezca en el reglamento de superintendencia;
- k) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- l) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de conformidad con lo dispuesto en esta ley, y solicitar el enjuiciamiento de los jueces ante los órganos competentes, cuando unos u otros se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional;
- m) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias, y del modo o forma como hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;
- n) Responder a las consultas formuladas por el presidente de la Nación; los ministros del Poder Ejecutivo; los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional; la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el presidente del Consejo de la Magistratura;
- o) Coordinar las actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- p) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes; sus respectivas atribuciones y deberes; y supervisar su cumplimiento;
- q) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal, en los casos y formas establecidos en esta ley y en la reglamentación que se dicte;
- r) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- s) Conferenciar con el defensor general el presupuesto del Ministerio Público, y sólo en caso de no llegar a un acuerdo, presentar por separado el proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público Fiscal;

- r) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- s) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal;
- t) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 3º, incisos b) y c) de la presente ley, en las cuales se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal y se tratarán todas las cuestiones que el procurador general incluya en la convocatoria;
- u) Representar al Ministerio Público Fiscal en las relaciones con los tres poderes del Estado;
- v) Aprobar el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

De los procuradores generales adjuntos

Art. 34. — Los procuradores generales adjuntos asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste imparte de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y lo que se establezca por vía reglamentaria. Además poseen las siguientes atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general en las causas sometidas a su dictamen, cuando éste así lo resuelva;
- b) Reemplazar al procurador general en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia;
- c) Informar al procurador general sobre las causas en que intervienen.

Fiscales de la Procuración General de la Nación

Art. 35. — Los fiscales de la Procuración General de la Nación cumplirán sus funciones en relación inmediata con el procurador general y, cuando éste así lo disponga, con los procuradores generales adjuntos, en la materia y los casos en los que les corresponda intervenir.

Cuando el procurador general ejerza la competencia establecida en el inciso i) del artículo 33 de la presente ley, los fiscales del organismo actuarán, salvo disposición fundada en contrario, respetando los niveles del Ministerio Público Fiscal que se determinan en el artículo 3º.

Fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 36. — Los fiscales generales ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, tienen los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover ante los tribunales en los que se desempeñan el ejercicio de la acción pública o continuar ante ellos la intervención que el Mi-

nisterio Público Fiscal hubiera tenido en las instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante decisión fundada;

- b) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales ante la primera instancia y promover las acciones públicas que correspondan, a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público Fiscal;
- c) Dictaminar en las cuestiones de competencia y dirimir los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- d) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario;
- e) Peticionar la reunión de la cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria;
- f) Responder los pedidos de informes que les formule el procurador general;
- g) Elevar un informe anual al procurador general sobre la gestión del área de su competencia;
- h) Ejercer la superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general;
- i) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Fiscales generales adjuntos

Art. 37. — Los fiscales generales adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o instancia única, actuarán en relación inmediata con los fiscales generales ante dichos tribunales y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal general titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal general titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

Fiscales ante los jueces de primera instancia

Art. 38. — Los fiscales ante los jueces de primera instancia tendrán las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el ámbito de su competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que les fijen las leyes.

Deberán intervenir en los procesos de amparo y de hábeas corpus y en todas las cuestiones de competencia;

e imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación.

Art. 39. — En particular, los fiscales ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos y contravenciones que se cometieren y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio velando para que en las causas se respete el debido proceso legal, requiriendo para ello las medidas necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad administrativa, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no esté permitido obrar de oficio;
- b) Hacerse parte en todas las causas en que la acción pública criminal o contravencional fuese procedente, ofreciendo pruebas, asistiendo al examen de testigos ofrecidos en la causa y verificando el trámite de las otras pruebas presentadas en el proceso;
- c) Ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales, contravencionales y de procedimiento, así como los recursos administrativos dirigidos a la averiguación o investigación de delitos o de infracciones administrativas, cuidando de instarlos cuando se trata de prevenir o de evitar una efectiva denegación de justicia;
- d) Concurrir a las cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, no sólo para formar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional;
- e) Recurrir cualquier resolución o sentencia que no acordare íntegramente lo que hubieren solicitado en sus dictámenes.

Art. 40. — Los fiscales ante la justicia de primera instancia federal y nacional de la Capital Federal, en lo civil, comercial, contencioso administrativo, laboral y de la seguridad social, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución Nacional, a fin de asegurar el respeto al debido proceso, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan;
- b) Ejercer todas las acciones y recursos previstos en la legislación a nombre del Ministerio Público Fiscal, en el trámite de sus presentaciones en sede judicial o administrativa;

- c) Ofrecer pruebas en las causas y trámites en que intervengan, y verificar la regularidad de la sustanciación de las restantes ofrecidas o rendidas en autos, para asegurar el respeto al debido proceso legal;
- d) Intervención en forma ineludible en todos aquellos casos en que el interés fiscal esté comprometido, en representación de la sociedad y no del Estado, así como en todos aquellos asuntos en los que el Ministerio Público debe ejercer funciones por mandato de la ley;
- e) Intervenir en la gestión y administración de las fundaciones y asociaciones jurídicas de bien público, toda vez que tuvieran conocimiento de que el interés público se encontrase afectado, o en peligro de serlo, con el objeto de reclamar ante los órganos administrativos de control o ante la autoridad judicial, que se proceda a reparar el bien tutelado;
- f) Intervenir en las cuestiones de competencia y en todos los casos en que se hallaren en juego normas o principios de orden público.

Fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia

Art. 41. — Los fiscales auxiliares ante los tribunales de primera instancia actuarán en relación inmediata con los fiscales ante dichos tribunales y tendrán las siguientes facultades y deberes:

- a) Sustituir o reemplazar al fiscal titular en el ejercicio de la acción cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al fiscal titular respecto de las causas en que intervengan y asistirlo en el ejercicio de sus funciones, en la medida de las necesidades del servicio.

CAPÍTULO II

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación

Organización

Art. 42. — La Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del Ministerio Público Fiscal como órgano desconcentrado de la Procuración General de la Nación. Está integrada por el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas y los demás magistrados que esta ley establece.

Designaciones y remociones

Art. 43. — Los magistrados de la Fiscalía serán designados y removidos conforme al procedimiento previsto en esta ley. El procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas propondrá al procurador general de la Nación las terna de candidatos para desempeñar los cargos de magistrados de la Fiscalía y nombrará por sí a los funcionarios y demás personal.

Procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas

Art. 44. — El procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas tendrá los siguientes deberes y facultades:

- a) Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga;
- b) Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades de la inversión dada a los mencionados recursos;
- c) Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. En tales casos, las investigaciones de la Fiscalía tendrán valor de prevención sumaria. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia y, en su caso, ante las cámaras de apelación y casación, con la intervención necesaria del procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas o de los magistrados que éste determine, quienes actuarán en los términos del artículo 33 inciso f);
- d) Asignar a los fiscales generales, fiscales generales adjuntos y fiscales, las investigaciones que resolviera no efectuar personalmente;
- e) Someter a la aprobación del procurador general de la Nación el reglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan e impartirles instrucciones, en el marco de la presente ley y de la reglamentación que dicte el procurador general;
- g) Proponer al procurador general de la Nación la creación, modificación o supresión de cargos de funcionarios, empleados administrativos y personal de servicio y de maestranza que se desempeñen en la Fiscalía, cuando resulte conveniente para el cumplimiento de los fines previstos en esta ley;
- h) Elevar al procurador general un informe anual sobre la gestión de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a su cargo; Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de él dependan, en los casos y formas establecidos en la ley y su reglamentación.

Fiscales generales de investigaciones administrativas

Art. 45. — Los fiscales generales de Investigaciones Administrativas actuarán en relación inmediata con el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir al procurador general adjunto en los sumarios administrativos e investigaciones, en los casos en que aquél lo disponga;
- b) Reemplazar al procurador general adjunto en caso de licencia, recusación, excusación, impedimento o vacancia con intervención del procurador general de la Nación;
- c) Informar al procurador general adjunto respecto de las causas en las que intervengan.

Fiscales generales adjuntos y fiscales de Investigaciones Administrativas

Art. 46. — Los fiscales generales adjuntos de Investigaciones Administrativas y los fiscales de Investigaciones Administrativas, asistirán al procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, desempeñando las tareas propias de la Fiscalía que este último le asigne.

Comunicación de procesos penales

Art. 47. — Cuando en el curso de un proceso judicial en sede penal se efectúe imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función, el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Investigaciones disciplinarias

Art. 48. — Cuando en la investigación practicada por la Fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación, en caso de tratarse los imputados de personal superior. En los supuestos restantes los antecedentes serán girados al funcionario de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate. En ambas circunstancias, dichas actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.

En todas estas actuaciones la Fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos a la sumariada, en especial, las facultades de ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.

Competencias especiales

Art. 49. — Además de las previstas en el artículo 23 de esta ley, los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas estarán investidos de las siguientes facultades de investigación:

- a) Disponer exámenes periciales, a cuyo fin podrán requerir de las reparticiones o funciona-

rios públicos la colaboración necesaria, que éstos estarán obligados a prestar. Cuando la índole de la peritación lo requiera, estarán facultados a designar peritos ad hoc.

- b) Informar al procurador general de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación para que determine las acciones a adoptar.

Sección III

Ministerio Público de la Defensa

Defensor general de la Nación

Art. 50. — El defensor general de la Nación tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda, las facultades del Ministerio Público de la Defensa. A ese efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dará vista al defensor general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, cuando existan menores o incapaces interesados, excepto en los supuestos en que según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine* por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciales o carentes de trascendencia, supuestos en los que se podrá omitir la vista.

El defensor general también actuará, si correspondiere, cuando haya intervenido en instancias anteriores un integrante del Ministerio Público de la Defensa por pobres y ausentes;

- b) Delegar sus funciones en los defensores generales adjuntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de esta ley;
- c) Disponer de oficio o a pedido de algún defensor público de menores e incapaces o de pobres y ausentes, ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia o de instancia única, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable, la actuación conjunta o alternativa de dos o más integrantes del Ministerio Público de la Defensa de igual o inferior jerarquía, respetando la competencia en razón de la materia, del territorio y de la especialidad funcional —defensor de menores e incapaces o de pobres y ausentes—, salvo cuando esas funciones estuviesen en cabeza de un solo magistrado. Esta limitación no regirá para los magistrados de la Defensoría General de la Nación.

En todos estos casos, la actuación del defensor que se designe estará sujeta a las directivas del titular;

- d) Designar defensores generales adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes, en los supuestos de procesos que lleguen a la Corte

Suprema de Justicia de la Nación con partes cuya defensa requiera la intervención distinta de ambas magistraturas. No será necesaria la designación anterior cuando concurren a un mismo proceso menores o incapaces con intereses opuestos. En cambio, si concurren a un mismo expediente pobres o ausentes con intereses encontrados, el defensor general proveerá a la defensa de cada uno de ellos por intermedio de distintos magistrados;

- e) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos con menores e incapaces la separación entre las funciones correspondientes a la defensa promiscua o conjunta del defensor de menores e incapaces y la defensa técnica que, en su caso, pueda corresponder al defensor de pobres y ausentes;
- f) Disponer por sí, o mediante instrucciones generales a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa, la adopción de todas las funciones propias del Ministerio Público de la Defensa, y ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los reglamentos;
- g) Efectuar la propuesta en tema a que se refiere el artículo 5º de esta ley, de conformidad con lo que establezca el reglamento de superintendencia;
- h) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- i) Promover el enjuiciamiento de los integrantes del Ministerio Público de la Defensa de conformidad con lo dispuesto en esta ley cuando, a su juicio, se hallaren incurso en las causales que prevé el artículo 53 de la Constitución Nacional; y solicitar el enjuiciamiento de los integrantes del Poder Judicial de la Nación —ante los órganos competentes— cuando se hallaren incurso en las conductas contempladas en el artículo citado;
- j) Elevar al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público de la Defensa acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas o reglamentarias; y del modo o forma cómo hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente;
- k) Responder a las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- l) Coordinar las actividades del Ministerio Público de la Defensa con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea el caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- ll) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público de la Defensa, y dictar los reglamentos e instrucciones generales para establecer una adecuada distribución

del trabajo entre sus integrantes y supervisar su cumplimiento;

- m) Imponer sanciones a los magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa, en los casos y formas establecidos por esta ley y su reglamentación;
- n) Confeccionar con el procurador general el presupuesto del Ministerio Público, y sólo en caso de no llegar a un acuerdo, presentar por separado un proyecto de presupuesto correspondiente al Ministerio Público de la Defensa;
- ñ) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado, pudiendo delegar esta atribución en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente;
- o) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa;
- p) Convocar, por lo menos una vez al año, a una reunión de consulta, a la que asistirán todos los magistrados mencionados en el artículo 4º, incisos b) y c) de la presente ley, en la cual se considerarán los informes anuales que se presenten conforme lo exige el artículo 32; se procurará la unificación de criterios sobre la actuación del Ministerio Público de la Defensa y se tratarán todas las cuestiones que el defensor general incluya en la convocatoria;
- q) Representar al Ministerio Público de la Defensa en las relaciones con los tres poderes del Estado.

Defensores generales adjuntos

Art. 51. — Los defensores generales adjuntos asistirán al defensor general en todas aquellas funciones que éste les encomiende y tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Sustituir o reemplazar al defensor general en las causas sometidas a su intervención o dictamen cuando por necesidades funcionales éste así lo resuelva y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor general respecto de las causas en que intervengan.

Defensores públicos de menores e incapaces

Art. 52. — Los defensores públicos de menores e incapaces, en las instancias y fueros en que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil, en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios;
- b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre com-

prometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen;

- c) Promover o intervenir en cualesquiera causas o asuntos y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos;
- d) Promover acuerdos judiciales o extrajudiciales con los representantes necesarios de los menores o incapaces sobre la persona y derechos de éstos; conciliar y mediar en las controversias que comprometan intereses de menores e incapaces, ejerciendo todos los actos que sean del caso para su protección y someterlos a la autoridad judicial cuando corresponda para su pertinente homologación;
- e) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de éstos;
- f) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar bajo la tutela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán por sí solos tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen;
- g) Peticionar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas pertinentes para la protección integral de los menores e incapaces expuestos por cualquier causa a riesgos inminentes y graves para su salud física o moral, con independencia de su situación familiar o personal;
- h) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley respectiva, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumban de acuerdo con la ley 22.917, sobre internación y externación de personas; y efectuar las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- i) Emitir dictámenes en los asuntos en que sean consultados por los tutores o curadores públicos;
- j) Citar y hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se encuentre afectado el interés de menores e incapaces;

- k) Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación de menores o incapaces, sean públicos o privados, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestos para cada internado, así como el cuidado y atención que se les otorgue;
- l) Poner en conocimiento de la autoridad judicial competente las acciones y omisiones de los jueces, funcionarios o empleados de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria y requerir su aplicación;
- m) Responder los pedidos de informes del defensor general;
- n) Imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 53. — Los defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales de casación y de segunda instancia, tendrán las siguientes competencias especiales:

- a) Desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que la ley confiere a los defensores públicos de menores e incapaces ante la primera instancia y promover las acciones que correspondan a fin de cumplir en forma efectiva con las funciones asignadas al Ministerio Público de la Defensa de Menores e Incapaces;
- b) Promover acciones en forma directa en las instancias anteriores sólo por razones de urgencia, que se tendrán que fundar debidamente en cada caso;
- c) Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de los menores e incapaces;
- d) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de menores e incapaces de las instancias anteriores;
- e) Elevar un informe anual al defensor general de la Nación sobre la gestión del área bajo su competencia;
- f) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de menores e incapaces ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general.

Art. 54. — El Registro de Menores e Incapaces creado por decreto 282/81, pasa a integrar el Ministerio Público de la Defensa, bajo la dependencia directa del defensor de menores e incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Tutores y curadores públicos

Art. 55. — Los jueces federales y nacionales de la Capital Federal designarán en los procesos judiciales,

tutores o curadores públicos de aquellos menores, incapaces o inhabilitados, que sean huérfanos o se encontraren abandonados. Ello no impedirá la designación de tutores o curadores privados cuando los jueces hallen personas que reúnan las condiciones legales de idoneidad necesarias para desempeñar tales cargos.

Art. 56. — Los tutores y curadores públicos tendrán las siguientes funciones:

- a) Cuidar de las personas de los menores, incapaces o inhabilitados asignados a su cargo, procurando que los primeros sean instruidos para que puedan —en su momento— acceder a una profesión, arte, oficio o actividad útil. En el caso de quienes padezcan enfermedades mentales, toxicomanías o alcoholismo, procurarán su restablecimiento y pedirán, cuando corresponda, su rehabilitación;
- b) Ejercer la representación legal de los incapaces que han sido confiados a su cargo, asistir a los inhabilitados, cuidar las personas de ambos, así como también su patrimonio, proveer cuando corresponda, a su adecuada administración; y cumplir con el régimen previsto para los tutores y curadores en el Código Civil;
- c) Ejercer la defensa de las personas sin bienes en el carácter de curadores provisionales en los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación, y representarlas en los restantes procesos que pudieren seguirse contra ellas, según el régimen de la ley procesal. En las mismas condiciones, tratándose de personas sin parientes ni responsables de ellas, ejercerán su curatela definitiva.
- d) Aplicar correctivos a sus pupilos en los términos que lo permite el ejercicio de la patria potestad;
- e) Proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas o intereses puestos a su cuidado, tanto en el ámbito de la actividad privada como frente a la administración pública;
- f) Ejercer la defensa de las personas internadas en los términos del artículo 482 del Código Civil, tanto en lo personal como en lo patrimonial, gestionando tratamientos adecuados, así como también los amparos patrimoniales que puedan corresponder;
- g) Citar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando a su juicio ello fuere necesario a fin de requerirle explicaciones para responder sobre cargos que se le formularen por tratamientos incorrectos o la omisión de cuidado respecto de los menores, incapaces o inhabilitados que se hallen a su cargo, o por cualquier otra causa vinculada con el cumplimiento de su función;
- h) Concurrir periódicamente a los establecimientos en donde se hallen alojadas las personas a su cargo e informar al juez y al defensor público sobre el estado y cuidado de aquéllos, debiendo efectuar las gestiones que consideren convenientes para mejorarlos:

- i) Mantener informado al defensor de menores e incapaces de primera instancia sobre las gestiones y asuntos que se encuentren a su cargo y responder a cualquier requerimiento que éste les formule.

Defensores públicos de pobres y ausentes

Art. 57. — Los defensores públicos de pobres y ausentes, en las instancias y fueros en que actúen, deberán proveer lo necesario para la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas penales, y en otros fueros cuando aquéllos fueren pobres o estuvieren ausentes. Para el cumplimiento de tal fin, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejercer la defensa y representación en juicio, como actores o demandados, de quienes invoquen y justifiquen pobreza o se encuentren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- b) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramitan ante la justicia en lo criminal y correccional, en los supuestos en que se requiera conforme lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. En el cumplimiento de esta función tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos;
- c) Con carácter previo a la promoción de un proceso, en los casos, materias y fueros que corresponda, deberán intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución de conflictos. En su caso, presentarán al tribunal los acuerdos alcanzados para su homologación;
- d) Arbitrar los medios para hallar a los demandados ausentes. Cesarán en su intervención cuando notifiquen personalmente al interesado de la existencia del proceso y en los demás supuestos previstos por la ley procesal;
- e) Contestar las consultas que les formulen personas carentes de recursos y asistirlos en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondan; y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos;
- f) Responder los pedidos de informes que les formule el defensor general de la Nación y elevar a éste el informe anual relativo a su gestión;
- g) Imponer las sanciones disciplinarias a los magistrados, funcionarios y empleados que de ellos dependan, en los casos y formas establecidos en esta ley y su reglamentación.

Art. 58. — Los defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación y de segunda instancia tendrán —en especial— las siguientes atribuciones:

- a) Dirimir los conflictos de turno y competencia que se planteen entre los defensores de pobres y ausentes de las instancias anteriores;

- b) Ejercer la superintendencia sobre los defensores de pobres y ausentes ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el defensor general;
- c) Elevar al defensor general un informe anual sobre la gestión del área bajo su competencia,

Honorarios de los defensores de pobres y ausentes

Art. 59. — El imputado en causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea asistido por un defensor de pobres y ausentes, deberá solventar la defensa, en caso de condena si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará las honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a la ley de aranceles.

Con el objeto de verificar el estado patrimonial del imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación de honorarios, el informe socioambiental que se practique deberá contener los elementos de valoración adecuados, o el juez ordenará una información complementaria al efecto. Si de ellos surgiese que el imputado resulta indigente al momento de la sentencia, será eximido del pago.

Art. 60. — En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios dentro de los diez días de notificado el fallo, el tribunal emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia.

Las sumas que se recauden por tal concepto, así como los honorarios regulados a los defensores públicos en causas no penales, se incorporarán a los fondos propios del ministerio público.

Defensores públicos adjuntos ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única

Art. 61. — Los defensores públicos adjuntos de menores e incapaces y de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación, segunda instancia y de instancia única, actuarán en relación inmediata con los defensores públicos ante dichos tribunales, y tendrán los siguientes deberes y atribuciones.

- a) Sustituir al defensor público titular en el ejercicio de sus deberes, cuando por necesidades funcionales, éste así lo resuelva, y en caso de licencia, excusación, recusación, impedimento o vacancia;
- b) Informar al defensor público titular respecto de las causas sometidas a su intervención y asistido en el ejercicio de sus funciones en la medida de las necesidades del servicio.

Sección IV

Funcionarios y personal auxiliar del Ministerio Público

Art. 62. — Los funcionarios y el personal auxiliar del Ministerio Público se regirán por la presente ley, las

normas pertinentes del decreto ley 1.235/58 y la reglamentación que dicte el procurador general de la Nación. En particular se establece:

- a) Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente;
- b) Todo traspaso de funcionarios o empleados desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación, o a la inversa, no afectará los derechos adquiridos durante su permanencia en uno u otro régimen, que comprenderán el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos, a fin de garantizar el ascenso indistinto en ambas carreras, atendiendo a los títulos y eficiencia de los funcionarios y empleados, y a su antigüedad;
- c) Todos los integrantes del Ministerio Público conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, mediante un convenio a celebrarse entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que garantice idéntica cobertura y la misma porcentualidad en las cuotas;
- d) Los funcionarios y empleados administrativos gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios y los setenta y cinco años de edad. Podrán ser removidos por causa de ineptitud o mala conducta, previo sumario administrativo con audiencia del interesado. Sólo con su conformidad podrán ser trasladados conservando su jerarquía, a otras jurisdicciones territoriales distintas de las adjudicadas en su designación;
- e) La designación y promoción de los funcionarios y del personal del Ministerio Público se efectuará por el procurador general o por el defensor general, según corresponda, a propuesta del titular de la dependencia donde exista la vacante. Los magistrados mencionados podrán delegar esta competencia.

TÍTULO III

Disposiciones complementarias

Representación del Estado en juicio

Art. 63. — La representación del Estado en juicio será fijada por una ley especial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 27, primer párrafo de esta ley. En igual sentido, dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la presente ley, la Procuración del Tesoro de la Nación deberá designar representantes en todos los juicios en trámite, cualquiera sea la instancia y fuero donde estén radicados, cesando al vencimiento de dicho plazo la intervención de los integrantes del Ministerio Público.

Subsistencia de cargos

Art. 64. — Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Recursos

Art. 65. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de los créditos que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

Equiparaciones. Ministerio Público Fiscal

Art. 66. — Los actuales integrantes del Ministerio Público pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 3º de esta ley, de acuerdo con las siguientes equiparaciones:

- a) El procurador general de la Nación, en el cargo de igual denominación, previsto en el inciso a) del artículo 3º;
- b) Los procuradores fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, en los cargos de procuradores generales adjuntos y el procurador general adjunto de Investigaciones Administrativas, respectivamente, previstos en el inciso b) del artículo 3º;
- c) Los fiscales de cámara ante los tribunales colegiados de casación, de segunda instancia y de instancia única; el procurador general del Trabajo, los secretarios de la Procuración General de la Nación y los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los respectivos cargos de fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3º;
- d) Los fiscales adjuntos de la Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la capital, el Subprocurador General del Trabajo, los Secretarios Letrados de la Procuración General de la Nación, en los cargos de fiscales generales adjuntos previstos en el inciso d) del artículo 3º.

Mientras permanezca en el cargo, la actual titular de la Subprocuración General del Trabajo conservará la equiparación presupuestaria, remuneratoria, provisional, de protocolo y trato que prevé el artículo 9º de la ley 18.345;

- e) Los agentes fiscales ante los jueces de primera instancia, los fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en los

cargos de fiscales previstos en el inciso e) del artículo 3º;

- f) Los fiscales adjuntos ante la justicia de primera instancia en lo criminal y correccional federal, los prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación y el fiscal coadyuvante de la justicia nacional del trabajo, en los respectivos cargos de fiscales auxiliares previstos en el inciso f) del artículo 3º.

Equiparaciones. Ministerio Público de la Defensa

Art. 67. — Los actuales integrantes del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pasarán a desempeñarse, en cada caso, en los cargos enumerados en el artículo 4º, de acuerdo a las siguientes equiparaciones:

- a) El defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previsto en el inciso a) del artículo 4º;
- b) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes ante la cámara de casación penal y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los tribunales colegiados de casación de segunda instancia o de instancia única, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;
- c) Los asesores de menores e incapaces de cámara y ante los tribunales orales en lo criminal, en los respectivos cargos de defensores públicos de menores e incapaces ante los tribunales colegiados de segunda instancia y de instancia única, conforme lo previsto en el inciso d) del artículo 3º.
- d) Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes y los asesores de menores e incapaces de primera instancia, en los cargos de defensores públicos de pobres y ausentes ante los jueces de primera instancia, conforme lo previsto en el inciso c) del artículo 4º;

Estructura

Art. 68. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación en su caso, podrán modificar la estructura básica existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Para ello, elaborarán una propuesta que será remitida al Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso.

Art. 69. — En los distritos judiciales donde no se hubieran cubierto con cargos autónomos las funciones de defensores de menores e incapaces y de pobres y ausentes establecidas en la presente ley, hasta tanto se designen los titulares respectivos a ambos cargos, los actuales defensores de pobres, incapaces y ausentes continuarán ejerciendo ambos ministerios.

En los ámbitos de competencia material o territorial donde no se hubiesen designado los defensores públi-

cos ante los tribunales colegiados de segunda instancia, ejercerán la función los defensores públicos ante los tribunales de primera instancia que hubiesen tomado intervención en la causa recurrida o en la justicia federal con asiento en el interior del país, aquellos que tengan su sede en el mismo lugar que el tribunal de apelaciones según el caso. Hasta tanto se produzcan las designaciones correspondientes, dichos defensores públicos ante los tribunales de primera instancia percibirán la remuneración correspondiente a la de los magistrados enumerados en el inciso c) del artículo 4º.

Derogaciones

Art. 70. — Deróganse las leyes 3.367, 15.464 y 21.383; los títulos VII, VIII y IX de la ley 1.893; los artículos 6º y 10 de la ley 4.162; el artículo 31, cuarto párrafo, inciso a), del decreto ley 1.285/58, el artículo 3º, incisos a) y b), y 5º de la ley 20.581; el capítulo II de la ley 18.345; los artículos 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias; el artículo 3º de la ley 3.932, en tanto regula la notificación al procurador fiscal de toda demanda contra la Nación y su sujeción a las instrucciones del correspondiente ministro del Poder Ejecutivo; los artículos 1, inciso b) 2, 3, y 4 en cuanto instrumenta la forma de otorgar a un miembro del Ministerio Público Fiscal el mandato para actuar en representación del Estado en juicio y la facultad del ministro de Justicia para dar las instrucciones pertinentes; y toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley.

Art. 71. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Jorge R. Yoma.

Texto del proyecto presentado por el senador Almirón

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones goza de autonomía e independencia en relación con los demás órganos contemplados en la Constitución. Representa los intereses generales de la sociedad; tiene a su cargo la defensa del orden jurídico y de la causa pública y actúa en todos los casos previstos por las leyes generales y especiales en que estén comprometidos los intereses y valores de la sociedad y del Estado.

Art. 2º — El Ministerio Público está compuesto por: el procurador general de la Nación, los procuradores fiscales de la Corte Suprema, los fiscales de las cámaras de apelaciones, los fiscales ante los jueces de primera instancia, los defensores ante todas las instancias, fiscales auxiliares y demás funcionarios jerárquicos previstos en las leyes particulares.

Art. 3º — Los componentes del Ministerio Público serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Tienen la estabilidad, incompatibilidad e inmunidades previstas para los jueces en la Constitución Nacional.

Art. 4º — Para ser procurador general de la Nación, son precisos los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte Suprema. Los demás integrantes de la magistratura del Ministerio Público, deben reunir las mismas condiciones correspondientes a los jueces, según su grado y su destino.

Art. 5º — El Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia procederá en el término de 180 días a elaborar un texto ordenado complementario de la presente ley, con todas las disposiciones legales en vigencia inherentes al Ministerio Público.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos H. Almirón.

Texto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de fecha 7-9-93

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO

TÍTULO I

Organización e integración del Ministerio Público

CAPÍTULO I

Principios generales

Misión

Artículo 1º — El Ministerio Público, como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, tendrá por misión la que le asigna el artículo 120 de la Constitución Nacional para que en representación de los intereses de la sociedad defienda el orden jurídico en coordinación con los tres poderes del Estado.

Ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, jerarquía, unidad de actuación e independencia funcional, en todo lo concerniente a lo establecido por la presente ley.

Composición

Art. 2º — El Ministerio Público estará integrado por el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, los fiscales, defensores y demás funcionarios y empleados que establece la presente ley.

La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas integra el Ministerio Público, excepto en sus competencias de naturaleza administrativo-disciplinarias, contenidas en el inciso a) del artículo 3º de la ley 21.383, que se transfieren a la Procuración del Tesoro de la Nación, y en el inciso b) del mismo artículo, que serán ejercidas por la Procuración del Tesoro de la Nación juntamente con la Sindicatura General de la Nación. La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas será ejercida por un procurador delegado designado por el procurador general de la Nación.

Creación legislativa de cargos

Art. 3º — Toda creación legislativa de cargos a los que se atribuyeran competencias encomendadas al Mi-

nisterio Público por el artículo 120 de la Constitución Nacional u otras leyes, se considerará efectuada bajo la Jefatura del procurador general de la Nación o del defensor general de la Nación, según la distribución de funciones prevista en esta ley, quienes podrán ejercer directamente o controlar el ejercicio de toda atribución de competencia que se hubiere otorgado a tales nuevos cargos.

Relaciones con los Poderes del Estado

Art. 4º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación se relacionarán con el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de Justicia, con el Poder Judicial de la Nación por medio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y con el Poder Legislativo a través de una comisión bicameral, cuya composición y funciones fijará la reglamentación que al efecto dicten en conjunto ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Autarquía financiera

Art. 5º — A los efectos de asegurar su autarquía financiera, el Ministerio Público, contará con crédito presupuestario propio.

El procurador general de la Nación elaborará el proyecto de presupuesto de su jurisdicción y lo remitirá al Poder Ejecutivo para su análisis e integración al presupuesto de la administración nacional.

Ejecución presupuestaria. Control

Art. 6º — En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se observarán las previsiones de las leyes de administración financiera del Estado.

El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la comisión bicameral del Congreso Nacional creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de las cuentas del ejercicio.

CAPÍTULO II

Relación de servicio

Designación

Art. 7º — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán nombrados por el señor presidente de la Nación, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, y podrán ser removidos en cualquier tiempo por el señor presidente de la Nación con acuerdo de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Honorable Senado de la Nación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 21.

Los demás integrantes del Ministerio Público serán designados por el procurador general de la Nación, con la participación del defensor general de la Nación, según el caso, de acuerdo con lo preceptuado por esta ley y su reglamento en materia de concursos.

Requisitos

Art. 8º — Para ejercer el cargo de Procurador General de la Nación o Defensor General de la Nación, se

requieren las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para el desempeño de los restantes cargos deberán reunirse las condiciones exigidas por esta ley y su reglamentación.

Ingreso, promoción y concursos

Art. 9º.— El ingreso y la asignación de cargos en el Ministerio Público se realizará previo concurso que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- a) Los requisitos del cargo previstos en la ley;
- b) Los antecedentes que acrediten idoneidad especial en materias relativas al cargo y la formación jurídica del aspirante;
- c) Los antecedentes relativos a la tarea profesional o en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación.

Para valorar estos aspectos se citará a una entrevista personal a los aspirantes que reúnan las condiciones establecidas, y se requerirá una prueba de idoneidad particular.

El concurso será abierto a cualquier aspirante.

Prohibición de ingreso

Art. 10.— No podrán ingresar en el Ministerio Público:

- a) Quienes no tengan aptitud física o psíquica para la función;
- b) Los inhabilitados de acuerdo con el artículo 60 de la Constitución Nacional;
- c) Quienes no cuenten con cuatro (4) años de ejercicio en la profesión de abogado o en funciones en el Poder Judicial de la Nación que requieran título de abogado.

Lista de candidatos

Art. 11.— Anualmente, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación convocarán respectivamente y en las áreas de su competencia, a un concurso para conformar la lista de candidatos a ocupar diversos cargos del Ministerio Público. Este concurso tendrá por finalidad cubrir las vacantes que se produzcan en la lista y no se realizará uno nuevo mientras aquella no esté totalmente cubierta u operado el plazo de caducidad. Los candidatos seleccionados permanecerán tres (3) años en la lista, a contar desde el momento de su incorporación en ella, luego de lo cual se producirá la caducidad automática.

Tribunales de concurso

Art. 12.— El procurador general de la Nación, con la participación del defensor general de la Nación según el caso, constituirá tribunales para los respectivos concursos, con fiscales o defensores presididos por un fiscal general o un defensor general, y con representantes de los tres Poderes del Estado uno por el Poder Ejecutivo nacional, uno por cada una de las Cámaras del Con-

greso de la Nación, y uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Juramento

Art. 13.— El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación y los fiscales y defensores, al tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación lo harán ante el señor presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación. Los fiscales y defensores lo harán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, o ante el funcionario que éstos designen, según los casos.

Incompatibilidades

Art. 14.— Quienes integran el Ministerio Público no podrán ejercer la abogacía ni la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes, o bien, cuando lo hicieren en cumplimiento de un deber legal. En lo demás alcanzan a ellos las incompatibilidades que establecen las leyes respecto de los jueces de la Nación.

No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los jueces ante quienes correspondiera desempeñar su ministerio.

Recusaciones y excusaciones

Art. 15.— El procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, los fiscales o defensores deberán excusarse o podrán ser recusados por las causas establecidas a su respecto en las leyes procesales que rijan las causas en que actúen. También podrán excusarse cuando existieren motivos graves que obsten a su actuación imparcial.

En tales supuestos, la sustitución se registrará conforme a lo dispuesto por la presente ley. Los conflictos que pudieran suscitarse a raíz de las excusaciones serán resueltos por el superior jerárquico del excusado.

Subrogación y sustitución

Art. 16.— En caso de recusación, excusación, impedimento, licencia o vacancia, los integrantes del Ministerio Público se reemplazarán de acuerdo con la reglamentación que dictarán el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, según los casos.

De no ser posible la subrogación entre sí, serán reemplazados por los integrantes de una lista de abogados que reúnan las condiciones para ser miembros del Ministerio Público y que los fiscales generales y los defensores generales formarán por insaculación en el mes de diciembre de cada año. La designación constituye carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna.

En caso de recusación o excusación, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación serán reemplazados por el procurador fiscal y el defensor general adjunto con mayor antigüedad en el cargo, respectivamente.

Inmunities

Art. 17. — El procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación, los fiscales y los defensores, no podrán ser perturbados en el ejercicio de sus funciones por los integrantes de los poderes del Estado ni por persona alguna.

Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denunciaren con motivo de perturbaciones provenientes de dichos poderes, que afecten el ejercicio de sus funciones, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso, quienes tendrán las facultades de resolverlas y poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo las medidas que fueren necesarias para preservar el normal desempeño de aquellas funciones, cuando así correspondiere.

Estarán exentos de la obligación de comparecer como testigos, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Remuneraciones

Art. 18. — Las remuneraciones del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación, serán fijadas por ley y no podrán ser inferiores a las que perciban los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las remuneraciones de los fiscales, defensores, funcionarios y empleados del Ministerio Público serán fijadas en la Ley de Presupuesto y no podrán ser inferiores a las vigentes al 24 de agosto de 1994.

Estabilidad

Art. 19. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º, primer párrafo, el procurador general de la Nación, el defensor general de la Nación y los fiscales y defensores del Ministerio Público, gozan de estabilidad en el ejercicio de sus funciones mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad.

No obstante ello, el procurador general de la Nación, con la participación del defensor general de la Nación según el caso, podrá disponer el cese de aquellos fiscales y defensores que alcanzaren los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.

Los funcionarios y empleados administrativos gozarán del derecho a la estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes máximos de los respectivos regímenes jubilatorios.

Disciplina del servicio

Art. 20. — Los miembros del Ministerio Público que incumplieren los deberes y obligaciones que establezcan

las leyes y demás disposiciones reglamentarias, serán punibles de las siguientes sanciones:

- a) Llamado de atención;
- b) Apercibimiento;
- c) Suspensión de hasta treinta (30) días;
- d) Multa de hasta el equivalente a treinta (30) días de la remuneración respectiva;
- e) Remoción por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes.

La sanción deberá ser adecuada a la naturaleza y gravedad de la falta cometida y a los antecedentes en la función.

Las decisiones disciplinarias serán adoptadas por el procurador general de la Nación, previo sumario que garantice el debido proceso legal.

Remoción con causa

Art. 21. — El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán ser removidos en la forma y por las causas establecidas para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7º, primer párrafo.

Los fiscales, defensores y funcionarios con rango equivalente, podrán ser removidos por decisión de un jurado de enjuiciamiento, en los supuestos del artículo 20, inciso e).

Jurado de Enjuiciamiento

Art. 22. — Créase el Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público que estará presidido por el procurador general de la Nación, e integrado, además, por un representante del Poder Judicial de la Nación, un representante por cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, y un representante del Poder Ejecutivo nacional, que tendrá a su cargo la sustanciación y decisión de los sumarios que pudieran concluir en la remoción con causa de los fiscales, defensores y funcionarios con rango equivalente del Ministerio Público, de conformidad al reglamento que deberá dictar a tal efecto.

Correcciones disciplinarias

Art. 23. — Los jueces y tribunales podrán imponer prevenciones y apercibimientos, o solicitar al procurador general de la Nación o al defensor general de la Nación, la formación de sumarios administrativos a los miembros del Ministerio Público, por faltas cometidas contra su autoridad o el decoro en el trámite de las causas en las que intervengan, las cuales serán recurribles en la misma forma que las correcciones disciplinarias aplicadas a los litigantes.

Cesación

Art. 24. — Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 7º, 19, 20 y 21 la relación de servicio en el Ministerio Público se extinguirá por las siguientes causas:

- a) Renuncia;

- b) Remoción;
- c) Muerte o incapacidad sobreviniente;
- d) Jubilación forzosa o voluntaria;
- e) Cumplimiento de la edad límite.

El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán disponer la jubilación forzosa de quienes hayan cumplido los requisitos previstos en la ley previsional, cesando en el cargo una vez concedido el beneficio, conforme lo dispuesto en el artículo 19, segundo párrafo, de la presente.

TÍTULO II

Funciones y actuación

Sección primera

Normas generales

CAPÍTULO I

Funciones

Funciones del Ministerio Público

Art. 25. — Al Ministerio Público le compete:

- a) Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la Nación;
- b) Representar y defender el interés público en todos los casos y asuntos que así se requiera;
- c) Promover y ejercer la acción penal pública en la forma y alcance establecido por la ley. Los jueces no procederán a instruir sumarios, ni condenarán sin previo requerimiento fiscal. Mediando prevención policial y llegadas las actuaciones al juzgado, se dará inmediata intervención al fiscal, sin cuyo requerimiento promoviendo la acción penal no podrá continuar el trámite de la causa;
- d) Intervenir en todos los asuntos en que esté comprometido el interés de la Nación o el orden público;
- e) Promover y ejercer la acción pública civil en los supuestos establecidos por la ley;
- f) Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, así como el efectivo cumplimiento del debido proceso adjetivo y sustantivo;
- g) Velar por el respeto permanente de los derechos humanos —comunicando de manera inmediata cualquier violación a ellos—, y formular la denuncia penal y/o promover las acciones civiles que correspondieren;
- h) Solicitar la protección de las huellas o vestigios del delito, manteniendo la confidencialidad de los materiales correspondientes;
- i) Requerir la asistencia de las víctimas de los delitos, mantenerlas informadas del grado de avance de la causa respectiva, atender sus pedidos de informes sobre el hecho y evacuar cualquier consulta que formulen;
- j) Concurrir a solicitud del Defensor del Pueblo a las inspecciones o visitas que realice en el ejercicio de sus funciones;
- k) Observar un trato digno con el público y los detenidos;
- l) Tener en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima y prestar atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso, sin perjuicio de las obligaciones del defensor oficial respecto de su defendido;
- m) Velar contra la práctica, propiciamiento o consentimiento de cualquier acto de tortura o de incomunicación ilegal.
Cuando se sepa, o se tengan sospechas fundadas que las pruebas fueron obtenidas por medios ilícitos, especialmente torturas u otros abusos de los derechos humanos, deberá negarse a utilizar las mismas contra cualquier persona salvo para los responsables de la obtención ilícita de dichas pruebas;
- n) Considerar la posibilidad de destituir de la acción penal o de interrumpir el proceso condicionalmente en los casos y en los términos que la ley lo autorice, según las instrucciones que emanen del procurador general, dejando a salvo los derechos del imputado y de la víctima;
- o) Los fiscales deberán cooperar con otros organismos e instituciones gubernamentales dentro de su competencia específica;
- p) Controlar que no se realicen detenciones ilegales;
- q) Guardar la más absoluta reserva acerca de los hechos y actuaciones de la causa;
- r) Promover e intervenir en cualquier causa o asunto concerniente al derecho de menores, incapaces e inhabilitados, cuando los mismos sean carentes de representación legal; cuando se deba suplir la inacción de sus representantes legales o de las personas que los tuvieran bajo su guarda o custodia; todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que corresponde por ley;
- s) Proveer lo necesario para la defensa de la persona y de los derechos de los habitantes que carecieren de recursos o estuvieren ausentes;
- t) Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica a fin de que los reclusos e internados sean tratados con el respeto debido a su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones correspondientes cuando se verifique violación;
- u) Intervenir en todos los procesos judiciales en que se solicite la ciudadanía argentina.

Funciones excluidas

Art. 26. — Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público la representación en juicio cualquiera sea

la naturaleza de éste, del Estado y el del Fisco, así como el asesoramiento al Poder Ejecutivo. Ello no obstante, ante un requerimiento fundado de organismos públicos expedido por su máximo nivel jerárquico, sus integrantes podrán emitir dictámenes consultivos no vinculantes sobre materias propias de sus competencias funcionales.

Los integrantes del Ministerio Público, bajo ningún concepto, podrán subrogar en sus funciones a los magistrados del Poder Judicial.

CAPÍTULO II

Actuación

Facultades de investigación

Art. 27. — Los funcionarios del Ministerio Público, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrán requerir informes a los organismos nacionales, provinciales o comunales, a los organismos privados, y a los particulares cuando corresponda; así como recabar la colaboración de las autoridades policiales para realizar diligencias propias de aquéllos.

Los fiscales ante la justicia penal, anoticiados de la perpetración de un hecho ilícito —ya fuere por la comunicación prevista en el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Nación o por cualquier otro medio— y sin perjuicio de las directivas que el juez competente imparta a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberán requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estimen pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal. A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata.

Carácter de los dictámenes

Art. 28. — Las acciones públicas, dictámenes e intervenciones en juicio de los integrantes del Ministerio Público, carecen de carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales, con las limitaciones que prevean las leyes procesales.

Los dictámenes y requerimientos merecerán siempre la consideración de los jueces, quienes no están obligados a tratar todos los argumentos aducidos, sino sólo los que estimen conducentes para motivar y fundar sus decisiones.

Principios de legalidad y oportunidad

Art. 29. — Cuando se tratare de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio.

La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley.

La aplicación de criterios de oportunidad será decidida o autorizada por el procurador general de la Nación por instrucciones generales o particulares, pudiendo delegar las autorizaciones sólo en los casos particulares.

Organización jerárquica

Art. 30. — El Ministerio Público se organiza jerárquicamente. Cada superior jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable por la gestión de los que estén a su cargo.

Quienes asisten a un superior jerárquico deben obedecer sus instrucciones, según lo dispuesto en la presente ley y su reglamento.

Deber de informar

Art. 31. — Los integrantes del Ministerio Público comunicarán al procurador general de la Nación por vía jerárquica, los asuntos a su cargo que por su importancia, trascendencia o complejidad, requieran una asistencia especial, indicando concretamente las dificultades y proponiendo las soluciones que estimen adecuadas.

CAPÍTULO III

Del procurador general de la Nación

Principio general

Art. 32. — El procurador general de la Nación es el jefe máximo del Ministerio Público y el responsable político de su buen funcionamiento —con la participación del defensor general de la Nación en la medida de sus competencias—, respondiendo de ello ante el Congreso de la Nación conforme lo establecen los artículos 6º, segundo párrafo, 7º y 21 de la presente ley.

El procurador general de la Nación ejercerá la acción penal pública y las demás facultades que la ley otorga al Ministerio Público por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

Atribuciones y deberes

Art. 33. — Corresponde al procurador general de la Nación:

- a) Ejercer la superintendencia general sobre los miembros del Ministerio Público, establecer normas para la distribución del trabajo y supervisar su cumplimiento;
- b) Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país;
- c) Conformar, coordinar y radicar equipos de trabajo ordinarios o especiales en cualquier lugar del país, según las necesidades del servicio;
- d) Intervenir personalmente o designar un funcionario especial en cualquier proceso judicial, cualquiera sea su estado, asumiendo la representación del Ministerio Público y desplazando al agente ordinario o actuando en forma conjunta o alternada con éste. La actuación dentro de un proceso judicial determinado de los magistrados especiales no será causal de impedimento o recusación si posteriormente debieren intervenir como agentes ordinarios en el mismo proceso;

- e) Disponer el gasto del organismo de acuerdo con el presupuesto asignado conforme a la ley, pudiendo delegarla en el funcionario que designe y en la cuantía que estime conveniente
- f) Modificar la planta básica del Ministerio Público, crear nuevos cargos, aumentar el número de los ya creados, crear organismos, áreas o dependencias para los fines y funciones previstos en esta ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63, primer párrafo;
- g) Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del organismo;
- h) Requerir la colaboración de las autoridades de todo orden para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, las que deberán prestarlas en la medida de su respectiva competencia;
- i) Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades nacionales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial. Cuando sea del caso, también lo hará con las autoridades provinciales;
- j) Responder las consultas que formulen los funcionarios y empleados de la Procuración General de la Nación y los funcionarios del Ministerio Público;
- k) Rendir anualmente al Congreso Nacional un informe escrito sobre las labores cumplidas por el Ministerio Público a su cargo;
- l) Dictaminar en las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la competencia originaria que prevé la Constitución Nacional, pudiendo ofrecer pruebas cuando se debatan cuestiones de hecho y esté en juego el interés público y controlar su sustanciación a fin de preservar el debido proceso legal;
- ll) Intervenir en el trámite de las causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de dictaminar si corresponde a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el Ministerio Público tutela. A este objeto, cuando resulte competente, el tribunal dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios concedidos y de las quejas planteadas por denegatoria de aquéllos;
- m) Solicitar, con la sola invocación de esta norma, el rechazo del recurso extraordinario en las causas que para dictamen le remita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando falte agravio federal suficiente o las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia;
- n) Eximirse de dictaminar en las causas que le remita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según su sana discreción y con sola invocación de esta norma, cuando en ellas no se hallaren comprometidos los intereses y derechos que el Ministerio Público debe tutelar, en función del artículo 120 de la Constitución Nacional y del artículo 25 de la presente ley;

- ñ) Intervenir en el trámite de las apelaciones ordinarias ante dicho tribunal cuando el interés público se encontrare comprometido;
- o) Intervenir en las cuestiones de competencia que deba dirimir la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- p) Impulsar la acción pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos que corresponda;
- q) Intervenir en las causas de extradición que lleguen por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
- r) Dictar el reglamento de la carrera y ascenso de los funcionarios y empleados administrativos del Ministerio Público;
- s) Ejercer, por avocación, las facultades que la ley prevé para el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en los términos del artículo 2º de la presente;
- t) Representar al Ministerio Público en las relaciones con los Poderes del Estado;
- u) Requerir informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores respecto de situaciones que produzcan una efectiva privación de justicia o la afectación del debido proceso en las actuaciones judiciales;
- v) Elevar a conocimiento del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, la opinión del Ministerio Público acerca de la conveniencia de la reforma de la legislación o sus reglamentos y del modo o forma como hacer efectiva su aplicación, en los casos en que lo juzgue pertinente.

Sustituciones y traslados

Art. 34. — El procurador general de la Nación podrá designar a uno o más funcionarios del Ministerio Público para que actúen en un asunto determinado o en varios de ellos, reemplazarlos entre sí, formar equipos de trabajo o asumir directamente la conducción personal de un caso, cualquiera sea la instancia o el fuero en que se halle radicado.

Podrá ordenar traslados por razones de servicio dentro del área territorial o funcional de actuación de los afectados. Estos traslados podrán ser definitivos o transitorios.

Instrucciones

Art. 35. — El procurador general de la Nación impartirá a sus subordinados las instrucciones inherentes al servicio y al ejercicio de las funciones tanto de carácter general cuanto referidas a asuntos específicos.

Deber de obediencia

Art. 36. — El integrante del Ministerio Público que reciba una orden de un superior concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones deberá cumplirla y atenerse a ella en sus dictámenes, sin perjuicio de dejar a salvo su opinión personal si así lo estimare.

En los debates orales, el funcionario interviniente actuará y/o concluirá según su criterio, sin perjuicio de observar las instrucciones generales relativas a la interpretación de la ley. Si algún superior jerárquico deseara conducir el debate según su propio criterio, asistirá a él asumiendo personalmente la representación del Ministerio Público, previa autorización expresa del procurador general de la Nación.

Objeción

Art. 37. — El integrante del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley, así lo hará saber al procurador general de la Nación por informe fundado. Este, sobre la base del mismo, decidirá si mantiene o no la instrucción objetada.

Cuando una instrucción objetada, general o particular, concierne a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá con nombre del superior.

Si la instrucción objetada consiste en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio del reemplazo que se pudiere ordenar o del ulterior desistimiento de la actividad cumplida.

Forma de las instrucciones

Art. 38. — Las instrucciones serán impartidas, como regla general en forma escrita y transmitidas por cualquier vía de comunicación. En caso de peligro en la demora, podrán ser dadas oralmente y confirmadas de inmediato por escrito, por dichos medios.

Las instrucciones sencillas, consistentes en simples órdenes del servicio, podrán ser impartidas oralmente.

Informe anual al Congreso Nacional

Art. 39. — Anualmente y en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación remitirá un informe de lo actuado que deberá contener:

- a) El resumen pormenorizado del trabajo realizado en el ejercicio;
- b) El análisis de la eficiencia del servicio prestado con detalle de los inconvenientes que lo afectaron y las medidas adoptadas para superarlos;
- c) El detalle de las instrucciones generales y particulares impartidas, las objeciones efectuadas y la decisión recaída; los equipos formados, los reemplazos y traslados producidos y la asunción personal de la actuación en los diversos casos;
- d) El detalle de las modificaciones producidas en los cargos del Ministerio Público y la descripción de su planta actual;
- e) Las propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que requiera el servicio, si correspondiere;
- f) Las sugerencias o propuestas sobre la actividad general o particular del Ministerio Público recibidas de los poderes del Estado y sus correspondientes respuestas;

g) Las demás que lo recomendaré el Congreso Nacional por medio de la comisión bicameral creada por esta ley;

h) Toda otra información que se considere conveniente y necesaria hacer conocer al órgano legislativo;

i) La rendición de las cuentas del ejercicio.

SECCION SEGUNDA

Del Ministerio Público Fiscal

CAPÍTULO I

De los procuradores fiscales y procuradores delegados

Atribuciones y deberes

Art. 40. — Los procuradores fiscales asisten al procurador general de la Nación y cumplen las directivas que éste imparte de conformidad con los incisos l), ll), m), n), ñ), o), p) y q) del artículo 33 de la presente ley y lo que establezca el Reglamento de Superintendencia.

Los procuradores delegados son designados por el procurador general de la Nación para la investigación de cierta clase de delitos que por su magnitud, complejidad y particularidades así lo aconsejen, quedando ello reservado a su prudente arbitrio. Igualmente podrá designarlos para que tengan a su cargo, por delegación, el gobierno del Ministerio Público en una determinada zona o área territorial del país, sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo 42 a los fiscales generales.

Requisitos para la designación

Art. 41. — Para ser procurador fiscal o procurador delegado se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino;
- b) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
- c) Ser abogado, con título habilitante para ejercer esa profesión en la República y haberla ejercido o haber cumplido funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación que requieran dicho título, o en todas esas actividades alternativamente, por un lapso no menor de seis (6) años.

CAPÍTULO II

De los fiscales generales

Atribuciones y deberes

Art. 42. — Los fiscales generales serán los jefes del Ministerio Público en los distritos o departamentos que les fueren encomendados y los responsables de su buen funcionamiento ante el procurador general de la Nación, o el procurador delegado, en su caso.

Ellos ejercerán la acción penal pública y las demás atribuciones que la ley otorga al Ministerio Público, por sí o por intermedio de los funcionarios que establece la presente ley según se reglamente, salvo cuando el

procurador general de la Nación, asuma directamente esa función o la encomiende a otro, conjunta o separadamente.

Corresponde a los fiscales generales:

- a) Promover ante las cámaras de apelaciones el ejercicio de la acción pública o continuar ante aquellas la intervención que el Ministerio Público hubiera tenido en instancias inferiores, sin perjuicio de su facultad para desistirla, mediante dictamen fundado;
- b) Elevar al procurador general de la Nación un informe anual sobre la gestión del Ministerio Público que actúa en el área de su competencia, tanto en lo relacionado con el ejercicio de la función jurisdiccional como en lo concerniente a la superintendencia;
- c) Ejercer superintendencia sobre los fiscales ante las instancias inferiores e impartirles instrucciones en el marco de la presente ley y de la reglamentación pertinente que dicte el procurador general de la Nación;
- d) Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los fiscales de las instancias inferiores;
- e) Responder los pedidos de informes que les solicite el procurador general de la Nación;
- f) Peticionar la reunión de la cámara de apelaciones en pleno para unificar la jurisprudencia contradictoria y requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria. En ambos casos, será requisito para el ejercicio de esta atribución el carácter de parte en el juicio;
- g) Dictaminar en todas las causas sometidas a fallo plenario.

Requisitos para la designación

Art. 43. — Para ser fiscal general se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 41 de la presente ley.

CAPÍTULO III

De los fiscales

Atribuciones y deberes

Art. 44. — Los fiscales ejercerán sus funciones bajo la dependencia de los fiscales generales, asistiéndolos o tomando a su cargo las tareas que éstos determinen.

Ejercerán la acción penal pública de manera autónoma y por sí mismos o por intermedio de los órganos auxiliares que esta ley establece, salvo cuando el procurador general de la Nación o el fiscal general asuman directamente esa función o el primero la encomiende a otro, u otros funcionarios, conjunta o separadamente.

Corresponde a los fiscales actuar por ante los jueces de primera instancia, con las facultades y deberes propios del Ministerio Público, en el ámbito de la respectiva competencia por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos

necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Atribuciones en particular

Art. 45. — En particular, les corresponde hacerse parte en todas las causas o trámites judiciales en que el interés público lo requiera, a fin de asegurar el respeto al debido proceso legal, la defensa del interés público y el efectivo cumplimiento de la legislación, así como para prevenir, evitar o remediar daños causados o que puedan causarse al patrimonio social, a la salud y al medio ambiente, al consumidor, a bienes o derechos de valor artístico, histórico o paisajístico, en los casos y mediante los procedimientos que las leyes establezcan.

Deberán intervenir asimismo en los procesos de amparo y de hábeas corpus, en todas las cuestiones de competencia y en los procesos donde se solicite el otorgamiento de la ciudadanía argentina.

Intervendrán igualmente, en forma ineludible, en los casos en que el interés fiscal esté comprometido, en representación de la sociedad y no del Estado.

Los fiscales ante la justicia en lo penal deberán realizar las visitas de cárceles y otros lugares de detención, transitoria o permanente, para tomar conocimiento y controlar la situación de los alojados en ellos, y para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección del sistema penitenciario que pudieren corresponder en miras al interés público.

Denuncias intervención fiscal

Art. 46. — Todos los jueces federales y los nacionales actuantes en la Capital Federal deberán dar intervención a los Fiscales ante la justicia criminal y correccional, cuando se denunciare la comisión de un delito de acción pública, a fin de permitir el cumplimiento por parte del Ministerio Público de las atribuciones que la ley le confiere.

Deber de informar

Art. 47. — Los Fiscales ante la Primera Instancia deberán informar a la correspondiente Fiscalía General, de toda irregularidad que adviertan en el desempeño de las funciones judiciales y administrativas susceptibles de afectar el debido proceso legal y el interés público, cuya tutela les ha sido encomendada.

Requisitos para la designación

Art. 48. — Para ser Fiscal se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino;
- b) Haber cumplido veinticinco (25) años de edad;
- c) Ser abogado con título habilitante para ejercer esa profesión dentro de la República y haberlo ejercido o haberse desempeñado en funciones del Ministerio Público o del Poder Judicial de la Nación que requieran dicho título, o en esas actividades alternativamente, por un lapso no menor a cuatro (4) años.

CAPÍTULO IV

*De los fiscales adjuntos y auxiliares**Atribuciones y deberes*

Art. 49. — Los fiscales adjuntos colaborarán con un fiscal general y los fiscales auxiliares con un fiscal. Los fiscales adjuntos que dependan de una fiscalía general actuarán dentro de la jurisdicción territorial correspondiente a la misma.

Los fiscales adjuntos ejercerán autónomamente la acción penal pública y las demás atribuciones que las leyes otorgan al Ministerio Público, respondiendo a las indicaciones del superior jerárquico de quien dependan o a quien asistan.

Los fiscales auxiliares no podrán intervenir autónomamente en juicio, sino bajo la supervisión y responsabilidad del superior jerárquico a quien asisten.

Requisitos para la designación

Art. 50. — Para ser fiscal adjunto o fiscal auxiliar se requiere:

- a) Ser ciudadano argentino;
- b) Haber cumplido veinticinco (25) años de edad;
- c) Ser abogado con título habilitante para ejercer la profesión en la República y haberla ejercido o haber desempeñado funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial de la Nación, que requieran dicho título, o en esas actividades alternativamente, por un lapso no menor de cuatro (4) años.

CAPÍTULO V

*De la Procuración General de la Nación**Composición, atribuciones y deberes*

Art. 51. — La Procuración General de la Nación es el domicilio y la sede de actuación del procurador general de la Nación, como fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como jefe del Ministerio Público.

En dicha sede se desempeñarán los procuradores fiscales, fiscales generales, fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares que colaboren con el Procurador general de la Nación, en el número que éste decida, de conformidad a las facultades que en materia presupuestaria se le asignen por esta ley.

Todos los fiscales mencionados en el párrafo anterior que se desempeñen en la Procuración General de la Nación, colaborarán, tanto en las tareas de dictaminar en los asuntos remitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuanto en los asuntos relativos al gobierno del Ministerio Público, de conformidad con los planes y organigramas de trabajo que el procurador general disponga.

Sin perjuicio de lo anterior, los procuradores fiscales desempeñarán las funciones que les asigna el artículo 40 de la presente y los fiscales generales de la Procuración General tendrán a su cargo las distintas Secretarías que funcionan en la sede. Los Fiscales de la Procuración General de la Nación, actuarán en todo el te-

ritorio de la Nación, en las causas que el procurador general disponga.

SECCION TERCERA

Del Ministerio Público de la Defensa Oficial

CAPÍTULO I

*Composición, funciones y jerarquía**Composición*

Art. 52. — Integran la defensa oficial el defensor general de la Nación, los defensores generales adjuntos, los defensores oficiales generales y los defensores oficiales.

Funciones

Art. 53. — La defensa oficial interviene en los asuntos judiciales en los que se hallen involucrados menores, incapaces, pobres y ausentes, y deberá entablar en su defensa todas las acciones y recursos que legalmente corresponden.

Jefatura

Art. 54. — El defensor general de la Nación es el jefe máximo de la defensa oficial y responderá en el marco de sus competencias ante el Congreso de la Nación conforme lo establece los artículos 6º, segundo párrafo, 7º y 21 de la presente ley.

El defensor general de la Nación ejercerá la defensa oficial y las demás facultades que la ley le otorga por sí mismo o por medio de los órganos inferiores que establezcan las leyes.

CAPÍTULO II

*Del defensor general de la Nación**Atribuciones*

Art. 55. — Al defensor general de la Nación le corresponde:

- a) La representación de menores, pobres, ausentes e incapaces en todas las causas en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia, en que sea designado en el trámite de recursos extraordinarios, de queja por denegación de recurso extraordinario, y en el de apelación ordinaria;
- b) Ejercer la superintendencia sobre todos los defensores generales adjuntos, defensores oficiales generales, defensores oficiales en los fueros nacional y federal y sobre todos los tutores y curadores públicos; vigilar el cumplimiento de las funciones de los defensores de oficio, de los curadores de ausentes e incapaces y promover las acciones tendientes a definir su responsabilidad por incumplimiento de sus deberes;
- c) Designar con la participación del procurador general de la Nación a los defensores generales

adjuntos, defensores oficiales generales y defensores oficiales, de acuerdo al reglamento vigente;

- d) Avocarse, cuando lo estimare conveniente, el ejercicio de las funciones asignadas a los defensores oficiales generales y defensores oficiales.

CAPÍTULO III

De los defensores generales adjuntos

Atribuciones y deberes

Art. 56. — Los defensores generales adjuntos asisten al defensor general de la Nación, y cumplen las directivas que éste imparta de conformidad al inciso a) del artículo 55 de la presente ley.

Requisitos para la designación

Art. 57. — Para ser defensor general adjunto se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 41 de la presente ley.

CAPÍTULO IV

De los defensores oficiales generales

Atribuciones y deberes

Art. 58. — Los defensores oficiales generales serán los jefes de la Defensa Oficial en los distritos o departamentos que les fueren encomendados y los responsables de su buen funcionamiento ante el Defensor general de la Nación.

Corresponde a los defensores oficiales generales ejercer, ante las cámaras de apelaciones y tribunales locales, la defensa pública o continuar ante aquéllas la intervención que la defensa oficial hubiera tenido en instancias inferiores.

Asimismo podrán avocarse el ejercicio de las funciones asignadas a los defensores oficiales.

La Dirección del Registro de Incapaces, creada por el decreto 84.466/63 quedará a cargo del defensor oficial general titular a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.

Requisitos para la designación

Art. 59. — Para ser defensor oficial general se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 41 de la presente ley.

CAPÍTULO V

De los defensores oficiales

Atribuciones y deberes

Art. 60. — Corresponde a los defensores oficiales, en los fueros en que actúen:

- a) Intervenir en todo asunto judicial que afecte a la persona o bienes de los menores o incapaces o inhabilitados, a fin de entablar en su de-

fensa las acciones y recursos necesarios, ya sea en forma directa o juntamente con los representantes individuales. Con ese objeto, los tribunales judiciales, deberán acordar esa intervención a los defensores públicos correspondientes, toda vez que aquel interés se hallare involucrado;

- b) Desempeñar las funciones enunciadas en la presente ley y en las de aplicación del Código Civil, así como las indicadas en toda otra norma legal o reglamentaria;
- c) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, cuando hubieren tomado conocimiento de malos tratos o deficiencias en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores, o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren;
- d) Solicitar a las autoridades judiciales la aplicación de las medidas disciplinarias, correccionales o de seguridad que estimaren pertinentes respecto a menores que exteriorizaran reiteradas faltas de conducta o se encontraran expuestos a riesgos inminentes para su salud física o moral, cuando tales situaciones no pudieran ser controladas por los padres o personas que los tengan a su cuidado;
- e) Efectuar visitas periódicas a los establecimientos de internación, guarda o correccionales de menores e incapaces, debiendo mantener informados a la autoridad judicial y, por la vía jerárquica correspondiente, al defensor general de la Nación, sobre lo concerniente a su marcha y desenvolvimiento en relación con el cuidado o atención de las personas internadas;
- f) Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio del Patronato del Estado nacional, con el alcance que establece la ley 10.903, y desempeñar las funciones y cumplir los deberes que les incumben de acuerdo con la ley 22.914 sobre internación y externación de personas, efectuando las comunicaciones pertinentes al Registro de Incapaces;
- g) Emitir dictámenes en los asuntos en que fueren consultados por los tutores o curadores públicos;
- h) Ejercer la defensa y la representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza o justificaren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos;
- i) Ejercer la defensa de los imputados en las causas que tramiten ante la justicia criminal y correccional, siempre que fueren convocados al efecto;
- j) Asumir la defensa de las personas denunciadas como dementes o inhabilitados, cuando fueren convocados al efecto;
- k) En todos los casos en que ejerzan la defensa pública, tendrán el deber de entrevistar periódicamente a sus defendidos y de procurar hallarlos cuando estuvieren ausentes;
- l) Evacuar las consultas que le soliciten las personas carentes de recursos, asistirles en los trá-

mites judiciales pertinentes, y en su caso patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.

Requisitos para la designación

Art. 61. — Para ser defensor oficial se requieren los mismos requisitos que los enunciados en el artículo 48 de la presente ley.

TITULO COMPLEMENTARIO

Presupuesto vigente, reestructuración

Art. 62. — Autorízase al Poder Ejecutivo para abrir los créditos presupuestarios adicionales o hacer las reestructuraciones en el presupuesto vigente que sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

Estructura y planta básica

Art. 63. — La estructura orgánica, funcional y administrativa del ministerio público será elaborada por el procurador general de la Nación, con la intervención del defensor general de la Nación en lo que corresponda, quien la remitirá al Poder Ejecutivo para su análisis y aprobación por el Congreso de la Nación.

Sin perjuicio de las modificaciones que se adopten en el futuro, el Ministerio Público contará con la planta básica existente a la fecha de entrar en vigencia la presente ley.

Los funcionarios y empleados serán designados por el procurador general de la Nación, sin perjuicio de las facultades de defensor general de la Nación, de acuerdo con la presente ley y su reglamentación dentro de los límites presupuestarios.

Recursos y créditos presupuestarios

Art. 64. — Los recursos para atender todos los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley provendrán de los créditos que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público.

A los efectos operativos el Ministerio Público contará con un servicio administrativo-financiero propio.

Representación del Estado en juicio

Art. 65. — La representación del Estado en juicio será fijada por una ley especial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 28, primer párrafo. Hasta tanto, el Ministerio Público continuará con dicha representación, conforme las leyes vigentes a la fecha.

Cargos preexistentes y equivalencias

Art. 66. — Los cargos de los integrantes del Ministerio Público actualmente existente, subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley y continuarán siendo desempeñados por

quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia.

A tales fines se establecen las siguientes equivalencias:

- a) Los actuales procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tendrán en adelante la jerarquía de procuradores fiscales. Igual jerarquía tendrán los cargos de procuradores delegados y los defensores generales adjuntos, creados por esta ley;
- b) Los actuales fiscales y defensores ante las cámaras de apelaciones, fiscales y defensores ante los tribunales orales y ante los tribunales colegiados de casación, os secretarios de la Procuración General de la Nación, los asesores fiscales y defensores ante los tribunales orales de menores, los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y el procurador general del trabajo, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales generales o defensores oficiales generales;
- c) Los actuales fiscales adjuntos de los fiscales de cámara o de tribunales orales, el subprocurador general del trabajo y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales adjuntos de los fiscales generales;
- d) Los actuales fiscales y defensores ante los juzgados de primera instancia de cualquier fuero, los fiscales criminales de instrucción, los procuradores fiscales adjuntos móviles de la Procuración General de la Nación y los secretarios generales y secretarios letrados de la Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales y defensores oficiales;
- e) Los actuales prosecretarios letrados de la Procuración General de la Nación, los fiscales adjuntos ante la justicia de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal y el fiscal coadyuvante de la Justicia Nacional del Trabajo, tendrán en adelante la jerarquía de fiscales auxiliares de los fiscales.

Funcionarios y empleados. Transferencia.

Derechos adquiridos

Art. 67. — Los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público, quedan transferidos a su planta permanente.

Las remuneraciones de los funcionarios y empleados técnico-administrativos del Ministerio Público no podrán ser inferiores a las que perciban a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

También mantendrán su jerarquía y antigüedad sea que anteriormente se hubieren desempeñado en cargos del Ministerio Público o del Poder Judicial de la Nación o de ambos, alternativamente.

También conservarán su afiliación a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación mediante convenio a celebrarse entre la Procuración General y la Corte Su-

prema de Justicia de la Nación, con similar cobertura e igual porcentualidad en las cuotas.

Todo futuro traspaso de empleados y funcionarios técnico-administrativos desde el Ministerio Público al Poder Judicial de la Nación o a la inversa, se hará teniendo en cuenta los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo.

Art. 68. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Eduardo Bauzá. — Rodolfo C. Barra.

Texto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo de fecha 5-6-96

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º — Las fiscalías transformadas y creadas por los artículos 28 y 44 de la ley 24.121, se denominarán en lo sucesivo fiscalías ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y se identificarán con los números 1 a 63. Los números 50 a 63 corresponderán a las ex fiscalías ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal.

Art. 2º — Las fiscalías mencionadas en el artículo precedente, tendrán competencia indistinta ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal y ante los juzgados nacionales en lo correccional de la Capital Federal y actuarán conforme los turnos que establezca la reglamentación, que deberá dictar al respecto el procurador general de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Jorge A. Rodríguez. — Rodolfo C. Barra.

NOTA

Los fundamentos de los proyectos presentados por los señores senadores y los dos mensajes del Poder Ejecutivo no se publican, dejándose constancia que los mismos hallan impresos en los diarios de asuntos entrados según el siguiente detalle:

S.-520/95 DAE Nº 42/95; S.-668/95 DAE Nº 54/95; S.-1.350/95 DAE Nº 110/95; S.-1.306/95 DAE Nº 108/95; S.-1.910/95 DAE Nº 181/96; S.-623/96 DAE Nº 44/96; S.- 779/96 DAE Nº 52/96; P.E.-500/95 DAE Nº 94/95; P.E.-186/96 DAE Nº 68/96; asimismo los proyectos presentados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y el del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran a disposición de los señores senadores en los expedientes originales.

Disidencia parcial del señor senador Usandizaga al dictamen sobre ley orgánica del Ministerio Público (expedientes S.-520, S.-668, S.-1.350, S.-1.306, S.-1.910 de 1995 y S.-623, S.-779, S.-866 de 1996, P.E. 500/95 y; P.E. 186/96)

Señor presidente:

El Ministerio Público como órgano nuevo creado por el artículo 120 de la reformada Constitución Nacional nace con las características propias que determina expresamente dicha norma.

Es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.

Según Humberto Quiroga Lavié "dicho órgano configura un poder de control social fundamental en aras de lograr el equilibrio de los Poderes del Estado. "es un órgano extrapoder", "un representante de los derechos de la sociedad, verdadero control social externo".¹

Para el doctor Bidart Campos, no es un "auxiliar del Poder Judicial", es "en rigor, un órgano de fiscalización o vigilancia en el sentido político de estos términos... reviste una función controladora, desde fuera de los tres poderes clásicos, y queda definido con claridad suficiente que no depende del Poder Ejecutivo, con lo que "se corta de raíz toda posibilidad de que el Ejecutivo interfiera en las funciones del Ministerio Público, o, lo que es peor, que le imparta instrucciones a través del Procurador General de la Nación".²

Por su parte, el artículo 120 de la Constitución agrega que el órgano "está integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y por los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones".

De acuerdo con la norma constitucional hay un hiebalismo en el Ministerio Público, gozando ambos miembros de "inmunidades funcionales" iguales a las de los legisladores.

Hasta aquí lo normado por la Constitución, la que deja librado a la ley la reglamentación de importantes cuestiones, como la de designación y remoción de sus miembros.

En cumplimiento de ello, en el artículo 5º del dictamen que analizamos, se determina que el Procurador General y el Defensor General serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, no estableciéndose límite a la duración de su mandato. Ello lleva a interpretar que ambos funcionarios permanecerán en el cargo mientras dure su buena conducta o hasta que cumplan setenta y cinco años, según lo dispone el artículo 13 de este proyecto. Sólo podrán ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

Pero al completar el análisis de los artículos anteriores con la lectura de las disposiciones del artículo 69 del proyecto, observamos que por esta norma, los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vi-

¹ Humberto Quiroga Lavié: *Constitución de la Nación Argentina comentada*, Editorial Zavalla, 1996, página 691 y siguientes.

² Germán Bidart Campos: *Tratado elemental de derecho constitucional argentino*; tomo VI. *La reforma constitucional de 1994*, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1995, página 488.

gencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la misma norma.

Se crean así, por ley de la Nación dos categorías de funcionarios: aquellos que acceden al cargo en cumplimiento estricto del artículo 5º de la misma, y una categoría preexistente de los que no se adecuan a dicho precepto, ya que en la actualidad el Procurador General como el Defensor General no han accedido a su cargo con acuerdo de este Senado. Se les está otorgando una singular situación de privilegio, al brindárseles la inamovilidad por una ley que aprobará este Congreso sin la exigencia de mayorías especiales.

Es por ello que proponemos la sustitución del artículo 69 del dictamen por el siguiente:

Artículo 69: Los cargos actualmente existentes en el Ministerio Público excepto el del Procurador General de la Nación y el del Defensor General de la Nación, subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejercen al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el Procurador General y el Defensor General no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley.

Dentro de los treinta días de publicada la presente ley, se procederá a la designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación en los términos del artículo 5º.

Esta modificación se completa con la eliminación del inciso a) del artículo 71 y del inciso a) del artículo 72, corrigiendo la numeración de los restantes incisos de dichos artículos.

Como medida entonces de equidad y atento a que la institución ha de significar una nueva etapa en la consolidación de un régimen judicial eficiente y socialmente respetado, es que solicitamos que, tanto el Procurador General como el Defensor General, en su carácter de cabezas del órgano Ministerio Público, se designen en el plazo estipulado, dándose estricto cumplimiento a los requisitos del acuerdo.

Horacio D. Usandizaga.

Disidencia del señor senador López al dictamen presentado sobre el Ministerio Público.

FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL SENADOR NACIONAL ALCIDES H. LOPEZ CON EL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MINISTERIO PUBLICO

Expedientes: S-520, 668, 1.350, 1.306 y 1.910/96; S-623, 779 y 866/96; P.E-500/95 y 186/96; y P-190/95 y 12/96.

Señor presidente:

Me dirijo a usted, a fin de remitirle las disidencias parciales que mantengo con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el proyecto de

Ley Orgánica del Ministerio Público, y sus fundamentos, las que expongo a continuación explicitando cada una de las normas del mencionado proyecto que observo, y la redacción que propongo se adjunta en cada caso.

Artículo 5º: Se advierte una omisión, consistente en no prever la forma de designación de los miembros del Ministerio Público que se mencionan en el artículo 3º, inciso f) (fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación). Al mismo tiempo, en el último párrafo del artículo 7º se prevén las condiciones para presentarse al concurso necesario para ser designado en esos cargos.

Proponemos agregar al artículo 5º: "Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 3º, serán designados por el procurador general de la Nación, entre los candidatos que seleccione el tribunal examinador del concurso de antecedentes y oposición, y a propuesta del magistrado de quien dependan, en su caso".

No es necesario solicitar acuerdo del Senado para funcionarios cuya jerarquía es equivalente a la de secretario de cámara (Cfr.: artículo 12, inciso d). Igualmente, parece razonable que pueda elegirse entre todos aquellos que rindan satisfactoriamente el concurso de antecedentes y oposición y, asimismo, respetar la facultad de los magistrados de proponer el candidato para ser designado en funciones de estrecha colaboración con aquél, tradicionalmente reconocida en el Poder Judicial de la Nación hasta ahora y, como consecuencia, también reconocida en el ámbito del Ministerio Público.

Artículo 6º: El sistema de elaboración de la terna de entre otros cinco candidatos no parece conveniente, resulta complicado, y desnaturaliza el mismo mecanismo del concurso. En todo caso, deberá adoptarse una solución análoga a la propuesta en el proyecto original del senador Yoma, con algunas modificaciones en dos sentidos. Por un lado, que la terna se elabore entre todos los candidatos que resulten seleccionados por el tribunal examinador, toda vez que esa selección resultante del concurso garantiza suficientemente el cumplimiento del requisito de idoneidad para desempeñar cargos públicos (artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional). Por otro, en cuanto a la integración del tribunal examinador, tampoco parece necesario ni conveniente que en todos los casos se integre obligadamente con fiscales o defensores generales, en especial para cubrir cargos de menor jerarquía. Otros magistrados se encuentran perfectamente habilitados para integrar el tribunal, sin necesidad de recargar las tareas propias de los fiscales o defensores generales con la de integrar estos tribunales. Por otra parte, el número de integrantes del tribunal examinador deberá ser impar para evitar que eventuales discrepancias entre sus miembros impidan llevar a cabo la selección (empate).

Se propone la siguiente redacción al artículo sexto:

Artículo 6º: "La elaboración de las ternas se hará entre los candidatos que seleccione, previo concurso de oposición y antecedentes, un tribunal convocado por el procurador general o el defensor general de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con tres magistrados del Ministerio Público con una antigüedad en el superior a diez años, con jerarquía superior a la del cargo sometido a concurso. Cuando el concurso se realice para cubrir alguno de los cargos indicados en los

artículos 3º, incisos b) y c), y 4º, incisos b) y c), el tribunal examinador deberá integrarse con dos magistrados de la jerarquía prevista en esas normas, y el procurador general o el defensor general de la Nación, quienes lo presidirán, en su caso."

Artículo 7º: La redacción que se propone en el proyecto de dictamen es innecesariamente complicada. Asimismo, no nos parece correcta la redacción utilizada en el dictamen en cuanto establece requisitos "para presentarse a concurso", toda vez que tales requisitos son exigibles para acceder al cargo y, naturalmente, deberán ser cumplidos liminarmente por quienes se postulen a él.

En consecuencia, debería mantenerse la redacción original del proyecto del senador Yoma que tanto es más precisa como sencilla en cuanto remite a las condiciones personales exigidas para los cargos equivalentes del Poder Judicial.

Proponemos que el artículo 7º quede redactado de la siguiente manera:

"Para ser procurador general o defensor general de la Nación, deberá reunirse las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el desempeño de los restantes cargos mencionado; en los artículos 3º y 4º, se aplicarán los requisitos existentes para ser juez de Cámara, juez de primera instancia o secretario de Cámara, según las equivalencias que surgen del artículo 12".

Artículo 12: En el inciso d) se omite establecer la equiparación de remuneración de los fiscales auxiliares de la Procuración General de la Nación, mencionados en el inciso f) del artículo 3º juntamente con los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia.

Para subsanar la omisión y mantener la misma línea de redacción proponemos que el inciso d) del artículo 12 quede redactado de la siguiente manera:

"d) Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 3º percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de Cámara".

Artículo 15: Si bien compartimos establecer como requisito legal la conformidad del interesado y el respeto de su jerarquía para posibilitar su traslado a otra jurisdicción territorial, el mismo recaudo debe imponerse para el traslado a un organismo distinto a aquél para el que fue designado aún dentro de la misma jurisdicción territorial. De tal manera se evita que, por la vía de trasladar un fiscal de una fiscalía a otra (lo cual no implicaría cambio de funciones ni necesariamente de jurisdicción territorial) puede obtenerse su apartamiento de una causa determinada, o su asignación deliberada a ella.

Asimismo, compartimos la posibilidad de conformar equipos de fiscales para atender asuntos de particular complejidad, o aún para auxiliar a un fiscal que debe dedicar la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a atender una causa compleja o de mayor repercusión social que otras. En este sentido, la posibilidad de designar fiscales coadyuvantes fue introducida en el antiguo Código Procesal Penal (artículo 116) como resultado de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional durante la época del gobierno radical. En tal sentido convenimos con el dictamen de la comisión que tras varias

modificaciones aceptó el criterio propuesto por la Comisión del Ministerio Público de la Asociación de Magistrados en cuanto a que los equipos que se formen estarán sujetos a las directivas del titular.

En consecuencia, y en lo que atañe a esta norma proponemos que el artículo 15 quede redactado de la siguiente manera:

"Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales. La misma conformidad se requerirá para el traslado de un magistrado o funcionario del Ministerio Público a un organismo distinto a aquél para el que fue designado, aún dentro de la misma jurisdicción territorial. Sólo podrán ser destinados temporalmente a funciones u organismos distintos de los adjudicados en su designación, cuando se verifique alguno de los supuestos previstos en los artículos 32, inciso g) y 50, inciso d)".

Artículo 16: Formulamos dos observaciones a este artículo.

La primera de ellas, al 4º párrafo que atribuye facultad disciplinaria a los fiscales y defensores generales respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan. En el 1er. párrafo de la norma se reconoce con acierto la facultad disciplinaria al procurador general y al defensor general de la Nación. Decimos con acierto, porque a dichos magistrados —en un todo de acuerdo con la doctrina y la práctica tradicional, con la economía del proyecto y, a nuestro juicio, con el artículo 120 de la Constitución Nacional— cabe reconocerles la facultad de superintendencia sobre ambas vertientes (Fiscalía y Defensoría) del Ministerio Público, facultad que se integra con la potestad disciplinaria. En tal inteligencia, resulta inconveniente que el legislador desmembre esa potestad reconociéndosela también a magistrados de inferior jerarquía, con lo cual se cercenan atribuciones que deben reconocerse como propias y exclusivas de las cabezas del Ministerio Público. Además el párrafo que cuestionamos no se compadece con el primero de la misma norma que ya hemos comentado y en el que se adjudica la potestad disciplinaria sólo al procurador general y al defensor general de la Nación ni con las prescripciones de los artículos 32, inciso m), y 50, inciso 11), y contradice la organización tradicional del Poder Judicial del que el Ministerio Público formó parte hasta la sanción del nuevo texto constitucional. Ello es así, porque en el ámbito del Poder Judicial las facultades de superintendencia corresponden exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia (artículo 113 de la Constitución Nacional) que, por vía reglamentaria, en algunos casos —concretamente la potestad disciplinaria— la ha delegado en tribunales inferiores (por razones de conveniencia que sólo a la Corte incumbe apreciar), manteniendo al mismo tiempo su facultad de avocación, que puede ejercer de oficio cuando lo estime necesario o a instancias del interesado y como revisor de las decisiones de los tribunales que actúan por delegación.

Esto así, nos parece conveniente mantener *in totum* la superintendencia en el procurador general y defensor general de la Nación, autorizándolos a delegar algunos aspectos de ella en los magistrados de inferior jerarquía, y estableciendo que el reglamento que se

dicte deberá contemplar los mecanismos adecuados para el agotamiento de la vía administrativa.

La segunda observación está referida a la última frase del artículo. Por supuesto, es correcto dejar establecido que los actos que impongan sanciones disciplinarias pueden ser pasibles —agotada la vía administrativa— de impugnación en sede judicial. Empero, estimamos conveniente dejar en claro cuál es la vía de impugnación en sede judicial, para facilitar la defensa y el acceso a la justicia a los potenciales interesados evitando las dudas y discusiones que pueden plantearse frente al caso concreto, con el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional y la dilación de los procesos que ello trae aparejado.

Consecuentemente, proponemos eliminar el 4º párrafo que dice:

“Tendrán la misma atribución los fiscales y defensores generales respecto de los magistrados de rango inferior que de ellos dependan”.

Asimismo proponemos reemplazar el último párrafo por el siguiente:

“El procurador general y el defensor general de la Nación podrán delegar la atribución conferida en este artículo en magistrados de menor jerarquía con relación a los de rango inferior, funcionarios y empleados que de ellos dependan. El reglamento que se dicte deberá garantizar a los afectados la revisión de las sanciones disciplinarias por parte del procurador general o el defensor general de la Nación, en su caso. Las decisiones de éstos que apliquen o confirmen sanciones disciplinarias podrán ser recurridas por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se interpondrá fundadamente ante este tribunal, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles judiciales contados a partir de la notificación de la sanción, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 40 y 41 de la ley 22.140”.

Artículo 19: En cuanto a la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de los miembros del Ministerio Público, participamos en general con la redacción propuesta en el dictamen, que recoge las observaciones formuladas por la Comisión de Ministerio Público de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, con dos observaciones. La primera de ella, de carácter formal, al 9º párrafo referido a quienes actúan como fiscales ante el Tribunal de Enjuiciamiento. En tal sentido debe corregirse la mención “defensor oficial”, por “defensor público ante tribunales colegiados”, para respetar la denominación del cargo asignada en el artículo 4º, inciso c) y en el cuarto párrafo de este mismo artículo.

La segunda observación, se refiere a un aspecto de fondo. No consideramos conveniente que el fiscal ante el tribunal sea designado por el procurador general o el defensor general de la Nación. Ello así, porque si el mencionado tribunal se convoca en caso de interponerse una queja ante una denuncia desestimada por alguno de aquéllos, no contribuye a asegurar la transparencia y la imparcialidad del procedimiento ante el tribunal que actúe como fiscal un magistrado designado por quien, en principio, había desestimado la denuncia. Por tal razón, la designación del fiscal ante el tribunal deberá hacerse por sorteo entre los magistrados en condiciones de integrarlo.

En consecuencia, proponemos que el 9º párrafo del artículo 19 quede redactado de la siguiente manera:

“Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior a fiscal general o defensor público ante tribunales colegiados, los que serán designados mediante un sorteo público realizado por el procurador general o el defensor general de la Nación, según la calidad funcional del imputado”.

Artículo 21: Formulamos una observación al inciso c) de este artículo. Es necesario dejar convenientemente aclaradas las pautas a las que deberán someterse el procurador general y el defensor general de la Nación en la celebración de “los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público”. En tal sentido, entendemos que dichos magistrados deberán sujetar su actuación en este terreno a las mismas normas que rigen las contrataciones en cualquier otro organismo del Estado. Tal circunstancia contribuirá a la transparencia en el manejo del presupuesto que se les asigne, y garantizará el correcto manejo de los fondos posibilitando la adecuada imputación de responsabilidades en caso contrario, circunstancias todas que —además— constituyen un reclamo generalizado de la sociedad como presupuesto incluyente en la lucha contra la corrupción. En especial, porque la cuestión no es económicamente poco significativa si se tiene en cuenta que en proyecto de presupuesto para 1997 se asignan ciento treinta millones de pesos al Ministerio Público. Al mismo tiempo, se pondrá coto a la discrecional disposición de fondos que hasta ahora viene llevando a cabo el procurador general de la Nación que, por otra parte, ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito por fiscales de primera instancia, circunstancia ésta que, sin abrir juicio sobre el acierto y el destino de la denuncia, abona la postura en el sentido de dejar perfectamente aclaradas las reglas a las cuales deberán someterse los magistrados titulares del Ministerio Público. Es cierto que en el dictamen de la comisión se ha incorporado al proyecto original de este artículo el inciso f) y que también se ha previsto una norma relativa a ejecución presupuestaria (artículo 23), pero igualmente estimamos conveniente formular un agregado al inciso c) para evitar cualquier interpretación que pueda distorsionar la cuestión en el futuro.

Por ello, proponemos que el inciso c) quede redactado de la siguiente manera:

“Celebrar los contratos que se requieran para el funcionamiento del Ministerio Público, de conformidad con lo prescrito en las leyes que rigen las contrataciones del Estado”.

Artículo 25: Participamos de la redacción que se propone en este dictamen, que también ha recogido aquí las observaciones más relevantes de la Comisión de Ministerio Público de la Asociación de Magistrados. Solamente, por razones meramente formales proponemos agregar como inciso 1):

“En general ejercer todas las facultades y desempeñar todas las funciones que se les atribuyan en las leyes”.

A continuación del artículo 27:

No compartimos la eliminación de los artículos 28 y 29 del proyecto original del senador Yoma. Entende-

mos que tanto el carácter de los dictámenes como la sujeción del Ministerio Público al principio de legalidad —con la aclaración original relativa a la prosecución de la acción pública— no pueden omitirse en la Ley Orgánica del Ministerio Público. En especial, porque aunque se diga que todo ello está implícito, no puede dejar de emitirse una directiva expresa y concreta del Congreso de la Nación.

En consecuencia, proponemos agregar como artículo 28:

"Carácter de los dictámenes. Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el Ministerio Público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con la limitación prevista en el artículo 461 del Código Procesal Penal de la Nación y las limitaciones que otras leyes procesales prevén".

Asimismo, proponemos agregar como artículo 29:

"Principio de legalidad. Cuando se trate de una acción pública, el Ministerio Público actuará de oficio. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley".

En consecuencia, deberá corregirse la numeración de los artículos siguientes, sin perjuicio de que en este trabajo, para no dificultar la comprensión, continuaremos refiriéndonos al articulado del proyecto de dictamen en tratamiento.

Artículo 36: Proponemos la eliminación del inciso i), en concordancia con la modificación propuesta al artículo 16.

Artículo 38: Proponemos agregar en el segundo párrafo la intervención en los procesos de *habeas data*, y eliminar la facultad disciplinaria, nuevamente de acuerdo con lo sugerido respecto del artículo 16 en torno a la actuación por delegación.

En consecuencia, el 2º párrafo del artículo 38 debe quedar redactado de la siguiente manera:

"Deberán intervenir en los procesos de amparo, de habeas corpus y habeas data y en todas las cuestiones de competencia."

Artículo 39: Debe mantenerse el original inciso e) del proyecto del senador Yoma, toda vez que es correcta que los fiscales deban recurrir cualquier resolución o sentencia que no acordare íntegramente su prestación. Esta es una regla propia de todos aquellos que actúan en nombre de otros, y debe aplicarse a quienes desempeñan sus funciones en defensa del interés público y ejercitando una acción pública.

Consecuentemente, proponemos agregar como inciso e):

"Recurrir cualquier resolución o sentencia que no acordare íntegramente lo que hubieren solicitado en sus dictámenes."

Artículo 53: De acuerdo con lo propuesto en el artículo 16, solicitamos la eliminación del inciso n).

Artículo 98: Propiciamos la eliminación de dicha norma, porque entendemos que es completamente ajena a la organización y funciones del Ministerio Público a que

se refiere esta ley. En efecto, el propuesto artículo 68 se refiere a la forma en que ejercerán sus funciones los representantes judiciales del Estado, cuestión que en todo caso deberá considerarse, debatirse y legislarse en el cuerpo legal que reglamente la representación judicial del Estado, pero no introducirse en la Ley Orgánica del Ministerio Público a la que es absolutamente extraña. En especial, si se tiene en cuenta que —acertadamente— de conformidad con lo normado en el artículo 27 del proyecto en tratamiento se ha excluido de las funciones del Ministerio Público la representación judicial del Estado y del Fisco.

Las restantes disposiciones de este título III no ofrecen ese reparo, toda vez que reglamentan cuestiones atinentes, precisamente, a la cesación de los fiscales en la representación del Estado, y a la asunción de ella por los integrantes del cuerpo de abogados dependientes de la Procuración del Tesoro.

Artículo 69: Planteamos un severo reparo de fondo al texto proyectado de este artículo.

En primer lugar, es necesario dejar en claro que compartimos la propuesta en cuanto viene a confirmar en sus cargos a las personas que actualmente los ejercen en el Ministerio Público porque, independientemente de la opinión personal que pueda merecernos la actuación de algunos fiscales, la apertura de concursos, elaboración de temas, acuerdo de este Senado y designación por el Poder Ejecutivo, insumiría un lapso dilatado durante el cual la situación de inestabilidad e incertidumbre que de ello se generaría, terminaría —seguramente— por ocasionar daño durante bastante tiempo al normal desarrollo de las funciones y tareas del Ministerio Público en particular, y la administración de justicia en general.

Empero, creemos que de tal disposición deben ser excluidos el procurador general y el defensor general de la Nación. Ello es así porque la evidente jerarquía y relevancia de sus funciones torna aconsejable que, quienes van a dirigir un Ministerio Público con jerarquía constitucional (artículo 120 de la Constitución Nacional según la reforma de 1994) y por vez primera en la historia jurídica argentina debidamente organizado, sean designados con la intervención de los poderes políticos del Estado, como lo son el Poder Ejecutivo nacional y este Senado, tal como se prevé en este mismo proyecto. No debe olvidarse, además, que los únicos cargos creados y mencionados en la Constitución —es decir los únicos a los que cabe reconocer origen y jerarquía constitucional— son, precisamente, los del procurador general y defensor general de la Nación (artículo 120, 2º párrafo, de la Constitución Nacional), siendo todos los demás cargos del Ministerio Público de creación legislativa, circunstancia que abona su exclusión de una confirmación por vía legal.

Por otra parte, de acuerdo a este mismo proyecto esos dos magistrados son quienes revisten la mayor amplitud de facultades como cabezas de las dos vertientes del Ministerio Público (fiscal de la defensa), tanto en cuanto a la dirección del organismo, superintendencia (organización, convocatoria de concursos, miembros necesarios en los concursos de los más altos cargos, convocatoria del tribunal de enjuiciamiento, ma-

nejo de un abultado presupuesto, designaciones de personal, etcétera, lo cual también amerita que en este momento histórico de la vida jurídica de nuestro país —como lo es la organización del Ministerio Público tras más de 120 años de existencia en la Nación organizada— quienes vayan a desempeñar su más alto cargo con tal amplitud de facultades reciban el acuerdo del Senado de la Nación, como deberán hacerlo quienes los sucedan.

Cabe destacar también que el mecanismo de designación del procurador general y el defensor general de la Nación previsto en este mismo proyecto son de ejecución más rápida que los contemplados para el resto de los cargos. Por tal razón no podrá argumentarse que el Ministerio Público quedará descabezado a partir de la entrada en vigencia de este proyecto. Por un lado, porque se encuentran previstos también las formas transitorias de subrogación. Y por otro, porque dependerá de la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional la mayor o menor celeridad que se imprima al trámite de pedido de acuerdo a este Senado.

Por lo tanto proponemos que el artículo 69 quede redactado de la siguiente manera:

“Con excepción del procurador general y del defensor general de la Nación los demás cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

Mientras el procurador general y el defensor general no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley”.

Artículo 71: Como primera observación de tipo formal puntualizamos que en el 1º párrafo debe agregarse la palabra “fiscal” a la expresión “Ministerio Público”. En segundo lugar, creemos que del inciso b) debe eliminarse a los secretarios de la Procuración General de la Nación. Ello por dos razones. Por un lado ya existen en la actualidad cuatro procuradores fiscales de la Corte Suprema, número que parece ser demás suficiente en atención a las funciones que les toca desempeñar de acuerdo con esta ley. Por el otro, la correcta equiparación de aquellos secretarios es con los fiscales generales previstos en el inciso c) del artículo 3º. Las funciones que tradicionalmente han correspondido a los secretarios de la procuración, más allá de su equiparación salarial con los procuradores fiscales de la Corte, son de jerarquía menor a la de éstos, por lo que no se advierte la razón para atribuirle ahora mayores funciones —que incluyen hasta el reemplazo del procurador general de la Nación en su caso— en especial cuando, como quedó dicho, el número actual de procuradores fiscales es más que suficiente. Tampoco se advierte cuál es el particular motivo que puede llevar a elevar la jerarquía de los secretarios de la procuración y no la de los secretarios letrados, utilizando un diferente criterio en cada caso.

Por lo tanto proponemos eliminar del inciso b) la expresión “y los secretarios de la Procuración General

de la Nación”, y añadir en el inciso d), a continuación de “investigaciones administrativas” “y los secretarios de la Procuración General de la Nación”.

Alcides H. López.

Sr. Presidente. — Se va a votar en particular.

—Se enuncia el artículo 1º.

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa de la Unión Cívica Radical.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: propongo la eliminación del cuarto párrafo del artículo 1º, que comienza diciendo lo siguiente: “Posee una organización jerárquica, la cual exige que cada miembro del Ministerio Público controle el desempeño de los inferiores...”.

Considero que, de acuerdo con la doctrina, no puede haber una organización jerárquica del Ministerio Público, porque la orden jerárquica determina en forma obligatoria la conducta del subordinado; implica el deber de obediencia y, en consecuencia, el subordinado no puede desobedecer una orden porque violaría la obligación que tiene de servir.

Por ello es que el párrafo tercero del artículo 1º, con el criterio doctrinario exacto, dice: “El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones...”, y continúa.

Ese párrafo indica que los miembros del ministerio público deben tener una libertad que no tiene que estar subordinada. Ellos deben decidir por sí mismos, bajo su propia responsabilidad, lo que tienen que hacer; porque, de otra manera, si se establece la organización jerárquica, evidentemente esa autonomía desaparece.

Debo resaltar que organización jerárquica existe únicamente en el ámbito militar. En consecuencia, no se pueden aplicar principios de la justicia militar a esta organización, que no tiene ningún tinte de carácter militar.

Para terminar mi argumentación, quiero hacer una cita doctrinaria, más concretamente del tratado de Mayer *Derecho administrativo*, tomo IV, páginas 65/72. Dice lo siguiente: Los funcionarios de la administración de justicia están sometidos a un poder que les imparte órdenes, pero en su actividad jurisdiccional únicamente. En cambio, deben resolver por sí mismos sobre lo que constituye su deber. La orden que un superior quiera impartir respecto

a esta actividad se considera una intromisión inadmisibles.

Por lo tanto, propongo que se elimine el párrafo cuarto porque no puede existir el orden jerárquico en la organización del ministerio público.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Yoma. — Señor presidente: por las razones expuestas por el señor senador Maglietti, rechazamos la propuesta. *(Risas.)*

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 2º y 3º.

— Se enuncia el artículo 4º.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Rioja del Partido Justicialista.

Sr. Yoma. — Señor presidente: la comisión va a proponer dos modificaciones al dictamen.

En el inciso *b)* del artículo 4º, que se suprime la última parte, que dice "... y de la Defensoría General de la Nación", porque ya está mencionada en el inciso *c)*.

Y que se incluya el inciso *"f)*, Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación."

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con las modificaciones propuestas por el señor miembro informante.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 5º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: solicito que se incluyan en el artículo 5º a los magistrados enunciados en el inciso *f)* del artículo 3º, que han quedado excluidos. Esta propuesta obedece a que los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia y de la Procuración General de la Nación reemplazan a los fiscales de primera instancia, tienen firma y, por lo tanto, una responsabilidad que exige para su designación el mismo procedimiento enumerado en incisos anteriores. Específicamente — para no hacer perder tiempo —, quiero decir que en el artículo 41 están enunciadas las funciones que cumplen.

O sea, proponemos que para la designación de estos fiscales se siga el mismo procedimiento que para los restantes oficiales.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — Señor presidente: tengo una propuesta similar pero a la vez diferente a la de mi compañero de bancada. Concretamente, quiero plantear una modificación al artículo 5º.

No es necesario solicitar el acuerdo del Senado para funcionarios cuya jerarquía es equivalente a la de secretario de Cámara. Igualmente parece razonable que pueda elegirse entre todos aquellos que rindan satisfactoriamente el concurso de antecedentes y oposición y, asimismo, respetar la voluntad de los magistrados de proponer el candidato para ser designado en funciones de estrecha colaboración con aquellos, tradicionalmente reconocida en el Poder Judicial.

Por ello propongo como modificación concreta al artículo 5º agregar un párrafo que diga lo siguiente: "Los funcionarios mencionados en el inciso *f)* del artículo 3º serán designados por el procurador general de la Nación entre los candidatos que seleccione el tribunal examinador del concurso de antecedentes y oposición y a propuesta del magistrado de quien dependan en su caso."

Sr. Presidente. — Señor senador Yoma: hasta ahora tenemos dos propuestas formuladas sobre el mismo artículo que son contradictorias entre sí. Antes de darle la palabra para que se refiera a estas modificaciones, se la voy a dar a otro senador por la Unión Cívica Radical, así usted después contesta todo junto.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa de la bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: quiero proponer que en la primera frase del artículo 5º, entre los funcionarios que requieren el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, se agregue al fiscal nacional de investigaciones administrativas.

Muy brevemente diré que el fiscal nacional de investigaciones administrativas ocupa un cargo relevante y muy importante en la lucha contra la corrupción, que evidentemente ha quedado relegada.

Para demostrar cómo el doctor Pinzón, que desde 1991 está al frente de esa fiscalía, no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones y prácticamente no ha hecho tarea o trabajo alguno, voy a leer parte de un artículo del diario

"La Nación" del 13 de octubre de 1996 que dice lo siguiente...

Sr. Menem. — Eso no tiene nada que ver, señor presidente.

Sr. Maglietti. — No empuja investigaciones ni hace nada. Se presentó como parte en casos muy publicitados...

Sr. Presidente. — Señor senador por Formosa: en oportunidad de la discusión en general usted expuso con gran erudición respecto de este tema y está muy clara su posición.

En este momento debe discutirse la inclusión de propuestas de modificación. A efectos de que esto no se convierta en un ida y vuelta le solicito que formule la propuesta concreta.

Sr. Maglietti. — Siguiendo su indicación, señor presidente, sencillamente voy a proponer que a continuación de "defensor general de la Nación" se agregue "y el fiscal nacional de investigaciones administrativas".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor miembro informante para contestar las tres propuestas.

Sr. Yoma. — Señor presidente: el tema de la Fiscalía Nacional está contemplado en otro artículo del proyecto, con lo cual está evacuada la inquietud del señor senador por Formosa.

Receptamos la disidencia del señor senador López, que es atinada. En efecto, en el dictamen se incurrió en un olvido respecto de los defensores, procuradores y fiscales auxiliares.

Como último párrafo del artículo 5º proponemos el siguiente texto: "Los magistrados [no los funcionarios, como dice el senador López, sino magistrados ya que la estructura legal actual los equipara con los magistrados, además así se los menciona en los artículos 3º y 4º] mencionados en los respectivos incisos f) de los artículos 3º y 4º, serán designados por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, en su caso, de entre los candidatos que seleccione el tribunal examinador del concurso de antecedentes y oposición, y a propuesta del magistrado de quien dependan". Dado el rango dentro de la estructura jerárquica nos pareció excesivo someterlo al acuerdo senatorial, pero sí adecuado establecer para estos magistrados el mecanismo del concurso.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: simplemente quiero dejar sentado que las disposiciones que contiene este proyecto con relación a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Adminis-

trativas no encuadran dentro de lo que yo he propuesto, ya que en las otras disposiciones se los coloca en el mismo rango que los fiscales. En efecto, yo los ubico en el mismo rango que el procurador general en lo que se refiere a la aprobación por parte del Senado.

La respuesta que dio el senador Yoma implica una negación y no una aceptación a mi propuesta.

Sr. Presidente. — Está muy claro que el señor senador por La Rioja *junior* ha propuesto sostener un criterio según el cual el fiscal nacional de investigaciones administrativas está considerado en el régimen de simple mayoría.

Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º, dictamen de comisión, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 6º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — Señor presidente: el sistema de elaboración de la terna de entre cinco candidatos no parece conveniente, resulta complicado y desnaturaliza los mecanismos del concurso. En todo caso, creemos que es necesario volver sobre el proyecto original del senador Yoma.

Por otra parte, el número de integrantes del tribunal examinador (un número par, cuatro) tampoco es conveniente. Nos parece que, en caso de que haya discrepancias entre ellos o que haya empate, puede haber problemas para efectuar la designación.

Por esas razones, nosotros proponemos el siguiente texto en reemplazo del artículo 6º: "La elaboración de las ternas se hará entre los candidatos que seleccione, previo concurso de oposición y antecedentes, un tribunal convocado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según el caso. El tribunal se integrará con tres magistrados del ministerio público con una antigüedad en él superior a diez años, con jerarquía superior a la del cargo sometido a concurso. Cuando el concurso se realice para cubrir alguno de los cargos indicados en los artículos 3º, incisos b) y c), y 4º, incisos b) y c), el tribunal examinador deberá integrarse con dos magistrados de la jerarquía prevista en esas normas, y el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, quienes lo presidirán, en su caso".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa de la Unión Cívica Radical.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: simplemente quiero decir que, con respecto al artículo 6º, se quiere hacer una selección de la selección. Primero se eligen cinco miembros, de los cuales, en definitiva, son tres los candidatos que se elevan al Poder Ejecutivo. Esta es una selección muy curiosa y demasiado minuciosa, que se presta a interpretaciones diversas, incluso con cierto tinte político.

La terna debe ser directamente elegida, como lo propone el senador López. Por lo tanto, adhiero a su propuesta e interpreto que, en la forma en que se legisló el artículo 6º, realmente se le dan atribuciones al procurador general que no se condicen con el contexto del proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión, miembro informante.

Sr. Yoma. — Señor presidente: creo que es atinada la observación del senador López, que vuelve al proyecto originario de la presidencia de la comisión. Ahora bien, contemplaríamos ese espíritu, pero con una redacción distinta.

En su primera parte, el artículo 6º se modifica de la siguiente manera: "La elaboración de la terna se hará mediante el correspondiente concurso público de oposición y antecedentes, el cual será rendido ante un tribunal convocado..." y luego continúa la redacción del artículo igual. Más adelante, donde se refiere al inciso b) de los artículos 3º y 4º, debe decir "inciso c)".

Sr. Presidente. — El inciso b) de los artículos 3º y 4º.

Sr. Yoma. — Correcto. En su lugar, debe decir: "inciso c) de los artículos 3º y 4º".

También quiero destacar que se recibió una observación de la senadora Fernández Meijide, en el sentido de darle carácter público a los concursos de oposición y antecedentes, observación que también es receptada en esta modificación propuesta.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Mi intervención es por una palabra, nada más. Donde dice "... el cual será rendido..." en la modificación propuesta, tendría que decir "sustanciado". Creo que es más precisa la palabra. Porque se rinde, cuando es de oposición. El de antecedentes se sustancia.

Sr. Presidente. — ¿Está de acuerdo, señor miembro informante?

Sr. Yoma. — Sí.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º, con las modificaciones propuestas y receptando también la idea y la propuesta de modificación del léxico del señor senador por La Rioja, Eduardo Menem.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 7º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — Nos parece demasiado complicado el sistema de selección elaborado en el artículo 7º y, en todo caso, volveríamos al dictamen original de la comisión, pero modificándolo de la siguiente manera. Proponemos que el artículo 7º quede redactado de la siguiente forma: "Para ser procurador general de la Nación o defensor general de la Nación, deberá reunirse las mismas condiciones que para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para el desempeño de los restantes cargos mencionados en los artículos 3º y 4º, se aplicarán los requisitos existentes para ser juez de Cámara, juez de primera instancia o secretario de Cámara según las equivalencias que surgen del artículo 12".

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: considero que deben establecerse los requisitos para desempeñar los cargos de tutor y de curador público, funcionarios que no ostentan el rango de magistrado conforme el artículo 4º, último párrafo, pero que integran el Ministerio Público de la Defensa, al menos para el ejercicio de funciones transitorias que establecen los artículos 57 y 58 del dictamen.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Nosotros mantenemos la actual redacción del artículo 7º.

En todo caso, la propuesta del señor senador Aguirre Lanari la podríamos contemplar cuando veamos el texto del artículo que figura más adelante. Hay un artículo específico respecto de los curadores.

Sr. Presidente. — Se va a votar el texto del artículo 7º en su redacción original.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 8º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: propondría una corrección respecto de ante quién presta juramento el procurador general, siguiendo un poco el criterio expresado por el señor senador Menem en el sentido de que dado que esta institución pertenece al Poder Judicial, se debiera prestar juramento ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En caso de no ser aceptada por el presidente de la comisión esta modificación, propongo la alternativa de adecuar el juramento al texto mismo de la Constitución, por cuanto el proyecto habla de que “prestarán juramento ante el presidente de la Nación en su calidad de jefe supremo de la Nación”.

En el artículo 87 de la Constitución se suprime esta denominación y se habla solamente de presidente de la Nación

Esta es la modificación que creo que está más de acuerdo con el espíritu de la institución, conforme lo expuesto con claridad por el señor senador Menem. O en el caso alternativo cambiar esto de “jefe supremo”, que no es muy democrático.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Es para adherir a lo expresado por el señor senador Meneghini.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Mantenemos la redacción original.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Es para adherir a la posición del señor senador Meneghini.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 8º en su redacción original.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 9º y 10.

—Se enuncia el artículo 11.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: es para solicitar la modificación del punto final del artículo 11, que dice: “La designación constituye una carga pública para el abogado seleccionado y el ejercicio de la función no dará lugar a retribución alguna”.

Considero que esta cláusula, señor presidente, viola el artículo 14 bis de la Constitución

Nacional, que establece la igual remuneración por igual tarea. En consecuencia, propongo, en lugar de esa redacción, la siguiente: “El ejercicio de la función dará lugar a la misma retribución que percibe el funcionario subrogado”.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Mantenemos la redacción.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 11 en su redacción original.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 12.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical.

Sr. López. — En el inciso d) de este artículo se omite establecer la equiparación de remuneración de los fiscales auxiliares de la Procuración General de la Nación, mencionados en el inciso f) del artículo 3º, juntamente con los fiscales auxiliares de las fiscalías de primera instancia. Para subsanarlo, propongo que el inciso d) del artículo 12 quede redactado de la siguiente manera: “Los funcionarios mencionados en el inciso f) del artículo 3º percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de Cámara”.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Yoma. — Vamos a recoger la observación del senador López, pero con una redacción distinta. El inciso d) quedaría redactado de la siguiente manera: “Los fiscales auxiliares de las fiscalías ante los juzgados de primera instancia y de la Procuración General de la Nación, y los defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación percibirán una retribución equivalente a la de un secretario de cámara”.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 con la modificación propuesta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 13.

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa de la Unión Cívica Radical.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: propongo que la edad sea modificada. En lugar de “setenta y cinco” que se ponga “sesenta y cinco”, porque es la edad que corresponde de acuerdo con la ley de jubilaciones. Si el funcionario se encuentra en perfectas condiciones de seguir ejerciendo sus funciones, interpreto que corresponde

aplicar las disposiciones siguientes en cuanto debe volver a ser ratificado. De esa manera vamos a evitar el riesgo de tener funcionarios que por la edad no estén en condiciones de desempeñarse como corresponde.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: en este artículo y en otros tengo algunas discrepancias que hacen un poco al fondo del problema, y como el tema ya ha sido analizado en la comisión y a los efectos de no entorpecer el debate, voy a solicitar la inserción de las disidencias parciales que tengo. Fundamentalmente, creo que la estabilidad propuesta conspira contra la posibilidad de realizar cambios de políticas criminales por parte de los distintos gobiernos en el largo período en el cual puede desempeñar sus funciones el procurador general. Me hago cargo de lo que esto significa en cuanto a la estabilidad y dentro de la función de órgano extrapoder que estamos legislando. Pero creo que establecer un sistema inmodificable de política criminal que solamente dependa de la posibilidad del mal cumplimiento de una función o de la comisión de un delito para promover las causas de remoción, sería un exceso en cuanto a lo que considero que es la independencia de este instituto que hoy estamos creando.

Por lo tanto, yo había propuesto, y lo reitero, la limitación de la duración de los mandatos del procurador general y del defensor general a cinco años. Sé que esto daría lugar a un debate que no coincide con el espíritu de la mayoría; por lo tanto, pido la correspondiente inserción de los fundamentos de esto que sostengo.

Sr. Presidente. — Bien, cuando finalicemos con la votación este proyecto, voy a hacer votar su pedido de inserción y los otros que se soliciten.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos del bloque justicialista.

Sr. Alasino. — En el afán de querer equiparar a los fiscales con los magistrados, se ha adoptado una norma similar a la que la Constitución prevé para los jueces de la Corte. Sin embargo, se adopta para todo. En la Constitución, creo, es sólo para los jueces de la Corte. Entonces, habría que establecer una redacción en donde se diga que para el procurador general y para el defensor general sí es cierto que duran mientras perdure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años. Y partir de ahí el acuerdo se produce cada cinco años.

Sr. Yoma. — Es atinado lo que dice el senador Alasino.

Sr. Presidente. — ¿Cuál es la redacción definitiva?

Sr. Alasino. — “Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta”. Asimismo, debería elaborarse un párrafo referido al procurador y al defensor general que diga que los que alcancen la edad indicada precedentemente —o sea, los setenta y cinco años— quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo.

Sr. Presidente. — ¿Esa es la redacción?

Sr. Yoma. — Hay que pulirla un poco, pero considero que es buena...

Sr. Presidente. — No puedo hacer votar una redacción que no sea pulida. No tengo ningún problema en esperar que lo redacten definitivamente, pero...

Sr. Yoma. — Entonces, todavía no lo haga votar.

Sr. Presidente. — De acuerdo.

—Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — La redacción sería la siguiente: “Los magistrados del Ministerio Público gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta. El procurador general y el defensor general que alcancen la edad de setenta y cinco años quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo”.

Sr. Yoma. — No.

Sr. Alasino. — Está bien. Para todos mientras dure su buena conducta.

Sr. Presidente. — El argumento y el razonamiento son muy claros, pero el texto no. Por eso, les pido que redacten un texto definitivo con tranquilidad. Así, la Cámara va a votar un texto y no una idea.

—Luego de unos instantes:

Sr. Genoud. — ¿Por qué no pasamos a cuarto intermedio?

Sr. Branda. — Pido la palabra para hacer una moción de orden.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — A fin de ordenar esta sesión, propongo que se pase a cuarto intermedio hasta que se elabore un texto definitivo.

Sr. Presidente. — No, está bien. Parece que ya se ha llegado a un acuerdo. Tengamos paciencia riojana. (*Risas.*)

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — La primera parte quedaría redactada de la misma manera, con excepción de que en lugar de los magistrados diría así: El procurador fiscal y el defensor gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco años de edad. Todo el texto seguiría igual y al final se agregaría un párrafo que diría lo siguiente: los restantes magistrados gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta hasta que alcancen la jubilación ordinaria.

Sr. Villarroel. — No estoy de acuerdo.

Sr. Presidente. — Señor senador por Catamarca: además de no estar de acuerdo, ¿solicita el uso de la palabra?

Sr. Villarroel. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Esta sesión se está desarrollando de manera muy peculiar.

Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Disculpe, pero parece que la palabra ha ido más rápido que el pensamiento.

Creo que esta propuesta altera el espíritu general del proyecto porque considero que la expresión "hasta que alcancen la jubilación" contiene un concepto ambiguo. ¿Qué significa? ¿Que se acogerán voluntariamente a la jubilación una vez cumplidos los requisitos? ¿O meramente pierden la estabilidad por el hecho de cumplir esos requisitos?

En cualquier caso, creo que no es conveniente hacer esta diferenciación. Del hecho de que en la Constitución reformada exista esa norma de los setenta y cinco años relativa a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se deriva, como necesidad lógica, que igual criterio haya que seguir en el sentido de discriminar entre los jefes del Ministerio Público y sus restantes miembros.

Me parece que es mucho más prudente dejar el proyecto como está redactado porque en definitiva, si se tiene en cuenta el parámetro de la edad, ésta opera igualmente sobre todos los seres humanos, cualquiera fuera la jerarquía del cargo que ostenten.

Por lo tanto, no encuentro muy razonable la distinción que se hace. Además, me parece un poco peligrosa porque en este caso la calificación

en orden a los requisitos jubilatorios puede prestarse a dudas y también afectar la estabilidad. Tengamos en cuenta que lo que precisamente se procura es la estabilidad.

Entiendo que cuando se habla de órgano independiente se están indicando también algunas condiciones de esa independencia, entre las cuales se encuentra la estabilidad sin esas amenazas —llamémosles así— de que no alcancen a cumplir los requisitos jubilatorios.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Señor presidente: no cabe duda de que actualmente los jueces en general tienen estabilidad hasta que se jubilan, mientras dure su buena conducta. Eso es lo que dice la norma. Tampoco cabe ninguna duda de que la Constitución ha establecido una edad especial para la jubilación de los jueces de la Corte, a quienes se intenta equiparar al procurador general y al defensor general.

Por lo tanto, lo que desnaturalizaría la intención del proyecto sería la interpretación del senador por Catamarca, y no la norma que estamos proponiendo.

El criterio es equiparar al procurador y al defensor con el régimen de los miembros de la Corte, y a los restantes magistrados con los demás jueces. Lo que se propone aquí es precisamente eso.

Sr. Presidente. — Antes de darle la palabra al senador Yoma, habida cuenta de que estamos un poco complicados con este artículo 13 y que en la reunión de presidentes de bloque de ayer se tomó la decisión de que a esta hora de la sesión se suspendiera el tratamiento de este tema e ingresáramos a la sesión de juicio político, lo que vamos a hacer es votar este artículo después de esa sesión de juicio político.

Sr. Menem. — Votemos ahora.

Sr. Presidente. — Lo que pasa es que el senador Yoma también quería hacer uso de la palabra.

Sr. Yoma. — No, señor presidente.

Sr. Presidente. — Pensé que me estaba pidiendo la palabra para referirse a este artículo en tratamiento.

Entonces, se va a votar el artículo 13 con la redacción propuesta por el señor senador Menem.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado.

5

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente. — De acuerdo con lo acordado en la reunión de presidentes de bloque, vamos a pasar a sesión de juicio político.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: técnicamente, habría que pasar a cuarto intermedio hasta que concluya la sesión de juicio político. Así lo solicito.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consecuencia, se pasa a cuarto intermedio hasta que termine la sesión de juicio político que se llevará a cabo a continuación.

—Son las 18 y 8.

—A las 21 y 47:

Sr. Presidente. — Continúa la sesión ordinaria.

6

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO
(continuación)

Sr. Presidente. — Corresponde proseguir con la consideración del orden del día en tratamiento.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: formulo moción de reconsideración del artículo 13, en los términos del artículo 146 del Reglamento.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — He solicitado la palabra para fundamentar la moción de reconsideración del artículo 13, formulada por el señor senador por La Rioja.

Me hago cargo del error que, tal vez por una afirmación mía, se ha deslizado en este cuerpo. El artículo, tal como estaba redactado en el dictamen originario, cumplía exactamente con la Constitución, y no así el que finalmente hemos modificado.

En consecuencia, he conversado con algunos señores senadores de la Unión Cívica Radical, y creemos que es oportuno reconsiderar la votación, promoviendo la aprobación del artículo tal

como ha sido leído oportunamente por el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente. — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por La Rioja.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Presidencia aclara que se requieren dos tercios de los votos.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración nuevamente el artículo 13.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: la comisión va a mantener en este caso el texto del artículo 13 tal como está en el dictamen, en la inteligencia de que corresponde al texto constitucional del artículo 99, haciendo extensivo a todos los magistrados y no solamente a los miembros de la Corte Suprema el tope de 75 años para el ejercicio de la magistratura.

El espíritu del proyecto que estamos considerando es la equiparación de los miembros del Ministerio Público a los magistrados del Poder Judicial y el texto del artículo 13 se corresponde con ese espíritu.

Por ello mantenemos el texto tal cual está y pedimos que se someta a la consideración de este cuerpo el artículo 13 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 en la forma propuesta por el miembro informante.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 14

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: voy a solicitar la modificación del párrafo quinto del artículo 14, que comienza diciendo lo siguiente: "Las cuestiones que los miembros del Ministerio Público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, se sustanciarán ante el procurador general de la Nación o ante el defensor general de la Nación,

según corresponda, quienes tendrán la facultad de resolverlas...”.

Creo que las perturbaciones que afecten el ejercicio de las funciones provenientes de los poderes públicos son actos ilícitos. Es más, podría decir que pueden constituir delitos. Por lo tanto, no tienen por qué ser sustanciados ante el procurador general. Menos todavía debe resolverlos el procurador general. Porque en este caso los fiscales van a tener una subordinación que es peligrosa dado que el hecho se presta a presiones políticas.

En consecuencia, si son actos ilícitos deben someterse, indudablemente, al control directo del Poder Judicial. Por eso solicito que por Secretaría se lea el artículo 14, párrafo quinto, con las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura a la propuesta formulada por el señor senador por Formosa.

Sr. Prosecretario (Pontaquarto). — (Lee) Artículo 14: Modifícase el quinto párrafo, que quedará redactado de la siguiente forma: Las cuestiones que los miembros del ministerio público denuncien con motivo de perturbaciones que afecten el ejercicio de sus funciones provenientes de los poderes públicos, serán denunciadas ante la autoridad judicial competente requiriendo las medidas que fueren necesarias para preservar el normal desempeño de las funciones.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: si el señor senador hubiese leído lo que sigue inmediatamente en el párrafo que él pretende modificar nos hubiera ahorrado el tiempo que perdimos en analizar la propuesta de modificación. Este párrafo quinto continúa así: “... y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial competente...”. Esto es lo que plantea el señor senador. Por ende, rechazamos la modificación propuesta y manifiesto a la Presidencia que aquellas modificaciones que no obran en Secretaría no serán consideradas por la comisión, salvo el artículo 69 que no sé si obra en Secretaría.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: lo manifiesto por el señor senador no se ajusta a lo que acabo de proponer ni a lo que dice el párrafo quinto. Porque la segunda parte que él ha leído —que dice “... y, en su caso, poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial compe-

tente...” — tiene el mismo sentido, ya que nuevamente estamos dándole al procurador general la facultad de poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Es decir que es el procurador general quien tiene que dar conocimiento a la autoridad judicial competente, y esto es incorrecto. El que tiene que dar conocimiento a la autoridad judicial correspondiente es el fiscal, que ha sufrido las consecuencias que especifiqué anteriormente.

En consecuencia, en este artículo se le están dando al procurador general facultades que son peligrosas, porque él es, en definitiva, quien resuelve si va a dar intervención a la autoridad judicial o no. En este caso, la autoridad judicial debe tomar intervención por denuncia directa del afectado, sin la intervención del procurador general. En cambio, según el proyecto, el procurador general tiene que intervenir en todos los casos. Esto es lo malo del proyecto y lo que hay que modificar a los efectos de que, en consecuencia, las garantías que existan en el caso no estén supeditadas a la voluntad del señor procurador general.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14 tal como figura en el dictamen de comisión.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Debo aclarar a los señores senadores que en esta discusión en particular pueden hacer uso de la palabra una sola vez —en este caso, la concedí por excepción—, porque si no corremos el riesgo de convertir esta sesión en una mera reunión de comisión.

Este proyecto estuvo varios meses en comisión, razón por la cual —por ese motivo— voy a ser estricto en el cumplimiento de que se hable una sola vez.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: confieso que, preocupado con la situación de que estábamos votando, olvidé de hacer una salvedad o alguna proposición quizá un poco audaz referida a la última parte de este artículo.

El último párrafo...

Sr. Presidente (Menem). — ¿El señor senador va a solicitar una reconsideración?

Sr. Aguirre Lanari. — Yo voy a explicar, señor presidente, y si la Cámara lo considera conveniente...

Sr. Presidente (Menem). — Para abrir discusión debe pedir la reconsideración. De lo contrario, no le concederé el uso de la palabra.

Sr. Aguirre Lanari. — Entonces, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Corrientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. La Presidencia aclara que se requieren dos tercios de los votos.

— La votación resulta negativa

Sr. Presidente (Menem). — Como ha resultado rechazada la moción, continuamos con la consideración del artículo 15.

— Se enuncia el artículo 15.

Sr. Meneghini. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: voy a apelar a la buena voluntad y sano criterio del señor presidente de la comisión.

No está en mi intención demorar la sanción de esta norma y no he presentado con anterioridad algunas modificaciones que queremos introducir. Pero quiero hacerlo porque creo que hace a la tarea legislativa de sancionar esta importante ley, subsanando algunas deficiencias que considero haber encontrado. Trataré de ser lo más breve posible.

Quiero proponer un agregado a este artículo 15. Si el concepto del caso figura en otra parte de la norma solicito al cuerpo que me disculpe.

Propongo que a continuación de: "Los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales"; se agregue: Tampoco podrán ser separados sin su conformidad de las causas en las que les corresponde intervenir en razón de su competencia.

El fundamento de esta propuesta es proponer más garantías a esa independencia y autonomía funcional, que han sido consagradas en el artículo 1°.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Algún otro señor senador va a proponer una modificación?

— No se producen manifestaciones.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Señor presidente: es sana la previsión del señor senador, que ya se encuentra contemplada en el artículo 32, inciso g) del presente dictamen.

Esa consideración está contemplada, señor senador, porque responde al espíritu de la ley la prevención del senador.

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde votar el artículo 15.

No tenemos quórum. Ruego a los señores senadores se sirvan ocupar sus bancas.

Si el señor senador por el Chaco toma asiento, tendremos quórum.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 16.

Sr. Villarroel. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: en el apartado c), se determina una sanción pecuniaria.

Allí dice: "Multa de hasta el 20 por ciento de sus remuneraciones". Yo supongo que deben ser remuneraciones mensuales; pero me parece que sería conveniente que se especifique. Vale decir, que se agregue que es el 20 por ciento de sus remuneraciones mensuales. Lo dicho, para no dar lugar a equívocos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Señor presidente: está bien. Vale como aclaración.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: pese a que, evidentemente, no creo que encuentre eco quiero proponer alguna modificación porque me interesa que figure en la versión taquigráfica, a efectos de que cuando se estudie en la Cámara de Diputados, tal vez se tengan en cuenta estas propuestas, que tienen un fondo jurídico acertado, desde mi punto de vista.

En primer lugar, quiero destacar que hay un párrafo que comienza: "Las causas por faltas disciplinarias se resolverán previo sumario, que se regirán por la norma reglamentaria que dicten el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación...". Creo que ambos forman una magistratura que no integra poderes constituidos. En consecuencia, no puede tener facultades legislativas delegadas, viola la Constitución y todo el derecho disciplinario se debe establecer por ley.

Además, aplicar sanciones no puede quedar librado a la reglamentación que va a dictar el procurador general, porque son propias del derecho

disciplinario. Las conductas se deben definir por ley, dando lugar a la aplicación de sanciones, para no caer en lo que se puede interpretar como la discrecionalidad y la arbitrariedad en que puede incurrir el procurador general. En todo caso propongo, a los efectos de que se contemple el caso, que la reglamentación la dicte la comisión bicameral y no el procurador general ni el defensor general.

Respecto a los recursos quiero agregar que ello no debe quedar librado a la reglamentación, y se debe aplicar la ley 19.549, que existe, que está vigente y que establece los recursos en el procedimiento administrativo. De otra forma, también va a quedar librado al arbitrio del procurador general.

Con estas propuestas nos encuadramos dentro de la Constitución y del régimen legal vigente. Dentro de la Constitución, porque el procurador general no puede tener facultades legislativas delegadas y porque sí la comisión bicameral puede dictar ese reglamento, y dentro del derecho administrativo, porque ya existe la ley 19.549, que reglamenta el procedimiento de los recursos administrativos.

Sr. Presidente (Menem). — Le corro vista de las peticiones al señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Mantenemos la actual redacción.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 16 con la modificación consistente en agregar en el inciso c) "mensuales" luego de "remuneraciones".

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 17.

— Se enuncia el artículo 18.

Sr. Berhongaray. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: me quiero manifestar en consonancia con la propuesta que había formulado cuando se trató el artículo 13, que obviamente no fue receptada por la comisión, tendiente a encontrar algún remedio al hecho probable de que pese a tratarse de un órgano independiente, en algún momento, en el largo devenir de la duración que tienen el procurador general y el defensor general por la estabilidad del artículo 13, se modifiquen las políticas criminales de un país, y que esta modificación no tenga modo de expresarse a través de algún órgano — además del Ministerio Público que actúa en forma independiente — que pueda llegar a ponerla de manifiesto. Yo pensaba, por ejemplo, en este tema que vivimos

del juicio a los comandantes, donde fue clara y notable la posición del país, del pueblo argentino, de modificar una política criminal en el sentido amplio y serio del concepto de lo que significa establecer una política criminal. Qué difícil hubiera sido implementarla pensando en un procurador general que proviniera de procesos de facto; es decir, que provinieran de mentalidades que, a lo mejor, no eran las adecuadas al momento histórico en el cual se produjo este cambio importante en la política criminal argentina.

Se me ocurre que en muchos otros temas puede llegar a suceder también que el procurador general se quede en el tiempo. Es tan revolucionario el devenir de los institutos y de los acontecimientos que, a lo mejor, un buen hombre no alcance los niveles históricos de los tiempos que le toque vivir, porque como ya se dijo en alguna otra sesión, puede ser que permanezca en su cargo hasta los 75 años y si es un hombre joven quizás ejerza la función durante veinte o treinta años. Creo que deberíamos prever este tema.

El mecanismo del juicio político no alcanza, porque seguramente puede tratarse de un buen hombre que no incurra en mal desempeño ni en la comisión de delito alguno. Obviamente, no cabría ni correspondería — y sería de absoluta injusticia — implementar los mecanismos del juicio político para su remoción.

Es por ello que propondré, en consonancia con la interacción de los poderes y el carácter que le quiso dar con un acentuado mayor parlamentarismo la última reforma de la Constitución a toda la normativa que ella estaba modificando, que el artículo 18 comience diciendo: "El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán ser removidos por un voto de censura emitido por el Congreso de la Nación que requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Podrán también ser removidos por las causales y mediante el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional", tal como está establecido.

Sé que la primera objeción que se hará es que, a lo mejor, estamos avanzando con esto sobre el carácter independiente del órgano del instituto que estamos creando. Pero quiero recordar que en este mismo proyecto de ley, en el artículo 21, inciso e) establecemos que una de las obligaciones del procurador general es elevar un informe anual y por escrito a la Comisión Bicameral parlamentaria creada por esta ley, sobre el

desempeño de las funciones asignadas al Ministerio Público.

En el artículo 31, en consonancia con esta interacción que existe entre el Parlamento y el Ministerio Público, decimos que anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la Comisión Bicameral, creada por esta ley, un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia: Ministerio Público y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente, el cual deberá contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio, un análisis sobre la eficiencia del servicio y propuestas concretas sobre las modificaciones o mejoras que ésta requiera.

Creo que surge —por lo menos, a mi criterio— con toda claridad la conveniencia de establecer el mecanismo del voto de censura para estas situaciones en las cuales se modifiquen a criterio del Congreso, las políticas criminales que un país o que una sociedad está implementando.

Esto, en consonancia con lo que ya dije de la posible larguísima duración que tienen en sus cargos el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación; que no es el mismo caso que el de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuya función es administrar justicia en función de las acciones penales implementadas por otros órganos.

Por ello, respetuosamente propondré esta modificación al artículo 18.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — No, señor presidente.

Vamos a mantener la redacción actual, en la inteligencia de que la modificación propuesta atentaría contra la independencia y la autonomía del Ministerio Público.

Ahora bien, si cambiamos la filosofía...

Sr. Berhongaray. — No la cambiamos.

Sr. Yoma. — ...y... ya que no la cambiamos, equiparamos a los jueces de la corte, también, a este mismo sistema, creo que ahí sí atentaríamos en serio contra la autonomía.

Por eso digo que esto va en contra de todo el espíritu de la ley.

Sr. Berhongaray. — ¡No es una respuesta seria...!

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los presidentes de bloque que consigan que los integrantes de sus bancadas permanezcan en las

bancas porque si no vamos a tener que estar llamando para votar a cada momento. Estamos tratando un proyecto de ley importante y no puede ser que el timbre tenga que sonar cada tres minutos para alcanzar el quórum.

— Se llama para votar.

— Luego de unos instantes:

Sr. Branda. — Pido la palabra para una manifestación en minoría.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Branda. — Señor presidente: dado que estamos tratando un proyecto de ley importante y que algunos artículos pueden no tener observaciones, propongo que votemos por capítulos.

Sr. Presidente (Menem). — Es casi imposible. Prácticamente estamos actuando en comisión, todos los artículos se discuten y sobre todos se hacen propuestas. No ganamos nada con decir que se votará por capítulos si después en cada artículo se van a proponer modificaciones.

Sr. Branda. — Entonces rogaría, tal como lo ha manifestado usted, señor presidente, que se aplique el reglamento a rajatabla.

Sr. Presidente (Menem). — Eso estoy haciendo, señor senador.

— Se continúa llamando.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18 tal como figura en el dictamen.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 19.

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis, de la bancada de la Unión Cívica Radical.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: usted decía que estamos tratando un proyecto de ley que es muy importante.

Simplemente quiero hacer una observación respecto del artículo 19, inciso b).

Ya nos habíamos referido a la mala integración del Consejo de la Magistratura en cuanto a la Capital Federal y las provincias. En este caso no veo el sentido de que un integrante sea designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, cargo que normalmente por el número de matriculados siempre recae en un miembro de la Capital Federal, y que otro sea

designado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Podría decir el Colegio Público de Abogados de Santa Fe, de La Rioja o de San Luis.

Sería importante que los dos miembros los designara la Federación Argentina de Colegios de Abogados para que definitivamente se contemple el interés federal.

Sr. Losada. — Me parece muy bien.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Señor presidente: quiero hacer dos observaciones respecto del artículo 19, que están en el dictamen de minoría que he firmado. Una es simplemente formal. En el noveno párrafo, referido a quiénes actuarán como fiscales ante el tribunal de enjuiciamiento, entendemos que debería corregirse la mención del defensor oficial por la de defensor público ante tribunales colegiados.

La segunda es más de fondo y hace a la forma de designación del fiscal que va a actuar en representación del cuerpo ante el tribunal de enjuiciamiento. En este sentido, creemos que no es correcto que lo designe la propia Procuración General de la Nación o la Defensoría General de la Nación cuando pueden estar en discusión sus propias órdenes o cuestionados sus propios miembros.

Entonces, proponemos que el párrafo noveno del artículo 19 quede redactado de la siguiente manera: Ante este tribunal actuarán como fiscales magistrados con jerarquía no inferior al fiscal general o defensor público ante los tribunales colegiados, los que serán designados mediante un sorteo público realizado por el procurador general de la Nación o el defensor general de la Nación, según la calidad funcional del imputado.

Sr. Presidente (Menem). — Hay dos propuestas: una del señor senador por San Luis y otra del señor senador por Entre Ríos.

Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Yoma. — Señor presidente: si el Colegio Público de Abogados integrara la FACA — Federación Argentina de Colegios de Abogados — sería atinada la propuesta del señor senador por San Luis. Pero tenemos entendido que funcionan como dos organismos distintos. Prueba de ello es que, a pesar de la representatividad del Colegio Público de Abogados, el presidente de la FACA es de Santa Fe.

Como pensamos que no se puede correr el riesgo de dejar sin representación a quienes

pleitean ante la justicia federal de la Capital, preferimos mantener la actual redacción.

Con respecto a la propuesta formulada por el señor senador López, rechazamos la modificación y mantenemos la actual redacción.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19 con la redacción propuesta por la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 20:

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: el apartado b) del artículo en consideración, que hace referencia a las denuncias promotoras de la actuación del Tribunal de Enjuiciamiento, establece que las denuncias pueden ser desestimadas directamente por el procurador general de la Nación o por el defensor general y prevé una ocurrencia en queja por parte del denunciante desestimado. Textualmente dice: "... desestimarla por resolución fundada, con o sin prevención sumaria. En este último caso, el denunciante podrá ocurrir en queja...".

Tal como está redactado, parecería que la queja sólo procede si la desestimación se hace sin previa información sumaria. Entiendo que el espíritu de la norma consiste en que siempre que haya desestimación esté habilitada la ocurrencia en queja.

Por lo expuesto, propongo que en este apartado, después de "prevención sumaria" se mantenga el punto y seguido y a continuación diga: "De la desestimación, el denunciante podrá ocurrir en queja", de forma que quede claro que en cualquier caso de desestimación, sea con prevención sumaria o sin ella, quepa la queja por la denegatoria.

Sr. Yoma. — Señor senador Villarroel: ¿podría decir nuevamente cómo quedaría la redacción del apartado?

Sr. Villarroel. — Después del primer punto y seguido del apartado b) del artículo 20, en donde dice: "En este último caso", que diga: "De la desestimación, el denunciante podrá ocurrir en queja...", continuando luego el apartado tal como está redactado.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: aceptamos la propuesta del señor senador Villarroel porque, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, ayuda a la comprensión de la norma. (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 20 con la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 21 a 24.

— Se enuncia el artículo 25.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: solicito la modificación del inciso e) de este artículo. Propongo que en lugar de decir: "Velar por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República", diga lo siguiente: "Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados internacionales detallados en el artículo 75 inciso 22, de la misma y las leyes de la República", ya que de esta forma queda más completo.

Quiero decir que la palabra "velar" que emplea el dictamen de mayoría viene del latín "vigilar" y, entre sus varias acepciones, tiene el sentido de "cuidar de". El ministerio público debe ser una magistratura activa, impulsora de la acción pública en todas sus direcciones, y no sólo de pasividad y vigilancia. En consecuencia, debe tener una orden imperativa y no un permiso condicionado.

Asimismo solicito que en este artículo se agreguen los incisos I) y II). El I) dice lo siguiente: "Apelar ante los tribunales internacionales en caso de violación de las normas que obligan a la República por hechos, actos u omisiones de los poderes Ejecutivo y/o Judicial". Y el II) dice: "Interponer acción de inconstitucionalidad en los casos previstos por las leyes vigentes".

Estos dos últimos incisos, señor presidente, tienen sus fundamentos porque, como órgano extrapoder, tienen la obligación de recurrir ante los organismos internacionales en caso de abuso o desviación de los poderes en violación de la Constitución, los tratados enumerados y las leyes, por acción, omisión o retardo (el denominado normalmente "cajoneo").

Con respecto a la acción de inconstitucionalidad, debe ser promovida por el ministerio público, ya que ello tiene antecedentes en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y me voy a referir al fallo del 10 de febrero de 1961, tomo 49, página 51, y al del 18 de mayo de 1962, "La Ley", tomo 110, página 119.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Terminó, señor senador?

Sr. Maglietti. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Señor miembro informante: ¿está de acuerdo?

Sr. Yoma. — Vamos a mantener la redacción actual del artículo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 26.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: quiero proponer una redacción distinta para el último párrafo del artículo 26, por cuanto entiendo que hay una colisión con los artículos 194 y 196 del Código Procesal Penal.

De esta forma estaríamos modificando el citado código sin que esto esté —creo— en la intención de la comisión. La última parte del artículo dice que el fiscal ante la Justicia penal, anoticiado de la perpetración de un hecho ilícito, sin perjuicio de las directivas que el juez competente imparta a la policía o fuerza de seguridad interviniente, deberá requerir de éstas el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordenar la práctica de toda diligencia que estime pertinente y útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal.

Por otra parte, el artículo 194 del Código Procesal Penal expresamente dice que "el juez de instrucción deberá proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 196". Y el artículo 196, en el primer párrafo, establece que "el juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la sección segunda del presente título". Es decir que la dirección del proceso está en manos del juez y solamente el juez puede delegar en el fiscal la dirección de la investigación criminal.

En cambio, conforme lo establece la actual redacción del artículo 26, es el fiscal quien puede *motu proprio* continuar esta investigación criminal, violándose así un principio que creo que es liminar dentro del procedimiento penal.

Por ello, nosotros aconsejamos la siguiente redacción: "Los fiscales ante la Justicia penal, anoticiados por cualquier medio de la perpetración de un hecho ilícito, sin perjuicio de las directivas

que el juez competente imparta a la fuerza de seguridad interviniente, solicitarán de éste que requiera el cumplimiento de las disposiciones que tutelan el procedimiento y ordene la práctica de toda diligencia que estime pertinente o útil para lograr el desarrollo efectivo de la acción penal”.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: *a priori* creo que el sentido de la modificación que propone el señor senador es mantener al juez de instrucción como el conductor del proceso en la etapa de sumario. Esto no está puesto en tela de juicio por el artículo 26.

Lo que propone dicho artículo es que los fiscales en la órbita de su competencia puedan acceder directamente al auxilio de la fuerza pública o de seguridad para colaborar con el cumplimiento de su gestión.

Yo creo que no hay colisión entre la labor del juez de instrucción como jefe o conductor del sumario y la labor del fiscal, que puede requerir —reitero— la colaboración de la Justicia para el desenvolvimiento de su accionar.

Es por ello que mantendríamos la redacción original, porque no veo colisión —con todo respeto por la propuesta del señor senador preopinante— con las facultades del juez de instrucción.

Por lo tanto, mantendremos la actual redacción.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: yo interpreto que la explicación que se da estaría ratificada por el párrafo “... A este respecto la prevención actuará bajo su dirección inmediata”. En consecuencia no habría colisión.

Lo que se da es una posibilidad de incitación, como un acicate que podría ejercer el fiscal, pero siempre sería el juez el que mantendría el control.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 26.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia y aprueba el artículo 27.

—Se enuncia el artículo 28.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Señor presidente: creo que no se deben omitir, y en esto comparto el criterio original del señor senador Yoma, el carácter del

dictamen en un artículo especial y el principio de legalidad.

En concreto propongo agregar un artículo que sería el 28, reenumerar los siguientes y modificar el artículo 28 del dictamen, que pasaría a ser 29.

El 28 diría: “Carácter de los dictámenes. Las acciones públicas interpuestas por quienes integran el ministerio público, sus dictámenes e intervenciones en juicio, carecen de carácter vinculante para los jueces de la Nación, con la limitación prevista en el artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación y las limitaciones que otras leyes procesales prevean”.

Y el artículo 29, ex 28, diría: “Principio de legalidad. Cuando se tratare de una acción pública, el ministerio público actuará de oficio. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley”.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Vamos a aceptar la propuesta del señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el nuevo artículo 28 según la modificación propuesta por el señor senador por Entre Ríos.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: quisiera hacer una moción de reconsideración, porque hay un punto sumamente grave que quiero que el señor presidente de la comisión analice...

Sr. Presidente (Menem). — Primero pida la reconsideración.

Sr. Maglietti. — Explico qué es para que puedan saber si puede dar lugar a la reconsideración.

De acuerdo con esta ley, el artículo 27 necesita un agregado para que el Estado no pierda personería en todos los juicios que se le planteen.

En consecuencia, propongo, señor presidente, que al artículo 27 se le haga un agregado que diga “hasta tanto se opere su reemplazo por delegados del cuerpo de abogados dependiente del procurador del Tesoro de la Nación, continuarán ejerciendo la representación del Estado y/o del fiscal por un reemplazo no mayor de un año”.

Si no se agrega esta disposición, en todos los juicios en donde intervenga el Estado el representante no va a poder continuar actuando porque a partir del momento en que se apruebe esta ley, no va a tener personería.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor senador por Formosa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 29, ex 28, de acuerdo con la modificación propuesta por el señor senador por Entre Ríos.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 29 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 30 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Solicito que la modificación del artículo 30 propuesta por mí sea leída por Secretaría.

Sr. Secretario (Piuze). — Artículo 30: "Cuando un magistrado actúe en cumplimiento de instrucciones emanadas del procurador o del defensor general de la Nación, tendrá el deber de examinarlas y negarse a obedecer cuando las considere irregulares, ilegales o contradictorias con una orden jerárquica de nivel superior. El integrante del ministerio público que recibiere una instrucción que considere contraria a la ley pondrá en conocimiento del procurador o del defensor general en su caso, su criterio disidente mediante un informe fundado. Cuando la instrucción general objetada concierna a un acto procesal sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la recibiere la cumplirá, en tanto fuere conforme a la Constitución Nacional y a las leyes".

Sr. Maglietti. — Señor presidente: corresponde la modificación de ese artículo porque, evidentemente, en el artículo 30 redactado en la forma en que lo hizo la comisión, los fiscales tienen un deber de obediencia que yo considero que es ilegal. En primer lugar, las instrucciones no pueden ser particulares, señor presidente. Las instrucciones tienen que ser de carácter general, porque todos sabemos que las instrucciones de carácter particular son totalmente improcedentes dentro del marco de la autonomía que deben tener los miembros del ministerio público.

En segundo lugar, los miembros del ministerio público no tienen por qué dejar a salvo su opinión personal y cumplir con las instrucciones y menos aún si esas instrucciones son ilegales. Y de acuerdo con este artículo, hasta las instrucciones ilegales obligan al ministerio público a que sean cumplidas.

Este artículo 30, tal como está redactado, es de una gravedad impresionante. Creo que así se presta a que los miembros del ministerio público estén sometidos de una manera totalmente ilegal; ni siquiera los códigos militares establecen ese tipo de subordinación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarreal. — El mensaje va dirigido también al presidente de la comisión, pero es mucho más breve. Es un cambio de género. El último párrafo del artículo 30 dice: "... Si la instrucción objetada consistiese en omitir un acto sujeto a plazo o que no admita dilación, quien la realice actuará bajo su exclusiva responsabilidad..."

En realidad el género del artículo debe ser masculino: quien lo realice. Porque es el acto. De lo contrario, se sancionaría un contrasentido. La se refiere a instrucción u omisión, y justamente es al revés.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Quien realice la instrucción. El género es el adecuado.

Sr. Yoma. — Está bien, porque el párrafo se refiere al acto y no a la instrucción.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Y respecto a las...

Sr. Yoma. — No, no.

Sr. Presidente (Menem). — Le ruego que sea explícito, porque hay dos observaciones...

Sr. Yoma. — Usted tampoco ha sido explícito, señor presidente, porque dijo: "¿Y respecto a las...?" (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Hay dos modificaciones. Le pido que se refiera a las dos. Una fue formulada por el señor senador Maglietti y la otra por el señor senador Villarreal.

Sr. Yoma. — Pido disculpas al señor senador Maglietti y a la Presidencia.

Vamos a rechazar la propuesta de modificación del señor senador Maglietti y vamos a aceptar la formulada por el señor senador Villarreal.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 30 con la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 31 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — En lo que se refiere a este artículo, la Presidencia, si bien no puede opinar, va a formular una observación que le han hecho notar sus auxiliares.

Aquí se habla de una comisión bicameral creada por esta ley y no se encuentra en qué lugar se crea dicha comisión. Lamentablemente, esta situación se repite en el artículo 24. En ambos casos se habla de una comisión bicameral creada y no se observa dónde se crea en este proyecto de ley.

Sr. Yoma. — Tiene razón.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — En igual sentido, en el inciso e) del artículo 21 también se habla de la comisión bicameral creada por esta ley.

Sr. Presidente (Menem). — Efectivamente, así es.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Propongo que en lugar de "creada por esta ley" se coloque "a crearse por esta ley".

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: pero más adelante usted...

Sr. Yoma. — La Presidencia planteó atinadamente la observación y la comisión propone que en lugar de "creada por esta ley" se coloque "a crearse por esta ley".

Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Y dónde se crea?

Sr. Yoma. — A partir de esta ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Creo que he encontrado dónde figura esta comisión bicameral. En el segundo párrafo del artículo 23 se señala: "La relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las Cámaras del Congreso".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Entonces, sugiero que directamente, donde figura "creada por esta ley", se hable de la comisión bicameral sin hacer referencia a su creación por esta ley. Por ejemplo, que el inciso e) del artículo 21 quede redactado

de la siguiente manera: "Elevar un informe anual, y por escrito, a la comisión bicameral...", suprimiendo la frase a la que se está haciendo referencia.

Sr. Presidente (Menem). — Pero eso no agrega nada.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: este proyecto de ley crea una comisión bicameral a través de la cual el ministerio público se va a relacionar con el Congreso. La crea, pero deja sujeta a la reglamentación dictada por las Cámaras del Congreso su constitución. Es por ello que no está mal dicho que esta ley crea esa comisión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Me parece que el proyecto de ley debería decir imperativamente "Créase una comisión", pero no "a crearse por esta ley". No me parece una redacción apropiada porque ello sería una suerte de promesa de creación de una comisión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: el artículo que ha señalado el señor senador por Corrientes no es una promesa sino una previsión. Entonces, con decir "la comisión prevista en esta ley" se resuelve el problema. Porque, realmente, se trata de una comisión prevista en la ley.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: podría decir "la comisión bicameral prevista en el artículo 23". Se trata de la comisión bicameral cuya composición y funciones serán fijadas por el Congreso.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: el texto es suficientemente claro, por lo que vamos a mantener la redacción actual del artículo 31.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 31.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 32 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: me voy a referir al inciso a), punto 1. Donde dice "competencia originaria" propongo que diga "competencia originaria y exclusiva", para que

sea coherente con el artículo 117 de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Señor presidente: anticipo mi acuerdo con la propuesta del señor senador por Corrientes.

Además, sugiero la supresión del calificativo "máximo" adosado a "jefe" en el primer párrafo del artículo porque el procurador general de la Nación es el jefe del ministerio público. Con que diga "jefe" es suficiente, porque si se le agrega "máximo" es redundante.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: agrego una nueva propuesta referida al punto 6, del inciso a). Donde dice "causas en las que medien planteos de inconstitucionalidad de las leyes" agregaría "u otras normas jurídicas". Porque es evidente que algunas otras normas jurídicas también pueden ser descalificadas en cuanto a su constitucionalidad.

Sr. Presidente (Menem). — Puede ser ley en sentido material.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: no se aceptan las modificaciones propuestas por los señores senadores Villarroel y Aguirre Lanari.

Por otra parte, la comisión propone la siguiente modificación en el artículo 32, inciso a), apartados 4, 6 y 7. Quedaría un punto 5 —y en él se subsumirían los puntos 4, 6 y 7—, cuya redacción es la siguiente: "Causas en las que se articulen cuestiones federales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a efectos de dictaminar si corresponden a su competencia extraordinaria y expedirse en todo lo concerniente a los intereses que el ministerio público tutela.

"A los fines de esta atribución, la Corte Suprema dará vista al procurador general de los recursos extraordinarios introducidos a su despacho y de las quejas planteadas en forma directa por denegatoria de aquéllos, con excepción de los casos en los que, según la sana discreción del tribunal, corresponda el rechazo *in limine* por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaran insustanciales o carentes de trascendencia, o el recurso o la queja fuesen manifestamente infundados, supuestos en los que podrá omitir la vista al procurador general".

Creemos que esta nueva redacción, además de englobar los actuales puntos 4, 6 y 7 del inciso

a), otorga una mayor amplitud a las atribuciones de la Procuración General.

En consecuencia, proponemos que se vote el artículo con esta modificación.

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, se va a votar el artículo 32 con las modificaciones propuestas por el señor presidente de la comisión.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado.

— Se enuncian y aprueban los artículos 33 a 35 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 36 del dictamen.

Sr. López. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Voy a proponer la eliminación del inciso f), en concordancia con la modificación que oportunamente hemos propuesto al artículo 16.

Sr. Maya. — Que lo funde.

Sr. Presidente (Menem). — Le solicitan que fundamente su proposición.

Sr. Maya. — No dijo por qué.

Sr. Presidente (Menem). — Sí, dijo que era en función de lo manifestado en la consideración de otro artículo.

Sr. López. — En el artículo 16, señor presidente, habíamos propuesto, en el dictamen en minoría que se presentó, eliminar el cuarto párrafo y reemplazar el último párrafo por el siguiente: "El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación podrán delegar la atribución conferida en este artículo al magistrado de menor jerarquía con relación al rango inferior, funcionarios y/o empleados que de ellos dependan. El reglamento que se dicte deberá garantizar a los afectados la revisión de las sanciones disciplinarias por parte del procurador general de la Nación o por el defensor general de la Nación en su caso. Las decisiones de éstos que apliquen o conformen sanciones disciplinarias podrán ser recurridas por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se interpondrá fundamentalmente ante este tribunal dentro del plazo de treinta días hábiles judiciales contados a partir de la notificación de la sanción, aplicándose el procedimiento previsto en los artículos 40 y 41 de la ley 22.140".

La propuesta de modificación y sus fundamentos los tienen el señor presidente y los miembros de la comisión, al igual que todos los

señores senadores que firman el dictamen en minoría también suscrito por quien habla.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Mantenemos la actual redacción, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, se va a votar el artículo 36 tal como figura en el dictamen de comisión.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado.

— Se enuncia y aprueba el artículo 37 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 38 del dictamen.

Sr. López. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. López. — Hace poco se aprobó la ley de hábeas data, y en el segundo párrafo de este artículo se hace referencia a que en los procesos de amparo y de hábeas corpus deberán intervenir los fiscales ante los jueces de primera instancia. La propuesta que hemos hecho en nuestro dictamen es que intervengan en los recursos de hábeas data. En consecuencia, proponemos que el segundo párrafo del artículo 38 quede redactado de la siguiente manera: "Deberán intervenir en los procesos de amparo, de hábeas corpus y de hábeas data, y en todas las cuestiones de competencia".

Sr. Yoma. — Aceptamos la modificación propuesta, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, se va a votar el artículo 38 con la modificación propuesta y aceptada.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado.

— Se enuncian y aprueban los artículos 39 a 41 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 42 del dictamen.

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: solicito que se lea por Secretaría el texto propuesto por mí para el artículo 42.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — Dice la modificación propuesta por el señor senador por Formosa: (Lee) "La Fiscalía de Investigaciones Adminis-

trativas forma parte del ministerio público, vinculada por superintendencia con la Procuración General de la Nación. Está integrada por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, que será designado de la misma forma que el procurador general de la Nación y demás magistrados que esta ley establece".

Sr. Maglietti. — Señor presidente: propongo dos modificaciones.

En primer lugar, el despacho de la mayoría establece que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas forma parte del ministerio público fiscal como órgano dependiente de la Procuración General de la Nación.

Interpreto que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no puede depender del procurador general de la Nación y no puede recibir órdenes de dicho funcionario porque, evidentemente, se pueden desnaturalizar totalmente sus funciones.

El fiscal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debe tener autonomía suficiente como para actuar de acuerdo con su sano criterio. Todos sabemos que la función primordial de este fiscal es controlar, especialmente, los actos de corrupción que existen en las esferas del gobierno. En consecuencia, tenemos que cuidar que el fiscal tenga los elementos, las atribuciones y la autonomía necesarias para que pueda actuar correctamente. Así podremos tener un funcionario eficiente.

Por eso, en la segunda parte hago la misma propuesta que cuando me referí al artículo 5º, circunstancia en la que el senador Yoma me remitió al artículo 42. Me atrevo a proponer nuevamente que el fiscal nacional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sea designado con acuerdo del Senado.

Pienso que esta propuesta no va a ser aceptada pero, de todas maneras, quiero dejar sentado que es necesario tener un fiscal con suficientes poderes para investigar. No como el actual fiscal, el doctor Pinzón, que desde que está al frente de la Fiscalía no hizo absolutamente nada. Podríamos denominarlo "fiscal fantasma" o "ñoqui" porque, evidentemente, no sólo no cumplió con sus obligaciones sino que no ha investigado ninguno de los hechos de corrupción que han aparecido en todos los diarios del país. En consecuencia, una Fiscalía de Investigaciones Administrativas como la que tenemos actualmente es lo mismo que nada. ¿Para qué queremos disposiciones legales si vamos a tener un funcionario que no va a cumplirlas y no va a investigar absolutamente nada?

Por eso insisto en la propuesta que hice. Aunque sea rechazada quiero que quede constancia de que la Unión Cívica Radical quiere que exista un órgano de investigación para que realmente se puedan controlar los actos de corrupción que aparezcan en los ámbitos del gobierno.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Mantenemos la actual redacción, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 42.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 43 a 46 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 47 del dictamen.

Sr. Agúndez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Agúndez. — Señor presidente: el artículo 47 dice que "... el juez de la causa deberá poner esta circunstancia en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas". Me parece que el juez no tiene tarea administrativa. Tendrá que notificar o, directamente, el fiscal de la causa notificará, que pertenece al mismo organismo que el fiscal de investigaciones administrativas.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Qué propone, en consecuencia?

Sr. Agúndez. — Propongo que en lugar de decir "juez" se mencione "el fiscal de la causa". Porque de lo contrario se podría dar la paradoja de que la falta de comunicación del artículo 47 exima de los deberes que tiene al fiscal nacional de Investigaciones Administrativas en el inciso c) del artículo 44. Todas las causas tienen fiscales.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Mantenemos la actual redacción.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 47.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 48 y 49 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 50 del dictamen.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: hago moción para que después del inciso c) se agreguen otros

dos, entre las facultades del defensor. Uno que diga: "d) Realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Nacional". Y otro que establezca: "e) Promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la Justicia de los sectores discriminados".

Esto lo conversé con algunos señores senadores. Creo que da una mayor amplitud en la jurisdicción de acción que debe tener el defensor general de la Nación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Señor presidente: vamos a aceptar la modificación propuesta y, a su vez, a proponer la redacción definitiva del inciso p).

El texto quedaría de la siguiente manera: "Fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las Defensorías Públicas Oficiales y el grupo de defensores públicos oficiales, defensores públicos oficiales adjuntos y auxiliares de la Defensoría General de la Nación, que colaborarán con ellos sin necesidad de sujetarse a la división judicial del país".

Entonces, el inciso p) quedaría redactado de esta manera.

Sr. Presidente (Menem). — Al aceptarse la propuesta cambiaría la denominación de los incisos. Ya no sería el p).

Sr. Yoma. — Correcto. Habría que correr dos incisos, con posterioridad al c).

Sr. Presidente (Menem). — Sería inciso r).

El inciso p) quedaría, pues, como inciso r).

Sr. Yoma. — Está bien.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Yoma. — Estamos en una suerte de aprendizaje acelerado del abecedario. (Risas.)

Si incorporamos la letra riojana "rr", no tendríamos problemas. (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Meneghini. — Señor presidente: me parece que en el inciso b) está mal citado el artículo 50.

Creo que en realidad debe referirse al artículo 51.

Sr. Presidente (Menem). — ¿A qué inciso se refiere el señor senador?

Sr. Meneghini. — Al inciso b): "Delegar sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de con-

formidad con lo previsto en el artículo 50 de esta ley; ...". Me parece que en realidad se refiere al artículo 51 que expresa: "En dicho ámbito se desempeñarán los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación..."

Sr. Yoma. — Es correcto.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 50 con las siguientes modificaciones.

En el inciso *b*), en lugar de artículo 50 debe decir artículo 51. Luego se agregan los dos incisos propuestos por el señor senador por Mendoza, y se modifica el actual inciso *p*), que pasaría a ser *r*), según la propuesta formulada por el señor presidente de la comisión.

Los que estén de acuerdo con las modificaciones propuestas, sírvanse así indicarlo.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueban los artículos 51 a 59 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 60 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Señor presidente: aquí vamos a proponer una modificación.

La primera parte quedaría redactada de la siguiente manera: "Los Defensores Públicos Oficiales ante los tribunales colegiados de segunda instancia...", en lugar de incluir también a los tribunales colegiados de casación. Y como último párrafo iría el siguiente: "Los Defensores Públicos Oficiales ante los tribunales colegiados de casación tendrán las atribuciones descritas en los incisos *c*) y *d*) de este artículo".

Sr. Presidente (Menem). — Se suprimiría "de casación" y respecto de los "incisos *a*) y *b*)".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 60 con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 61 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: por un problema de observación de ordenamiento, de técnica legislativa, los actuales artículos 61 y 62 deberían pasar a ser los números 62 y 63, que es lo referido a la remuneración y a los honorarios de

los defensores públicos oficiales. Así que planteamos que se coloquen al final de la Sección III. Entonces el 63 sería 61 y —repito— los actuales 61 y 62 pasarían a ser 62 y 63.

Sr. Presidente (Menem). — Sería un cambio de orden.

En consideración en primer término el artículo 63, que pasa a ser 61. ¿Es así, señor senador?

Sr. Yoma. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 63 del dictamen, que pasa a ser 61.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 62, que es el 61 del dictamen.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 63, que es el 62 del dictamen.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 64 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Este se refiere a los derechos adquiridos por los agentes que conforman la Curaduría, que depende hoy del Ministerio de Justicia, que pasan al Ministerio Público de la Defensa y respecto a los derechos adquiridos de antigüedad y jerarquía de estos agentes.

Proponemos como segundo párrafo del inciso *b*) del artículo 64: "El traspaso de los funcionarios y empleados de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación al Ministerio Público de la Defensa, no afectará derechos adquiridos que comprendan el reconocimiento de su jerarquía, antigüedad y los beneficios derivados de la permanencia en el cargo o categoría y otros análogos".

Sr. Presidente (Menem). — ¿Traspaso o transferencia, señor senador?

Sr. Yoma. — Es lo mismo: traspaso o transferencia; a gusto de la Honorable Cámara.

Sr. Genoud. — La propuesta debe ser concreta.

Sr. Yoma. — La propuesta es el traspaso.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 64 con la modificación del inciso b) que ha propuesto el miembro informante.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 65 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: proponemos modificar este artículo en cuanto dice "artículo 27, primer párrafo", sustituyendo esta expresión por "artículo 27 —primera parte—".

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 65 con la modificación propuesta por el señor miembro informante.

Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — El artículo 65 y siguientes, hasta el 68, son un injerto gravísimo que se hace al proyecto de ley de ministerio público, porque no tienen nada que ver con esta norma.

En ese sentido en primer lugar me voy a referir al 65. Dice que el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo que continúa es violatorio de la ley 12.954. Porque dicho artículo también expresa: "...del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías, reparticiones o entes descentralizados". Eso colisiona directamente con el artículo 1º de la ley 12.954, de la Procuración del Tesoro, que dice lo siguiente: "Créase el Cuerpo de Abogados del Estado. Tendrá a su cargo el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración".

En consecuencia, señor presidente, la creación de un Cuerpo de Abogados del Estado que no dependa del procurador del Tesoro sino —como dice este proyecto— de los ministerios, de las secretarías y de los entes descentralizados, consideramos es un hecho gravísimo, porque se está creando un Cuerpo de Abogados paralelo y se tira por tierra con todo lo que se ha venido estableciendo y practicando en el país desde hace 130 años.

Asimismo, se viola la ley 12.954, que se sancionó en 1947, durante un gobierno justicialista. El procurador del Tesoro y el Cuerpo de Abogados, de acuerdo con esa ley, tienen por objeto

además, señor presidente, unificar la doctrina y la conducta administrativas.

Con el proyecto sustentado por la mayoría se termina todo tipo de unificación, porque ya los cuerpos de abogados dependerán de los ministerios y de las secretarías, y dejarán de depender del procurador del Tesoro de la Nación.

Eso, además, implica la violación del artículo 6º de la ley 12.954, y del 4º del decreto reglamentario de esa misma ley.

El artículo 4º del decreto reglamentario dice que el objetivo del procurador del Tesoro y del Cuerpo de Abogados es sentar normas de interpretación y aplicación de las leyes y sus reglamentos, las que serán obligatorias —subrayo que son obligatorias— para todos los abogados que forman dicho Cuerpo.

Evidentemente, esta norma tiene por objeto combatir la discrecionalidad, la arbitrariedad, la personalización, la discriminación, la inequidad y el desorden dentro del ámbito administrativo.

El propósito de esta reforma, señor presidente, es neutralizar nada menos que al procurador del Tesoro y a todo el Cuerpo de Abogados; es ponerle fin al criterio fijado por la ley 12.954 e introduce en el ámbito administrativo una anarquía que le va a causar un tremendo perjuicio.

Se quiera interpretar así o no, esta es una maniobra para eludir la futura intervención del procurador del Tesoro y el Cuerpo de Abogados; la única institución sería que queda en el país en este momento y que funciona correctamente dentro del ámbito de la ley. Y al dejarse de lado a la Procuración del Tesoro y al Cuerpo de Abogados, y crearse un Cuerpo de Abogados paralelo dependiente de los ministerios o de las secretarías, se echa por tierra con todas las disposiciones legales que han venido rigiendo en el país hasta la fecha.

Es evidente que esto introducirá la influencia política, facilitará más la corrupción y los dictámenes dejarán de ser serios —como son los actuales— y adquirirán un tinte político.

Por ello, es gravísima la reforma que se injerta. Por ello, también propongo el agregado después de los términos "Cuerpo de Abogados del Estado", del texto "dependientes del procurador del Tesoro de la Nación". De esa manera, estaremos dentro de las disposiciones legales.

Ello, con respecto al Cuerpo de Abogados paralelo que se quiere crear.

Con relación al último punto del artículo 65, que dice: "...Cuando el Poder Ejecutivo lo esti-

mare conveniente la representación judicial estatal será ejercida por el procurador del Tesoro de la Nación.”, debo manifestar que es demasiado grave; más grave incluso que lo referido anteriormente, porque significa que a partir de la sanción de esta iniciativa, únicamente cuando el Poder Ejecutivo lo estime conveniente, la representación judicial estatal será ejercida por el procurador del Tesoro.

Quiere decir que se elimina la obligatoria intervención del procurador del Tesoro y del Cuerpo de Abogados especificada con toda claridad en la ley 12.954.

Entonces, esto nos hace pensar que el propósito de esta reforma no sólo es neutralizar al procurador del Tesoro y a sus abogados. Todo lleva a pensar también que detrás de esto estará la privatización de la defensa de los intereses del Estado, que seguramente estará a cargo de algunos estudios importantes, que ya estarán pensando en las fabulosas sumas que van a cobrar en los juicios en los que van a representar al Estado. Esto puede ser como digo o no, pero se presta a que se piense así.

Además, se está hablando desde hace mucho tiempo de la privatización de la defensa cuando exista un interés fiscal o económico del Estado, lo que no puede ser bajo ningún punto de vista. No puede serlo porque la ley 12.954 es clara. El Poder Ejecutivo no puede pedir la intervención del procurador general del Tesoro cuando él quiera o cuando lo juzgue conveniente sino que tiene la obligación de hacerlo en todos los casos.

Por ello propongo que el artículo 65, para que se adecue a nuestra legislación y a la ley 12.954 —dictada bajo un gobierno justicialista, y que el actual gobierno justicialista pretende ignorar— sea redactado en la forma en que será leído por Secretaría. Se trata del artículo 65 con la modificación por mí propuesta.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuzzi). — (Lee) Artículo 65: modifícase su texto, que quedará redactado de la siguiente forma: “A los efectos del cumplimiento del artículo 27, primer párrafo de esta ley, salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Mantenemos el “injerto” de la redacción original, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 65 con la redacción original.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 66 del dictamen.

Sr. Maglietti. — Pido la palabra.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: lamento que algunos senadores estén un poco apurados. Voy a ser lo más breve posible. Ocurre que estamos tratando artículos muy importantes. Y desgraciadamente me veo obligado a hacer observaciones.

El artículo 66 — como bien dijo el señor senador Yoma — es otro injerto gravísimo y antijurídico que se agrega a través de esta ley.

Dicho artículo dice que las instrucciones al Cuerpo de Abogados las tiene que impartir el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, secretarías o entes descentralizados. Esto es directamente un disparate jurídico y una barbaridad, una barbaridad con letras mayúsculas e inconcebible porque va a llevar el caos doctrinario a la administración pública.

Jamás deben impartirse instrucciones por parte de diversos organismos porque se creará el escándalo jurídico, se posibilitarán conductas contradictorias sobre los mismos temas y se va a terminar con todo lo que hasta ahora hemos tenido de positivo con el procurador del Tesoro y el Cuerpo de Abogados que dependen del procurador.

El artículo 6º de la ley 12.954 dice en forma terminante: “La Dirección General como asesora del Poder Ejecutivo y las delegaciones, compondrán las asesorías de los distintos ministerios y reparticiones, pero las delegaciones deberán supeditar su acción a las instrucciones que imparta la primera para unificar criterios...”. Es decir que todo tiene que estar unificado a través de las instrucciones que imparta la Dirección General, según establece el artículo 6º. ¿Y qué es la Dirección General? De acuerdo con el artículo 4º, la Dirección General estará compuesta de los siguientes organismos: a) Dirección General, con el número de funcionarios necesarios

del cuerpo que fije la ley de presupuesto". El b), por ejemplo, hace referencia a la inspección de delegaciones, etcétera. No voy a leer los incisos en su totalidad porque haría muy larga mi exposición.

En consecuencia, señor presidente, bajo ningún punto de vista las instrucciones pueden ser impartidas por tantas autoridades como son el Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete, los ministerios, las secretarías y los entes descentralizados. Ello es así porque hay que unificar criterios y porque además es obligatoria la intervención de la Dirección General, es decir del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro.

Con este artículo 66 se están desmantelando principios tradicionales. Se trata de un injerto que lo único que va a traer es más caos y corrupción a la administración pública.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Mantenemos la redacción originaria.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 66 del dictamen en su redacción originaria.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia y aprueba el artículo 67 del dictamen.

— Se enuncia el artículo 68 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Maglietti. — Señor presidente: por el artículo 68 se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros para disponer la creación, supresión, transferencia y redistribución de dependencias, servicios, funciones y cargos. Esto quiere decir lisa y llanamente que el jefe de Gabinete va a ser el rey y señor que va a hacer las designaciones y todas las modificaciones en materia de cargos que a su juicio corresponda aplicar, violando en forma flagrante lo establecido por el artículo 16 de la ley 12.954 que dice lo siguiente: "Ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de abogado, sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponden al cuerpo y siendo así, propondrá el

nombre de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos."

Como se puede apreciar, las funciones que se dan al jefe de Gabinete son una usurpación del organismo que integra la Procuración del Tesoro y una violación de lo establecido en el artículo 16 que acabo de citar.

Según la ley, para su designación los abogados tienen que cumplir una serie de requisitos legales, tales como presentarse a concurso, y evidentemente gozan de una carrera jerarquizada y estabilizada. En efecto, no pueden ser echados, sacados de su cargo o ascendidos sino por un orden de prioridad y de méritos establecido especialmente en la norma.

El artículo 68 barre con todo esto. ¿Qué va a traer el artículo 68? Simplemente la discrecionalidad del jefe de Gabinete y la desaparición de todos los requisitos legales. Con este artículo sepultamos a este tribunal y al procurador del Tesoro. Dejamos a un costado a su Cuerpo de Abogados y lo llamamos de vez en cuando para que intervenga en algún asunto que no sea de importancia o de interés para los ministros, los secretarios, el Poder Ejecutivo o el jefe de Gabinete.

En consecuencia, a partir de la sanción de esta norma vamos a tener una Procuración del Tesoro con un Cuerpo de Abogados cuyos integrantes van a ser nada más que meros auxiliares, que serán llamados únicamente cuando quiera requerirse su intervención.

En los demás casos van a intervenir los cuerpos de abogados designados por los ministros, por los secretarios, por los entes. Y van a entrar a la administración los abogados que gocen de la simpatía del señor jefe de Gabinete. Se terminaron los concursos, el orden, la carrera jerárquica y todos aquellos principios sagrados para este tipo de institución.

Pido que se lea el artículo 68 cuya redacción propongo.

Sr. Presidente (Menem). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (PiuZZi). — (Lee) Artículo 68. — A los fines del cumplimiento de lo previsto en los artículos 27, 65 y 67 de la presente ley, el jefe de Gabinete de Ministros podrá disponer la creación de cargos así como efectuar la reestructuración de créditos presupuestarios que, a tal efecto, sean necesarios.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor presidente de la comisión.

Sr. Yoma. — Se mantiene la redacción actual del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 68 tal como figura en el dictamen.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobado.

—Se enuncia el artículo 69 del dictamen.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: si hay otra propuesta de modificación para este artículo, prefiero hablar en último término.

Sr. Presidente (Menem). — Pienso, señor senador, que si usted tiene una propuesta, los demás tienen que conocerla para ver si es aceptada. Si no, van a estar haciendo propuestas sin saber que el presidente de la comisión ha hecho otra.

Si está de acuerdo, por Secretaría se leerá su propuesta.

Sr. Yoma. — No. La voy a leer yo, porque hubo algunos cambios a último momento.

El nuevo artículo 69 que propone la comisión dice lo siguiente: "Dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Senado de la Nación los pliegos de los candidatos a ocupar los cargos de Procurador General de la Nación y Defensor General de la Nación. En el mismo término y a los efectos de dar el acuerdo exigido en el artículo 5º de esta norma, deberá remitir los pliegos de la totalidad de los actuales integrantes del Ministerio Público que se desempeñan en los cargos previstos en los incisos b), c), d), y e), de los artículos 3º y 4º de la presente ley."

Esto, señor presidente, en una breve explicación, se refiere a los casos del procurador general de la Nación y del defensor general de la Nación y a que se podrán enviar los pliegos de los candidatos actuales u otros para el acuerdo respectivo por los dos tercios de los miembros presentes del Senado.

En el caso del resto de los magistrados integrantes del Ministerio Público, se deberán enviar los pliegos de los actuales, respetando la jerarquía y los destinos que actualmente desempeñan. En los incisos b), c), d) y e), de los artículos 3º y 4º se mencionan los cargos sobre los cuales se deberán remitir los pliegos para el acuerdo con la mayoría simple del Senado, reitero, en la inteligencia de que se deberán respetar los actuales cargos y jerarquías que desempeñan los funcionarios mencionados.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: este artículo 69 es el que, de algún modo, trajo más controversias cuando se discutió en general el proyecto que hoy estamos abordando, el miércoles de la semana pasada.

El miembro informante propone un nuevo texto para esa norma, por el cual se requeriría el acuerdo para todos los integrantes del Ministerio Público y de la Defensoría General de la Nación. Los titulares de ambos órganos, con los dos tercios de los integrantes del cuerpo; y los restantes integrantes del Ministerio Público y de la Defensoría, con simple mayoría.

Digamos que el oficialismo ha tenido un cambio sustancial de posición, ya que el artículo 69 del proyecto que analizamos la semana pasada confería, por la sola sanción de la ley, estabilidad a la totalidad de los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría. No hacía distinción entre los fiscales de menor rango y el procurador general de la Nación.

El bloque de la Unión Cívica Radical va a reiterar la posición que expresó en oportunidad de tratarse este tema en general, en el sentido de redactar el artículo 69 de tal modo que se exija el acuerdo del Senado con los dos tercios de los votos de sus integrantes para el procurador general y el defensor general de la Nación y no así para el resto de los integrantes del Ministerio Público, quienes, obviamente, permanecen en sus funciones y tienen estabilidad, tal como lo preveía el artículo originario del proyecto.

Voy a leer el texto que nosotros proponemos, el cual tiene la característica de ser una norma transitoria, porque una vez superada esta instancia rige la ley en plenitud para las futuras incorporaciones al Ministerio Público.

El texto que impulsamos es el siguiente: "Con excepción del procurador general y defensor general de la Nación, los demás cargos actualmente existentes en el Ministerio Público subsistirán bajo el régimen y con las denominaciones establecidas en la presente ley, y continuarán siendo desempeñados por quienes los ejerzan al momento de su entrada en vigencia, con la estabilidad y demás derechos y garantías establecidos en la presente ley.

"El Poder Ejecutivo nacional remitirá al Senado de la Nación los pliegos de los candidatos a ocupar los cargos de procurador general de la Nación y defensor de la Nación dentro de los treinta días corridos contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

"Mientras el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, designados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, no reglamenten la estructura interna del Ministerio Público, sus diversas dependencias mantendrán la actual, con las modificaciones establecidas en esta ley."

Obviamente quienes discrepan con esta norma se preguntarán por qué hacemos un distinguo entre funcionarios de un mismo órgano.

Me voy a permitir hacer mención, con la brevedad del caso en virtud de la larga y maratónica sesión que hemos tenido, a lo que, a nuestro juicio, son los argumentos sustantivos que diferencian el tratamiento que pretendemos dar a los fiscales y defensores respecto de quienes son los titulares de dicho órgano.

En primer lugar, es una cuestión de rango. Tanto el procurador como el defensor son titulares o cabezas de este órgano que, como bien se denominó acá, es bicéfalo. Ellos tienen facultades de supervisión y de impartir instrucciones al resto de los funcionarios del Ministerio Público.

Se trata de dos funcionarios. En el caso de los defensores y fiscales, son cuatrocientos. En consecuencia, esto va a tener un efecto decisivo en orden al funcionamiento del Ministerio Público una vez sancionada la ley.

Además, tanto el procurador general como el defensor son institutos creados por la Constitución Nacional, están mencionados en la letra de nuestra Carta Magna mientras que el resto de los funcionarios nacen en función de la ley que estamos considerando.

¿Por qué se ha consagrado una mayoría especial para prestar el acuerdo respectivo en el caso del procurador y del defensor - los dos tercios de los votos - y en el resto simple mayoría? Porque, precisamente, lo que con mucha razón se ha establecido es que por ser titulares de ese órgano se requiere un consenso que está vinculado estrechamente a la estabilidad que van a tener en su función. Lo que implica que van a sobrevivir a distintos gobiernos, a distintas administraciones. Al requerir, como lo exige la Constitución para los ministros de la Corte, los dos tercios se está constriñendo, indicando y yo diría hasta obligando a los representantes de los partidos políticos que componen el Senado a encontrar el perfil y las personas indicadas que representen una absoluta garantía de ecuanimidad en lo que hace a la organización, la administración y la supervisión del ministerio público. Para el resto de los cargos, fiscales y defensores, se requiere simple mayoría de votos.

¿Cómo se remueve al procurador y al defensor? Por juicio político. El que le está reservado por la Constitución al presidente, vicepresidente, a los ministros y a los ministros de la Corte. Mientras que para el resto de los funcionarios la remoción se hará a través del mecanismo que se va a crear por ley, que es un tribunal de enjuiciamiento. Es un trámite no diría de menor envergadura pero más rápido y que no involucra a los altos poderes del Estado, como es el caso del Congreso de la Nación para el juicio político.

También tiene importancia poner de manifiesto cómo se designa al procurador y al defensor general. Es muy distinto del caso de los fiscales y de los defensores. Al procurador se lo elige a través de una propuesta del Poder Ejecutivo al Senado que, con dos tercios, le presta acuerdo. Mientras que los fiscales y los defensores tienen un trámite mucho más complicado. Tiene que existir un concurso de antecedentes y oposición, se elabora una terna, ésta va al Poder Ejecutivo, quien remite una propuesta y luego el Senado brinda o no el acuerdo por simple mayoría que exige la ley. En una palabra, tienen función, naturaleza, condiciones y requisitos absolutamente diferentes.

Si bien pensamos que puede haber buena intención del bloque de la mayoría de exigir el acuerdo para todos, en el caso del resto de los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría General de la Nación, que superen el número de cuatrocientos, quedarían prácticamente en un virtual estado de comisión. Es decir, bajo un estado de disponibilidad.

La primera pregunta a formular es cuánto tiempo va a transcurrir para que las propuestas de todos esos funcionarios sean remitidas. Puede ser un trámite breve, pero deben ser consideradas, analizadas y evaluadas por el Senado para su aprobación.

Además, nos preguntamos en qué condiciones morales van a estar esos fiscales sometidos al juicio del Senado cuando tienen en sus manos investigaciones penales, cuando están por resolver aspectos vinculados, por ejemplo, a leyes como la flexibilización laboral, que incluso muchas veces confrontan con el pensamiento o la filosofía del actual gobierno, siendo que éste tiene mayoría en la Cámara de Senadores.

Estoy haciendo una reflexión absolutamente práctica. En definitiva, es un diagnóstico realista de lo que puede pasar con esta Justicia a la que creo que todos queremos reconstruir en función de su independencia y de su autonomía. ¿Qué impactó va a tener esto sobre los fiscales y sobre

los defensores, que son un número muy significativo de funcionarios que hoy en día están en actividad, muchos de ellos demostrando idoneidad, solvencia técnica y moral, si nosotros los colocamos frente a un tribunal por el cual van a tener que pasar para brindárseles el correspondiente acuerdo por simple mayoría?

Termino, señor presidente, diciendo que sí, hemos dado un paso cualitativamente importante y no he ahorrado elogios a la hora de referirme a quienes han motorizado un tratamiento parlamentario importante, que dejó atrás un proyecto del Poder Ejecutivo que era un verdadero despropósito, para dar paso a un dictamen que pese a la gran cantidad de discusiones en particular que ha traído, en general significó un avance significativo, aceptado por gran parte de las entidades que han sido escuchadas sobre este tema. Se han receptado gran parte de las reflexiones y sugerencias que han formulado los bloques y también entidades vinculadas al quehacer judicial.

Por eso digo que si nosotros pasamos de un Ministerio Público que dependía del Poder Ejecutivo a uno que tiene autonomía funcional, autarquía financiera, que a partir de ahora a los fiscales se les va a requerir concurso público de antecedentes y oposición y cuya designación no obedecerá, simplemente, a decisiones discrecionales, como fue hasta ahora, todo esto es algo que valoramos sobremanera.

Entonces, ello justificaría plenamente que las cabezas del Ministerio Público y de la Defensoría General de la Nación cuenten con el respaldo político que está simbolizando en esos tercios que sabiamente se han incorporado al proyecto de ley, a imagen y semejanza de la mayoría especial que requieren para su designación los ministros de la Corte.

De tal modo que pensamos que así queda satisfecha la aspiración de la Unión Cívica Radical en este tema. Por supuesto que, a nuestro juicio, hay fiscales que no han cumplido debidamente su función, mientras que hay otros que sí lo han hecho. Hay algunos que han demostrado una gran independencia de criterio; otros, no tanto. Pero lo cierto es que en relación con la continuidad jurídica, a nuestro entender, los fiscales y defensores —con excepción de los titulares de ambos órganos— deberían gozar de estabilidad a partir de la sanción de la ley, por supuesto, bajo el nuevo régimen que en general hemos votado sin dudar un instante. De esta forma queda planteada la posición de nuestro bloque con relación al artículo 69.

Además, quiero decir...

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: le ruego que no abuse porque ya ha triplicado el tiempo de que disponía para realizar su intervención.

Sr. Genoud. — Una sola consideración más, señor presidente, siempre en procura de acortar distancias.

Si existen algunos nombres que pueden ser motivo de discrepancia, el justicialismo tiene muchos juristas a su alcance que bien podrían llegar a este recinto mediante una propuesta del Poder Ejecutivo y contar para su aprobación con los dos tercios que requiere este proyecto de ley y la Constitución.

Este es, a nuestro juicio, el artículo más importante y sobre el que existen mayores expectativas, y sólo he hablado catorce minutos sobre él.

Sr. Presidente (Menem). — El tiempo de que disponía era de cinco minutos.

Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Seré muy breve, señor presidente.

Durante la discusión en general del presente proyecto de ley adelanté mi voto negativo a la redacción originaria del artículo 69. En esa sesión, el señor presidente de la comisión hizo una propuesta de supresión de dicho artículo y ahora se llegó a la redacción que estamos considerando.

Al respecto, quiero destacar que ha habido un esfuerzo importante de parte del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales para conciliar criterios. Pero, evidentemente, el resultado no es, a mi criterio, aquél al que debería haberse arribado.

Hoy los señores senadores que han aprobado la suspensión del juez Trovato han tenido un gesto muy importante. Creo que sería importante acompañar ese hecho de este otro gesto. Fundamentalmente, tal como lo planteé en la discusión en general, acá estábamos discutiendo formalmente el tema de si estos funcionarios tenían acuerdo o no cuando fueron designados. Considero que la cuestión no está radicada allí ni es eso lo que impacta a la sociedad.

Entonces, creo que se podría haber modificado esa posición a fin de redactar la primera parte de este artículo sin colocar —porque es cierto que así se lo hace— en una virtual situación de disponibilidad a todo el cuerpo de fiscales de la Nación.

Creo que esto es algo que no contribuye a reafirmar ese otro gesto que tuvo hoy el Parlamento con la destitución del juez Travato...

Sr. Alasino. — No se lo destituyó.

Sra. Fernández de Kirchner. — Perdón, me refería a su suspensión. Tal vez, fue una expresión de deseos. Estoy excusada y puedo formular...

Sr. Alasino. — Pero usted no fundó bien su excusación, señora senadora.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores que no interrumpan a la oradora.

Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por Santa Cruz.

Sra. Fernández de Kirchner. — Decía que sería interesante, entonces, no arruinar ese gesto, que es importante y que debe ser valorizado, con esta virtual colocación en disponibilidad de todo el cuerpo de fiscales de la Nación.

Por lo tanto, voy a mantener mi posición original de votar negativamente este artículo, que fundamenté en oportunidad de realizarse la discusión en general de este proyecto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: no voy a abundar en consideraciones similares a las que han vertido precedentemente los señores senadores por Mendoza y por Santa Cruz, pero considero oportuno traer, en respaldo de esas opiniones con las que coincido, la posición de órganos absolutamente representativos, tanto de la magistratura cuanto de la abogacía que ejercen en nuestro foro.

Se ha hecho bien en destacar recientemente por parte del señor senador por Mendoza el espíritu amplio que prestigia al Congreso evidenciado por el sector de la mayoría en la búsqueda de una reforma con relación al texto previsto inicialmente.

Considero que ese gesto merece que tenga continuidad y de esa manera evitar algunas de las consecuencias seguramente nocivas que se generarían en la opinión pública de persistirse en la redacción que se acaba de enunciar.

En este sentido, para acortar mi exposición, y con el objeto de traer elementos contundentes que reflejen lo que seguramente mañana dirá la opinión pública si no se modifica esta disposición, voy a dar lectura de una nota que me ha dirigido la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que supongo no solamente yo habré recibido.

Voy a tratar de sintetizar este documento. Dicen "que los actuales miembros del Ministerio Público fueron nombrados conforme a las condiciones y requisitos vigentes al momento de su designación y, por lo tanto, gozan de la estabilidad constitucional para todo empleado público, además de la inamovilidad que resulta con claridad del artículo 120 de la Constitución Nacional..."

Más adelante expresan que "en consecuencia no es, de manera alguna, aceptable que la ley que les otorgaría las más adecuadas condiciones para el ejercicio eficaz de su magistratura, los someta a un procedimiento donde, sin causa justificada, puedan dejarse sin efecto los derechos adquiridos ya mencionados y permitir su reemplazo con el solo argumento de denegar su acuerdo, lo que implica la virtual 'puesta en comisión' de todo el Ministerio Público".

A continuación señalan que "no es necesario abundar en argumentaciones para comprender las riesgosas y negativas implicancias que tendría una generalizada situación de inestabilidad en el órgano encargado de la persecución penal y de la defensa de la legalidad. Así es, en efecto, pues durante el período que requiera la gestión de los acuerdos, imperaría un estado de incertidumbre que lesionaría sin remedio la independencia y libertad de actuación de los fiscales y defensores afectados, con grave daño a la seguridad jurídica y a la credibilidad de las instituciones.

"No debe olvidarse, por último, que el órgano creado por el artículo 120 de la Constitución Nacional, no puede estar sometido a la contingencia de que toda modificación por vía legislativa de su estructura, genere situaciones similares a las expuestas precedentemente, porque de ese modo se neutralizaría la intención de los constituyentes, en el sentido de establecer una magistratura autónoma e independiente que opere como defensora de la legalidad y los intereses generales de la sociedad ante el Poder Judicial".

En iguales términos de alarma se pronunció la Federación Argentina de Colegios de Abogados a través de un fax que he recibido hoy...

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: por razones de tiempo, le pido que sintetice la lectura que está haciendo, sin perjuicio de que pueda solicitar su inserción.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: estoy sintetizando; no he leído todo el texto. Lo que pasa es que hay algunos párrafos que son tan elocuentes que seguramente superan la concisión que yo pueda darles.

Voy a leer algunos fragmentos de ese fax enviado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Uno de ellos dice que "en los hechos significaría un vaciamiento de la estructura de vigilancia y acusación que se encomienda a dichos funcionarios, por el tiempo —que no es posible calcular, pero que sin duda habrá de ser prolongado— de las nuevas designaciones. Con ser grave esta observación no lo es menos el advertir que luego de casi quince años de estabilidad democrática, quienes han sido nombrados según las normas vigentes en cada momento, no pueden perder la estabilidad en su sede".

Más adelante dice lo siguiente: "Se descuenta que todos quienes hoy ejercen sus funciones han superado la posible objeción de haber sido nombrados por un poder de facto, o bien han sido designados según las normas vigentes desde la recuperación de la democracia".

Creo que lo que he leído es suficientemente explicativo de la conmoción —a este término se refiere la nota que acabo de sintetizar— que esta norma ocasionaría, lo cual obliga a nuestra reflexión.

Pido reflexión a los señores senadores miembros de la mayoría. Estamos todos empeñados, y lo acaba de decir la señora senadora por Santa Cruz, en robustecer el prestigio de las instituciones y la autoridad que debe tener —y creo que tiene— el Senado de la Nación para encarar el ejercicio de graves negocios de interés público.

Pido a todos que reflexionemos acerca de lo nocivo de una puesta en comisión de hecho, que implicaría un período prolongado durante el cual tendríamos que examinar centenares de ratificaciones. Esto es, sin duda alguna, algo no querido por la mayoría ni por la opinión pública argentina.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Villarroel. — Dentro del término reglamentario, señor presidente, y tratando de no incurrir en la reiteración de argumentos que acabo de escuchar y que comparto —me refiero a los del señor senador por Mendoza y de quienes lo han seguido en el uso de la palabra—, quiero apuntar un par de observaciones.

En primer lugar, la diferenciación entre los recaudos para los jefes y los subordinados del Ministerio Público está ampliamente justificada por el diverso origen de las investiduras y, además, por el hecho de que el propio proyecto que estamos sancionando —ya se han sancionado la mayoría de los artículos— determina cla-

ramente desde su artículo 1º la unidad de actuación del Ministerio Público, la organización jerárquica y, además, el hecho de que son las cabezas de poderes las que ejercen las facultades correspondientes por sí o a través del resto de los miembros, tal como se lo expresa en el proyecto de ley.

No se ve por qué, entonces, se trae a la misma bolsa a estos cuatrocientos funcionarios. Y mucho menos, señor presidente y señores senadores, cuanto que, como bien se ha puesto aquí de resalto, la independencia que está prevista en la Constitución y también en este proyecto queda severamente comprometida respecto de estos miembros del Ministerio Público en tanto y en cuanto van a estar pendientes de un acuerdo, que se podrá conceder o denegar, las más de las veces sin que se conozcan las razones por las cuales se lo concede o se lo deniega, como sucede habitualmente.

A eso se agrega una consideración de orden técnico: el otorgamiento de los acuerdos pertinentes para el procurador general de la Nación y para el defensor general de la Nación no es sino, pura y sencillamente, el cumplimiento de este mismo proyecto que estamos sancionando. En efecto, así lo prevé el artículo 5º.

En cambio, por vía de esta norma llamada complementaria —que en rigor no es complementaria sino específicamente transitoria—, estamos introduciendo una excepción de alcances absolutos respecto de los requisitos que este mismo proyecto determina para la designación del resto de los miembros, tanto del órgano fiscal cuanto de la defensoría.

De manera que sería de pésima técnica legislativa que, por vía de una norma supuestamente complementaria, estuviésemos modificando precisamente todo el procedimiento para la designación del resto de los miembros. Esto es sumamente claro.

El presidente de la Nación —jefe del gobierno de la Nación, como dice la Constitución— ha manifestado de modo público que se ha puesto a la cabeza de la lucha contra la corrupción. Y es un deber nuestro no dudar de la sinceridad del propósito. También es nuestro deber, como integrante de otro poder del gobierno, secundar —si cabe el término— ese empeño. Y en ese empeño, creo que un jalón principal e inexcusable es el de garantizar la necesaria tranquilidad espiritual y serenidad de espíritu para todos esos miembros del ministerio fiscal, que dicho sea no tan de paso, a diferencia de lo que sucede con el cuerpo de la magistratura, no han recibido la desconfianza de que sí se ha hecho merecedor

ese cuerpo. Y la prueba de esto se encuentra justamente en las notas a las que acaba de hacer referencia el señor senador por Corrientes. Han sido muy distintas las expresiones, los propósitos y los fundamentos de las comunicaciones que ha hecho llegar la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es lo que de modo más directo está en condiciones de apreciar el desempeño de quienes administran justicia y de quienes procuran la administración de justicia.

Por fin, digo también que por más que este resto de los miembros —como dice la norma— sea o actúe como parte en el proceso, esta misma norma marca que su desempeño de partes debe ir precedido del valor de imparcialidad, que en rigor es conformador del valor justicia, de la realización de la justicia. Esa imparcialidad se ve seriamente comprometida cuando no se garantiza esa conciencia de independencia que está dada, sobre todo, por la estabilidad en los respectivos cargos.

Creo que sería lamentable que esta diferencia claramente marcada por la propia ley, en cuanto requiere el consenso expresado en los dos tercios para la designación de las cabezas del Ministerio Público, se vea trastocada con esta otra exigencia mínima de una simple mayoría, que es de un partido —no importa cuál pero es de un partido—, para privar de sus cargos a los miembros del Ministerio Público, cuando esta misma ley prevé el procedimiento bastante ágil de remoción de aquellos que no cumplan con su cometido adecuadamente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos de la bancada radical.

Sr. López. — Señor presidente: como autor del dictamen de minoría que propuso un texto muy similar al que hoy ha sostenido la bancada de la Unión Cívica Radical, no pensaba hablar en el recinto. Pero debo decir que se tuvieron en cuenta todas las razones explicitadas por los miembros de los bloques de minoría e, incluso, algún miembro de la bancada de la mayoría. Todos estos argumentos fueron tenidos en cuenta para la redacción a que hago referencia.

Pero hay una cosa que es necesario destacar. Se dice que dentro de los treinta días el Poder Ejecutivo mandará los acuerdos pertinentes para todos los fiscales en ejercicio. Pero no se pone un plazo —es obvio que no se ponga— para que el Senado se expida.

Soy miembro de la Comisión de Acuerdos y creo que no hemos prestado más de diez o, como máximo, veinte acuerdos en lo que va del año.

No sé cuánto tiempo vamos a estar para prestar cuatrocientos.

Además, digo lo siguiente. Durante este término, fiscales que están en causas importantes y que han vivificado una perspectiva de confiabilidad en la Justicia —que, aparentemente, no existía hasta hace poco tiempo—, van a estar sometidos a este estado de comisión porque, en definitiva, no va a saberse si en determinado caso el Senado va a prestar acuerdo para determinada causa o no. Todo va a estar sospechado a partir de esta norma.

Por eso, como autor de este dictamen hago un llamado a la reflexión para ver si podemos, de alguna manera, compatibilizar los textos pertinentes y lograr un acuerdo que, realmente, vivifique la confianza de la sociedad en general en la Justicia y en la labor de los cuerpos legislativos que componen este poder.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan de la Cruzada Renovadora.

Sr. Avelín. — Señor presidente: están de más las argumentaciones, que ya hemos escuchado suficientemente.

Adhiero a la posición sustentada por el señor senador por Mendoza en este artículo, que creo que es equilibrada, tiene sentido común y jerarquiza a la Justicia.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Yoma. — Señor presidente: como miembro informante de la mayoría hice uso de la palabra para leer la propuesta de modificación. Con la anuencia y la paciencia de la Cámara, solicito se me otorguen unos minutos para fundamentar el porqué de esta modificación.

En el tratamiento en general hemos sostenido la estabilidad de los actuales integrantes del Ministerio Público. La ratificamos: esta estabilidad es abonada por suficiente doctrina de la Corte y de tratadistas del derecho, y es pacífica esta interpretación en lo que hace a la estabilidad establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional incorporada a la reforma del 57. Se trata de la estabilidad del empleado público, que no puede ser removido sin sumario previo.

Esta interpretación pacífica de la doctrina, señor presidente, reconoce dos vertientes en el debate. Una es la sostenida, entre otros, por los doctores Vanossi y Bidart Campos, que hablan de la estabilidad propia, que sería aquella por la cual al reconocerla, frente a la cesantía está la reincorporación inmediata al cargo con respeto de la jerarquía del que estaba ejerciendo.

La otra es la llamada estabilidad impropia, sostenida por Marienhoff, Dromi y otros tratadistas, que es aquella que reconoce únicamente el derecho a la indemnización frente a la cesantía, al despido arbitrario del que habla la Constitución.

Esta última interpretación ha sido receptada en fallos de la Corte. Es la estabilidad del empleado público, que reconoce como resarcimiento frente al despido arbitrario la sola indemnización, no la restitución al cargo que ocupaba.

Por eso, señor presidente, una cosa es la estabilidad del empleado público, de la que actualmente gozan los miembros del ministerio público, y otra es la estabilidad de los magistrados, que es la que estaremos dando a partir de la sanción de este proyecto y la que la misma Constitución dio con la redacción del artículo 120.

Es bueno precisar que este debate que se dio en doctrina, que asumió la Corte y sobre el que fijó posición, se inició a partir de resoluciones ministeriales emanadas del entonces ministro de Justicia Alconada Aramburú el 11 de abril de 1986, durante el anterior gobierno radical, por las que se dejó cesantes a cinco fiscales de la Nación y se produjo el traslado de otros tantos; ello, reitero, por resolución ministerial. Toda la doctrina levantó su crítica, a esas resoluciones del ministro de Justicia del gobierno de entonces, que avasallaba al ministerio público con estas cesantías, incluido un fiscal de cámara, y con estos traslados indiscriminados, que generaban —obviamente— una situación de incertidumbre y de avasallamiento del ministerio público por parte, reitero, del entonces gobierno a través del ministro de Justicia.

Por eso se dio todo este debate en torno a la estabilidad de los actuales miembros del ministerio público.

Cuando en esta ley y en esta propuesta de modificación estamos planteando el acuerdo o la ratificación, mejor dicho, de los miembros inferiores —por dar un nombre— del Ministerio Público —salvo el procurador general y el defensor general— lo hacemos para dar legitimación constitucional a aquellos funcionarios que están desempeñando la función, que han sido designados de manera precaria, diría yo, por resolución ministerial, cuando el ministerio público era un apéndice del Poder Ejecutivo. Hoy, en este Congreso, estamos dando el salto cualitativo de otorgarle una autonomía plena y equiparar su situación a la de los magistrados.

Si usted me permite, señor presidente, quiero referirme a algunos apuntes que he tomado res-

pecto de qué se entiende por la estabilidad de los jueces.

Ya nos referimos a cuál es la estabilidad del empleado público, de la cual hoy gozan, tal cual hemos dicho en el debate en general, los actuales miembros del ministerio público.

La estabilidad de los jueces es la que comprende el cargo o la categoría y la sede, que es el derecho a ejercer la función en un tribunal determinado para el cual se prestó el correspondiente acuerdo.

La estabilidad de los jueces es aquella por la cual no pueden ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento.

La estabilidad de los magistrados es aquella por la cual una vez prestado el acuerdo, designados e investidos del cargo, sólo pueden cesar en él a través del mecanismo del juicio político o del jury de enjuiciamiento, que es lo que establece esta norma que les otorga la autonomía.

La estabilidad de los magistrados es aquella a partir de la cual, en caso de ser alejados de sus funciones o trasladados, deben ser restituidos inmediatamente al cargo y a la jerarquía. No se subsana el vicio del traslado arbitrario o de la cesantía arbitraria con el mero resarcimiento económico. Debe ser restituido inmediatamente al cargo. Esta es la estabilidad que le estamos dando por ley y por la cual requerimos el acuerdo y el respaldo legislativo con la mayoría simple.

Porque queremos mantener el estado de certidumbre de los actuales miembros del ministerio público, a partir de esta ley vedamos al Poder Ejecutivo la posibilidad de que envíe otros nombres que no sean los actuales, por respeto a la jerarquía y a los cargos.

Hacemos la diferencia con el procurador general y el defensor general. El Poder Ejecutivo podrá enviar a los actuales o a otros, pero en el caso del resto de la estructura deberá respetar a los actuales, que están ejerciendo estos cargos.

Si en algún caso excepcionalísimo el Senado tiene que rechazar un acuerdo, deberá hacerlo por resolución absolutamente fundada en una denuncia concreta y también con prueba. El Senado no podrá negar una ratificación de un acuerdo de manera caprichosa y arbitraria.

Por eso, para ser consecuentes con la nueva jerarquía constitucional e institucional que este bloque está impulsando dar a los fiscales de la Nación, estamos proponiendo la legitimación a través de esta Honorable Cámara.

Sr. Genoud. — ¿Me permite una muy breve acotación, señor presidente?

Sr. Baum. — No se puede hablar dos veces...

Sr. Presidente (Menem). — Teniendo en cuenta la trascendencia del tema, tiene la palabra el señor senador Genoud, para hacer una breve acotación.

Sr. Genoud. — Como advierto, a través de lo expresado por el señor miembro informante, que no van a aceptar nuestra moción, y habiendo sido tan explícito en la última parte de su alocución en el sentido de que la ratificación es un hecho, salvo que exista una muy fundada denuncia por un hecho grave, y en ese caso se podría eventualmente rechazar el acuerdo, semejante concepto debería estar contenido en la norma que propone el bloque de la mayoría. Porque eso sí le daría más certeza al concepto del acuerdo, que por lo general es un acto discrecional.

Sr. Berhongaray. — ¿Me permite formular una pregunta, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — A los efectos de completar esta inquietud le quería preguntar al miembro informante si existe algún plazo a partir de la entrada de los pliegos de los fiscales y defensores al Senado para que éste se expida.

Sr. Yoma. — Con respecto a la inquietud del señor senador Genoud, me resisto a pensar que esta Cámara va a rechazar un pliego arbitrariamente, sin fundarlo.

Incluir una cláusula de este tipo es poner en sospecha al Senado de que puede rechazar arbitrariamente un pliego, no sólo los actuales sino cualquiera que trate.

Sobre el planteo del señor senador Berhongaray, no es buena técnica autolimitar la facultad del Senado. En todo caso, vedamos y limitamos al Poder Ejecutivo; no al análisis y al tiempo que se puede tomar este cuerpo para analizar los títulos y los pliegos. En todo caso, todo depende de la diligencia del cuerpo.

Sr. Genoud. — Yo no dije arbitrariamente sino discrecionalmente. Han habido acuerdos otorgados discrecionalmente y así han sido los resultados de muchos acuerdos...

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: no le he dado el uso de la palabra.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). — Señores senadores: no les he dado el uso de la palabra.

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador por Formosa, le ruego...

Sr. Branda. — Llámeme la atención también al señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Se ha tergiversado un término que no he utilizado.

Sr. Presidente (Menem). — Les ruego postura a los señores senadores.

Se va a votar el artículo 69 con la redacción propuesta por el señor miembro informante.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 70 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en la redacción del artículo 70 se propone reemplazar el término "créditos" por "partidas".

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 70 con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncia el artículo 71 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Perdón, señor presidente, pero deseo proponer otra modificación con relación a la última parte del artículo 70. Creo que deberá votarse...

Sr. Presidente (Menem). — Pida la reconsideración, señor senador.

Sr. Yoma. — Pido la reconsideración, porque falta un agregado.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el pedido de reconsideración formulado por el señor senador por La Rioja.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se requieren dos tercios de los votos.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración nuevamente el artículo 70.

Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Propongo un agregado a la última parte del artículo 70, que dice: "El presupuesto específicamente deberá asignar las sumas que hoy corresponden a la Dirección de la Curaduría Oficial del Ministerio de Justicia de la Nación, al programa del Ministerio Público de la Defensa".

Esto es a los efectos de que la transferencia de la Curaduría se realice con la partida presupuestaria correspondiente.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 70 con la modificación que ya había sido sancionada más el agregado que se propone ahora.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 71 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: propongo una modificación a la primera parte del artículo 71, que quedaría redactada así: "Los actuales cargos del Ministerio Público-Fiscal modificarán su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:..."

Y, en el inciso *d*), a continuación de "Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas," debería decir: "y los Secretarios de la Procuración General de la Nación".

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 71 del dictamen con las modificaciones propuestas por el señor senador por La Rioja.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el artículo 72 del dictamen.

Sr. Yoma. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Yoma. — Señor presidente: en el mismo sentido que en el caso del artículo anterior, en la primera parte del artículo 72, referido a las equiparaciones, propongo que diga lo siguiente: "Los actuales cargos del Ministerio Público de la Defensa modificarán su denominación de acuerdo a las siguientes equiparaciones:..." Continúa la enumeración y, luego, en el inciso *c*), después de "...ante los tribunales orales en lo criminal," debe agregarse: "y los secretarios de la Defensoría General de la Nación"; continúa la redacción del inciso *y*, a continuación de "instancia única," debe decir: "y de la Defensoría General de la Nación, conforme lo previsto en el inciso *c*) del artículo 4º".

El inciso *e*) del artículo que consideramos, quedaría redactado así: "Los defensores oficiales de pobres, incapaces y ausentes adjuntos ante los tribunales enunciados en el inciso *c*) de este artículo; y los defensores oficiales de primera y segunda instancia del interior del país, en los cargos de defensores públicos oficiales adjuntos,

conforme lo previsto en el inciso *d*) del artículo 4º".

En el inciso *f*), luego de "incapaces y ausentes", debe agregarse: "de primera y segunda instancia, y los secretarios letrados de la Defensoría General de la Nación".

Por último, el inciso *h*)...

Sr. Presidente (Menem). — Es un nuevo inciso, señor senador.

Sr. Yoma. — Así es, señor presidente.

Debe decir: "Los prosecretarios letrados de la Defensoría General de la Nación en los cargos de defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación, conforme con lo previsto en el inciso *f*) del artículo 4º".

Señor presidente: estas modificaciones propuestas han sido sugeridas por la Defensoría General, y constituyen cargos cuya enumeración fue olvidada en ocasión de la redacción originaria del dictamen que consideramos.

Se trata de modificaciones estrictamente formales y tienen que ver con la incorporación de cargos que no lo habían sido.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 72 con las modificaciones propuestas.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncian y aprueban los artículos 73 a 75 del dictamen.

— El artículo 76 del dictamen es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Alasino. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Alasino. — Señor presidente: antes de que se levante la sesión, propongo...

— Varios señores senadores abandonan sus bancas.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega a los señores senadores que tomen asiento.

Debemos votar la inserción solicitada. Son sólo dos minutos...

Sr. Alasino. — A los efectos de no cambiar el orden en que se viene desarrollando la sesión, propongo que, en lugar de levantarla, pasemos a cuarto intermedio.

Digo esto porque tenemos un plan de labor acordado desde hace dos reuniones y sería

¹ Ver el Apéndice.

bueno que lo siguiéramos a fin de que podamos cumplirlo...

Sr. Presidente (Menem). — En primer lugar, corresponde votar la inserción solicitada.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Se procederá en consecuencia.¹

7

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Presidente (Menem). -- Seguidamente, corresponde votar la moción de cuarto intermedio...

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Branda. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Comparto la moción formulada por el señor presidente del bloque justicialista, de pasar a cuarto intermedio y que continuemos con los órdenes del día pendientes de tratamiento, entre ellos el referido a obras sociales universitarias y otros largamente demorados. Esto no quiere decir que en la próxima reunión de labor parlamentaria no incorporemos nuevos pedidos de preferencia o de sobre tablas.

Sr. Presidente (Menem). -- Lo cual significa, en buen romance, que se va a cambiar de nuevo

el plan de labor respetando el orden de los temas ya existentes.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Massat. — Señor presidente: creo que fue clara la moción del señor senador Alasino así como lo dicho por el señor senador por Mendoza. Las dos cosas se pueden compatibilizar. El presidente del bloque justicialista dijo...

Sr. Presidente (Menem). — Lo entendí bien.

Sr. Massat. — ...que se continúe con el tratamiento de los órdenes del día tal cual ya fue acordado. Además, se podrá discutir la inclusión de preferencias y de sobre tablas a solicitar, pero sin alterar de ninguna manera el orden de tratamiento acordado de los órdenes del día.

Sr. Presidente (Menem). — Pero hay que confeccionar un nuevo plan de labor para incorporar otros temas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de cuarto intermedio.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda aprobada. Se pasa a cuarto intermedio.

—Es la 0 y 12 del jueves 7 de noviembre de 1996.